Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 03 de mayo de 2024

OFICIO Nº 094 -2024 -PR

Señor
ALEJANDRO SOTO REYES
Presidente del Congreso de la República
Presente. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de URGENTE, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente,

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ
Ministro de Defensa encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros

Proyecto de Ley

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos; mejora de la calidad de la inversión pública; fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado; reducción de costos de transacción; acceso y competencia en servicios financieros; equilibrio fiscal; modernizar el sistema tributario; política criminológica y penitenciaria; desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay; y en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital; por el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 2. Finalidad de la Ley

La presente Ley tiene por finalidad impulsar la reactivación económica, simplificación de procesos, reforma de la gestión de la actividad empresarial, modernizar el sistema tributario para regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, perfeccionar el régimen tributario de las empresas de menor tamaño; así como perfeccionar las herramientas legales y administrativas a fin de hacer más eficiente la recaudación; fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria; reducir los riesgos de futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencia; y dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administradas por la SUNAT.

Artículo 3.- Materias de la delegación de facultades legislativas

En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias:

En materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos

3.1.1. Simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible.

3.1.2. Modificar el Decreto Legislativo N° 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).

3.1.3. Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente:

a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos.

b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; exoneración de responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que participan en los procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

c) Ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional.

d) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.

3.1.4. Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos; a fin de regular su alcance, marco institucional y mejora de procesos, garantizando la eficiencia y la predictibilidad en el desarrollo de cada una de las fases; e incorporar actividades de alto interés social o para la prevención y atención de emergencias, que atiendan necesidades de la población, que actualmente no se consideran inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.1.5 Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones

desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dichas medidas comprenden los siguientes temas:

a) Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación.
b) Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos.
c) Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.

3.1.6 Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en función al grado de complejidad de la materia.

3.1.7 Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

3.1.8 Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.1.9 Fortalecer el marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.

3.1.10 Establecer disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.

3.1.11 Modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos, estableciendo disposiciones para disminuir los plazos para el pronunciamiento, en el caso de expedientes reingresados.

3.1.12 Modificar el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE).

3.1.13 Aprobar mejoras regulatorias en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica con el objetivo de incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica y promover una mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica para el suministro de los usuarios regulados, a fin de contar con energía eléctrica a menor costo y menos contaminante, lo que contribuirá a reducir las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.

3.1.14 Modificar el artículo 2 de la Ley N° 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrogeno verde.

3.1.15 Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica nacional para la implementación y operación de Plantas Petroquímicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes.

3.1.16 Modificar los artículos 8, 9, 14, 15, y 18 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, y artículos conexos para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.

3.1.17 Fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional.

3.1.18 Fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.

3.1.19 Modificar la Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.

3.1.20 Ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.

3.1.21 Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.

3.1.22 Derogar la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.

3.1.23 Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

3.1.24 Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que facilite la inversión pública y privada.

3.1.25 Facultar al Ministerio de Cultura para crear una nómina de especialistas encargados de realizar acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios, en el marco de la promoción de las inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

3.1.26 Establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno, contemplando acciones de garantía, respeto y valoración de la diversidad cultural que permita construir una ciudadanía intercultural.

Proyecto de Ley

3.1.27 Autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos. La promoción de la visita tendrá especial énfasis en los Sitios del Patrimonio Mundial que por sus características únicas son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Cultura.

3.1.28 Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión público o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor.

3.1.29 Reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura a nivel nacional.

3.1.30 Establecer un marco normativo para promover que la atención de las entidades públicas se brinde en el idioma local para los hablantes de lenguas indígenas u originarias, en ámbitos con predominancia lingüística.

3.1.31 Establecer estímulos económicos para incentivar la investigación en arqueología y otros ámbitos culturales relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble y mueble; y, la investigación sobre las artes, sobre la industria audiovisual y cinematográfica, y, sobre el libro y la lectura; con cargo a los estímulos económicos aprobados por Decreto de Urgencia 022-2019.

3.1.32 Regular el marco normativo para promover el sector artístico y creativo, considerando mecanismos de promoción y posicionamiento de los artistas y creadores.

3.1.33 Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural.

3.1.34 Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta; así como, eliminar la necesidad de promulgar una Ley expresa para su disolución.

3.1.35 Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

3.1.36 Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen, de manera simplificada, ágil, eficaz y eficiente.

3.1.37 Optimizar el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando las condiciones a cumplir en relación al plazo máximo de adecuación establecido, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental aplicable y medidas complementarias de simplificación, promoción e impulso integral de la adecuación progresiva.

3.1.38 Establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.

3.1.39 Fortalecer y modernizar la gestión del Instituto del Mar del Perú – IMARPE.

3.1.40 Modificar la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.

3.1.41 Modificar los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 13 e incorporar la Quinta Disposición Complementaria Final en el Decreto Legislativo Nº 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, a fin de establecer las condiciones habilitantes para el impulso de la inversión privada y pública en infraestructura productiva industrial.

3.1.42 Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

3.1.43 Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento.

3.1.44 Establecer medidas de simplificación administrativa al marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas, a fin que se mejore y agilice el procedimiento actual.

3.1.45 Aprobar la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley N° 28036, a fin de fortalecer el marco regulatorio del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y promover la mejora de la prestación de los servicios públicos para la práctica del deporte en beneficio de la población en general.

3.1.46 Modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.

3.1.47 Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.

3.1.48 Establecer el marco normativo para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias, mediante su adaptación, de manera preventiva, para garantizar su continuidad operativa, a través de la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la

entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.

3.1.49 Modificar el numeral 4.6 del artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, referidos a la nómina de especialistas para ejercer las funciones de revisión de estudios de impacto ambiental y supervisión y/o acompañamiento de la línea base y opiniones técnicas, según corresponda, a fin de fortalecer, agilizar y reducir los tiempos de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

3.1.50 Permitir afiliar a la IAFAS SIS, bajo el Régimen de Financiamiento Subsidiado, independientemente de la clasificación socioeconómica, a todas las personas residentes en el Perú y a todos los peruanos residentes en el exterior que se encuentren en el territorio nacional y, que no cuenten con ningún seguro de salud, brindándoles la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS y Planes Complementarios a cargo de la IAFAS SIS, así como la cobertura del listado de enfermedades de alto costo, el listado de enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo a cargo de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud Fondo Intangible Solidario de Salud – IAFAS FISSAL.

3.1.51 Fortalecer la regulación sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Perú.

3.1.52 Modificar la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para incorporar la obligatoriedad de la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como condición, para obtener la autorización para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan interponer la demanda contenciosa administrativa ante resoluciones que emita la Sala en materia de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI, así como eliminar el requisito de que dicha autorización sea aprobada en el Consejo de Ministros.

3.1.53 Modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para i) establecer las definiciones y alcance de los mecanismos de participación de la ciudadanía como parte de los derechos inherentes a la persona; ii) establecer el

marco normativo que regule la gestión integral de los mecanismos de participación de la ciudadanía; así como, iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio; a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado, asegurando la participación de las entidades y empresas públicas y privadas que forman parte de la cadena de valor desde la mirada de las personas en el territorio.

3.1.54 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, garantizando el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP, a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados.

3.1.55 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, a través de la optimización del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la idoneidad y la actuación independiente e imparcial de la secretaría técnica del procedimiento administrativo disciplinario, el debido procedimiento y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias.

3.1.56 Modificar el Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para: i) Precisar los efectos ante el incumplimiento de no haber efectuado un ACR, ii) Fortalecer el rol de los actores y su articulación con el ecosistema de calidad regulatoria, iii) Restringir los supuestos de excepciones para la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria, iv) Fortalecer los mecanismos de trasparencia de la información que se genera en el ciclo regulatorio; y, v) Fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

3.1.57 Facultar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para el uso de herramientas tecnológicas en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y acceso a información de datos personales y metadata, a fin de garantizar que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan contar con la prestación continua del servicio contratado.

3.1.58 Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado a un plazo de 30 días hábiles, como una excepción al plazo general establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.

3.1.59 Modificar la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, orientada a la mejora de la gestión regulatoria.

3.2 En materia de mejora de la calidad de la inversión pública

3.2.1 Fortalecer el diseño del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para garantizar su finalidad y asegurar mejores niveles de calidad en la inversión pública.

3.2.2 Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Proyecto de Ley

3.2.3 Ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.

3.2.4 Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.

3.2.5 Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de optimizar sus disposiciones y facultar a las entidades a utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.

3.2.6 Modificar el artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la Gestión del Riesgo de Desastres.

3.2.7 Modificar el Decreto Legislativo N° 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación Marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.2.8 Se autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.

3.3 En materia de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado

3.3.1 Modificar el Decreto Legislativo N° 206 y el Decreto Ley N° 25694, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.

3.3.2 Aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitoreo estratégico, alinear la regulación a las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, así como ordenar y sistematizar las normas de la actividad empresarial del Estado.

3.4 En materia de reducción de costos de transacción

3.4.1 Establecer medidas para facilitar la suscripción de los contratos en materia de contratación pública.

3.4.2 Modificar el literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad.

3.4.3 Modificar el artículo 2014 del Código Civil, a efectos de brindar protección al tercero registral que contrata confiando en la información publicitada en los asientos registrales.

3.4.4 Modificar los artículos 2033, 2037,2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional.

3.5 En materia de acceso y competencia en servicios financieros

3.5.1 Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.

3.5.2 Modificar el Decreto Legislativo N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que los administran.

3.5.3 Modificar la Ley Nº 29440, Ley de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, así como de fortalecer las atribuciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular los servicios e instrumentos de pago, incluyendo a los Acuerdos y Proveedores de Servicios de Pagos, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades para la interoperabilidad de los pagos inmediatos, incluyendo aspectos como las comisiones y tarifas de estos servicios, y facultades adicionales del BCRP para la administración y regulación de plataformas de servicios de pagos minoristas; y modificar el Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "Reactiva Perú", con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, para establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3.5.4 Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con:

1. Modificación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, con el propósito de ampliar el alcance y finalidades del Fondo AGROPERÚ. Esta modificación permitirá al Fondo AGROPERÚ destinar sus recursos de manera más amplia en lo siguiente:

i. Otorgar financiamiento directo.
ii. Otorgar garantías.
iii. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales, formarán parte de la estructura del financiamiento obtenido por- el pequeño productor agrario organizado y serán asumidos por este.
iv. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA

Los recursos del Fondo AGROPERÚ podrán ser usados también en gastos operativos para el cumplimiento de sus fines.

2. Modificación del numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, también pueda administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos, a fin de diversificar los operadores financieros para el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ.

3.6 En materia de equilibrio fiscal

3.6.1 Establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541.

3.6.2 Fortalecer la gestión fiscal subnacional modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo Nº 1275 y Decreto Legislativo Nº 955; estableciendo disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal, regulados por el Decreto Legislativo N°1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), a fin de mejorar la gestión de los ingresos locales.

3.6.3 Modificar el Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos.

3.6.4 Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, la Planilla Única del Sector Público, la incorporación del proceso de Planificación de Recursos Humanos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al

ámbito de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; y, otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal.

6.5 Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible; así como, asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, debiendo aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.

3.6.6 Establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria, a las reglas macrofiscales y a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la Administración Financiera del Sector Público.

3.6.7 Actualizar el Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.

3.7 En materia tributaria:

3.7.1 Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:

a.1) Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.

a.2) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

b) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de:

b.1) Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular,

las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.

b.2) Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

b.3) Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.

b.4) Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.

b.5) Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país.

b.6) Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

c) Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control.

3.7.2 Perfeccionar el tratamiento tributario de las empresas de menor tamaño a través de:

a) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; así como adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen.

b) Modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado respecto de los sujetos no comprendidos, reglas de acogimiento, categorización, cuotas mensuales, forma de pago, inclusión en el Régimen General, cambios de régimen, comprobantes de pago, presunciones, obligaciones formales,

definiciones y aplicación de percepciones y retenciones del IGV; derogar el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario – RMT; así como, adecuar el Código Tributario y demás normativa tributaria a las modificaciones indicadas; incluyendo la regulación del acompañamiento tributario.

c) Regular una deducción adicional y temporal por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la Ley N° 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas.

3.7.3 Perfeccionamiento del Sistema Tributario:

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:

a.1) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina, así como perfeccionar la determinación de la base imponible en el sistema del precio de venta al público (PVP), y los rangos mínimos y máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, específico o PVP para los bienes y servicios sujetos al impuesto.

a.2) Perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; así como, modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.

b) Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

c) Modificar el alcance de la Ley N° 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, a fin de circunscribir su ámbito de aplicación a las empresas de menor tamaño, estableciendo asimismo condiciones mínimas para que los titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.

d) Modificar el Código Tributario para:

d.1) Regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria; con el fin de que estos incentiven el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, lo que incluye modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

d.2) Adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos de contar con información suficiente para el análisis de datos para la formulación de políticas tributarias.

d.3) Agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, estableciendo, entre otros, un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria; regular supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que puedan permitir presumir que la cobranza será infructuosa a efectos de dictar medidas cautelares previas; establecer expresamente excepciones a la reserva tributaria de acuerdo con el nivel y estado de la deuda a efectos que la SUNAT pueda hacer publicaciones; adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar el cobro de la deuda tributaria; perfeccionar las reglas de la contracautela en los procesos judiciales sobre materia tributaria; modificar los plazos y las reglas que rigen en los procedimientos contenciosos tributarios para la atención oportuna de estos; modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal; así como delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

d.4) Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, en función del principio de proporcionalidad considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes; así como perfeccionar lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario.

e) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:

e.1) Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que correspondan a los directores de sociedades anónimas.

e.2) Modificar la tasa y señalar reglas para la determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.

e.3) Modificar las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal; así como modificar las disposiciones sobre los documentos que deben presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos; y las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.

e.4) Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención, lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.

e.5) Modificar la regulación de intereses. Comprende: Regular la definición de intereses de deuda, así como aquellos supuestos vinculados a las operaciones de financiamiento y gastos incurridos en relación con la obtención de financiación, así como el tratamiento de las fluctuaciones cambiarias vinculadas a las operaciones de financiamiento. Ajustar la regla del umbral mínimo establecida como excepción a la aplicación de la regla del EBITDA; e, incorporar precisiones legislativas que resultan necesarias para la adecuada aplicación de la regla del EBITDA.

e.6) Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios.

e.7) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.

f) Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de regular el acceso a información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional.

g) Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras, a fin de incorporar, entre otros, las siguientes disposiciones:

g.1) Norma antielusiva para contrarrestar los esquemas implementados para eludir los procedimientos de debida diligencia y la obligación de reporte; y

g.2) Establecimiento de una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas que ejercen el control de los mismos cuando presenten una declaración jurada falsa sobre su residencia fiscal u otra información requerida por las entidades financieras sujetas a reportar.

h) Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país.

i) Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.

3.8 Política criminológica y penitenciaria

Proyecto de Ley

3.8.1 Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas al uso de la tecnología digital.

3.8.2 Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario, regulando las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

3.8.3 Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.

3.8.4 Modificar el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria.

3.8.5 Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena.

3.8.6 Modificar el Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.

3.8.7 Modificar la Ley Nº 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y normas conexas, con el propósito de ampliar su alcance para abarcar todas las formas de delincuencia organizada, incluyendo las modalidades emergentes, que operan en nuestro territorio nacional, así como para establecer agravantes especiales y fortalecer el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) y demás herramientas que permitan hacer frente de manera más efectiva a la amenaza que representan este fenómeno criminal para la seguridad pública.

3.8.8 Dotar de mayor protección a los titulares del derecho de autor en relación a la reproducción, distribución, comunicación pública o difusión no autorizada de las obras, y sus formas agravadas.

3.9 Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay

3.9.1 Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados, así como la implementación de los instrumentos de gestión del suelo, impulsando el cierre de brechas en vivienda e infraestructura urbana para fortalecer la planificación de las ciudades y centros poblados, en especial de los centros poblados rurales, así como impulsar los instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades.

3.9.2 Autorizar que se establezcan disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.

3.10 En materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de Inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital

3.10.1 Modificar el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.

3.10.2 Establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.

3.10.3 Dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios e inmuebles de propiedad, afectados en uso, reservados para fines de Defensa Nacional y en posesión de las Instituciones Armadas, que han sido destinados para fines de Seguridad y Defensa Nacional y cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico social y en la defensa civil.

3.10.4 Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.

3.10.5 Modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas.

3.10.6 Establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de que evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

3.10.7 Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.

3.10.8 Modificar el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la

REPUBLICA DEL PERU

Proyecto de Ley

delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, también pueda acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación.

Las normas a ser emitidas en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 101, el artículo 104 y demás concordantes del texto constitucional.

Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación.

En Lima, a los

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ
Ministro de Defensa
Encargado del despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministras

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

I. FUNDAMENTOS

A nivel de contexto internacional, el panorama de crecimiento económico mundial ha mejorado para 2024, favorecido por el proceso de reducción de la inflación, la solidez del mercado laboral y la resiliencia del consumo privado en un importante grupo de países, destacando a Estados Unidos (EE. UU.); sin embargo, existen riesgos que podrían afectar la actividad económica global. En efecto, en su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI)1 revisó al alza su proyección de crecimiento global para 2024 de 3,1% en ene-24 a 3,2% en abr-24, por una mejor proyección para EE. UU. (de 2,1% en ene-24 a 2,7% en abr-24) ante la resiliencia del consumo privado y la solidez del mercado laboral en dicho país; y también por una mayor expectativa de crecimiento para India (de 6,5% en ene-24 a 6,8% en abr-24) gracias a la fortaleza de la demanda interna y el aumento de la población en edad de trabajar, de Rusia (de 2,6% en ene-24 a 3,2% en abr-24) dada la resiliencia de las exportaciones de petróleo, y de América Latina (de 1,9% en ene-24 a 2,0% en abr-24) por las mejores expectativas para Brasil. Del mismo modo, el Banco Central de Reserva del Perú en mar-24 revisó al alza su proyección de crecimiento del PBI mundo para 2024 de 2,7% en dic-23 a 2,8% en mar-24, impulsado principalmente por las mejores perspectivas para EE.UU. e India, pero con revisiones a la baja para China y América Latina. Cabe señalar que, pese a las mejores expectativas de crecimiento para el presente año, el entorno internacional aún es muy desafiante ya que se tienen una serie de riesgos como la persistencia de una inflación elevada, endurecimientos monetarios, catástrofes climatológicas, limitación de espacios fiscales, tensiones geopolíticas, entre otros, que podrían ralentizar la actividad económica global.

Respecto al contexto económico local, la actividad económica está en proceso de recuperación. Luego de la caída del PBI registrada en 2023 (-0,6%), en los dos primeros meses del año 2024 creció en promedio 2,1% (ene-24: 1,4% y feb-24: 2,8%). El incremento del PBI se explica por la disipación de choques climáticos; recuperación de la demanda interna, principalmente, asociada a mayores inversiones mineras y de infraestructura y resiliencia del consumo de los hogares, en un contexto de menores presiones inflacionarias y bajos costos de financiamiento; y mejora de la actividad turística. Además, desde el Gobierno se está trabajando en facilitar las condiciones necesarias para acelerar la ejecución de las inversiones, promover la implementación de proyectos de alto impacto y reactivar las obras paralizadas.



[1] https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2024/April/English/text.ashx

En este contexto, las expectativas de los agentes económicos siguen mejorando. Así, la mayoría (14 de 18 indicadores) de las expectativas que publica el BCRP se ubicó en el tramo optimista en marzo 2024. Incluso, seis indicadores retornaron al tramo optimista luego de permanecer hasta por tres años en el tramo pesimista; por ejemplo, las expectativas de la economía a 3 meses subieron de 47 puntos en febrero 2024 a 51 puntos en marzo 2024, el nivel más alto desde marzo 2021. En la misma línea, las expectativas empresariales de inversión y contratación para los próximos seis meses, que publica Apoyo Consultoría, continúan en el tramo optimista en marzo 2024. En particular, las expectativas de inversión para los próximos seis meses registraron un promedio de 15 puntos en el 1T2024, el nivel trimestral más alto desde el 1T2019.

Asimismo, se ha registrado una disipación de la ocurrencia del Fenómeno de El Niño (FEN). En efecto, en su más reciente comunicado, el ENFEN descartó la ocurrencia del Fenómeno de El Niño (FEN), ya que el 19 de abril de 2024, mantuvo en "No activo" el sistema de alerta de El Niño. En el comunicado, se señaló que las condiciones neutras (región Niño 1+2) predominarían en los próximos meses, luego de que la temperatura superficial del mar registró valores dentro de lo normal en las últimas semanas. Así, las condiciones neutras son más probables en mayo, seguidas de condiciones frías débiles entre junio y julio; y posteriormente, entre agosto y noviembre, retornaría al escenario neutro.

En este contexto, el mercado está revisando al alza la proyección de crecimiento del PBI para 2024. Por ejemplo, el BCP revisó su estimación del PBI para 2024 de 2,0% en diciembre 2023 a 3,0% en marzo 2024; y Apoyo Consultoría, de 2,2% en diciembre 2023 a 2,8% en marzo 2024. En la misma línea, el Banco Mundial ajustó al alza su proyección del PBI para 2024 de 2,5% en enero 2024 a 2,7% en abril 2024.

Sin embargo, existen múltiples factores de riesgo que podrían afectar el crecimiento de la actividad económica en 2024. Entre los riesgos internacionales más destacados se tienen los siguientes: i) escalamiento de tensiones geopolíticas en Medio Oriente; ii) persistencias de presiones inflacionarias en niveles elevados; iii) mayor endurecimiento de las tasas de política monetaria; y iv) ralentización de la actividad económica de China que incidiría en una menor demanda de materias primas, entre ellos el cobre, de países emergentes como Perú. A nivel local, los factores de riesgo que podrían afectar la recuperación de la actividad económica son los siguientes: i) la ocurrencia e intensificación de las sequias sobre todo en el sur del país; ii) reinicio de protestas sociales e inestabilidad política, y ii) lenta recuperación de las expectativas de inversión.



Es importante mencionar que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Así, según la evidencia empírica, el incremento de la inseguridad y criminalidad podría afectar de forma negativa la actividad económica. Por ejemplo, Loayza, Lederman y Fajnzylber (2002), demuestran que un aumento en la tasa de homicidios puede reducir 1,2 p.p. el crecimiento del PBI per cápita. Detotto y Otranto (2010), indican que un aumento del 1% en la tasa de criminalidad puede reducir 0,02 p.p. el crecimiento del PBI regional. Además, Reynolds et al. (2004) mencionan que empresas víctimas de delitos experimentan una disminución en su crecimiento anual de hasta 6 p.p. en comparación con aquellas que no afectadas por la criminalidad. Además, en Perú,

según información del SIDPOL[2], se registraron 51 987 denuncias que vienen incrementándose considerablemente desde febrero 2022, alcanzando su pico en octubre 2023 con 60 089 denuncias, por encima de los niveles pre pandemia. En este contexto, urge la importancia inmediata de implementar políticas integrales de seguridad ciudadana que promuevan un entorno seguro para la inversión y desarrollo económico social.

Por su parte, la formulación y ejecución de proyectos en diversos sectores es esencial para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y mejorar la competitividad. Desde la construcción de infraestructura hasta la implementación de programas sociales, los proyectos generan beneficios directos, impulsando la inversión público-privada y fomentando una cultura de innovación tecnológica. Según el BID (2000)[3], la disponibilidad de infraestructura de calidad reduce la vulnerabilidad de personas de bajos ingresos y mejora su acceso a mejores oportunidades. En particular, proyectos relacionados con infraestructura de transporte, telecomunicaciones y energía generan una mayor integración regional, reduciendo los costos logísticos y mejorando la productividad (Straub, 2008). En conjunto, estos hallazgos subrayan la importancia estratégica de impulsar los proyectos como un motor del desarrollo económico y social. En ese sentido, desde el Gobierno estamos impulsando un conjunto de medidas para fomentar un ambiente favorable para las inversiones. Prueba de ello, es que actualmente hay un proceso de recuperación de las expectativas económicas, se están adjudicando mayores proyectos bajo la modalidad APP, se están generando condiciones para continuar impulsando las inversiones y exploraciones mineras. Además, de un mayor impulso a la industria portuaria como el desarrollo del Megapuerto de Chancay. Así, es fundamental continuar con el desarrollo de proyectos de infraestructura, promover un ambiente favorable para la inversión, expandir las asociaciones público-privadas y dinamizar la inversión pública de calidad para garantizar un desarrollo sostenible de largo plazo.

En relación a la situación fiscal del país, en 2023, el conjunto de choques adversos en 2023 (Ciclón Yaku, Fenómeno del Niño, protestas sociales, menores precios de exportación), configuró un escenario retador para las finanzas públicas, especialmente para los ingresos fiscales, con lo cual el déficit fiscal se situó en 2,8% del PBI, por encima de su regla fiscal (2,4% del PBI). El desvío del déficit fiscal se explicó por la caída histórica de los ingresos fiscales tras el impacto negativo de choques que afectaron la economía en una magnitud mayor a la esperada.

Así, los ingresos del gobierno general disminuyeron 10,5% real en 2023, la mayor caída de los últimos 20 años (excluyendo el periodo de la pandemia) y se ubicaron en 19,7% del PBI, menor en 2,3 p.p. del PBI respecto del 2022. El desempeño de los ingresos en 2023 fue menor inclusive que en la crisis financiera (2009: -10,2% real) y el FEN de 2017 (+0,6% real). Dicha caída se explica por los efectos de la conflictividad social y la persistencia de fenómenos climatológicos. A ello se sumaron factores puntuales como la reducción de los coeficientes de pagos a cuenta del IR de 3ra categoría y el mayor uso de saldos a favor compensados contra los pagos mensuales de dicho impuesto. Además, se brindaron medidas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

[2] Se utiliza la base de datos total de denuncias por hechos delictivos (TEMP3) del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. https://observatorio.mininter.gob.pe/proyectos/base-de-datos-hechos-delictivos-basados-en-denuncias-en-el-sidpol

[3] https://publications.iadb.org/es/publicacion/14942/un-nuevo-impulso-la-integracion-de-la-infraestructura-regional-en-america-del-sur

de alivio tributario a favor de los contribuyentes más afectados por el contexto de emergencia climática (reducción del IGV al sector turismo, las facilidades de pago de impuestos en zonas afectada, la liberación de las detracciones, entre otras medidas).

Se debe señalar, que durante el periodo 2020-2023 se registraron déficits fiscales por encima de su regla fiscal de mediano plazo (1,0% del PBI). De esta manera, el déficit fiscal fue equivalente a 8,9% del PBI en 2020; 2,5% del PBI en 2021; 1,7% del PBI en 2022 y 2,8% del PBI en 2023. En ese sentido, se requieren adoptar diversas medidas fiscales para retornar al cumplimiento de la regla de mediano plazo relacionadas a incrementar los ingresos fiscales y optimizar la eficiencia del gasto público. Asimismo, se requiere establecer una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal para los siguientes años

II. MEDIDAS MATERIA DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos; mejora de la calidad de la inversión pública; fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado; reducción de costos de transacción; acceso y competencia en servicios financieros; equilibrio fiscal; modernizar el sistema tributario; política criminológica y penitenciaria; desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay; y, en materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de Inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital; por el plazo de noventa (90) días calendario, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

En el marco de la delegación de facultades, se propone:

II.1. En materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos



II.1.1 Simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible

Se identifica como problema público es el incumplimiento de plazos legales para la atención de procedimientos administrativos con silencio administrativo negativo (SAN), que son condición necesaria para la operatividad empresarial y realización de inversiones en diversas actividades económicas y de todo tamaño de empresa; lo que se refleja en desincentivos para invertir y crecer, deteriorando la productividad, la competitividad y la capacidad de creación de empleos de la economía peruana.

Como muestra de la necesidad de simplificación de trámites en el país, el Foro Económico Mundial identifica al Perú como uno de los 15 países con mayor carga burocrática para los negocios a nivel mundial, problemática a la cual contribuye el obstáculo al crecimiento de actividades productivas por efecto de no atención de trámites con SAN.

Por ello, se requiere una norma con rango de ley con la finalidad de proveer una base legal de naturaleza especial (por la especialidad de las materias y actividades económicas específicas a regular) que coexista con la LPAG (Ley 27444) y habilite la modificación de SAN a silencios administrativos positivos (SAP) para un conjunto de procedimientos administrativos críticos para la operatividad empresarial, los cuales por la naturaleza de la actividad económica específica y/o tamaño de empresa, inversión u operación objeto del trámite por el agente del sector privado solicitante, no comprometan el interés público.

En específico, se propone establecer lineamientos y criterios objetivos de forma técnica, según la naturaleza de la actividad económica específica, y/ o el tamaño de empresa, de inversión u operación objeto del trámite por el agente del sector privado solicitante, cuyos procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa cuenten con SAP.

La medida resulta necesaria para reactivar la economía y promover las actividades empresariales a través de medidas de alcance general que impulsen la competitividad y el crecimiento económico, creando puestos de trabajo formales, a nivel nacional y de forma descentralizada.

II.1.2 Modificar el Decreto Legislativo N° 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF)

En la actualidad, la capacidad del CAF Santa Rosa ha sido superada debido al incremento del flujo de personas (turistas) y medios de transporte, resultando necesaria la realización de modificaciones y ampliaciones en su infraestructura que permitan brindar servicios modernos y de calidad en el menor tiempo posible.

Se debe indicar que este incremento trae consigo una serie de inconvenientes, tales como:

- Largas colas en el ingreso al centro de atención fronteriza.
- Demoras en los tiempos de atención, generando desincentivo en los turistas chilenos para visitar la ciudad de Tacna.
- Disminución de ingresos económicos por concepto de turismo.
- Demora en la atención de los vehículos con carga de importación.

Evaluadas las competencias para realizar las ampliaciones y mejoras citadas, se tomó en cuenta la existencia de un vacío legal, puesto que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la SUNAT ostentan la facultad para desarrollar este tipo de proyectos de inversión pública.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1183, la SUNAT solo tiene competencia para mantener y operar los centros de atención fronteriza ya creados (artículo 4 inciso c), mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo podría avocarse a la creación de estos (artículo 3.1).

En tal sentido, se ha considerado necesario proponer la modificación del Decreto Legislativo 1183, a fin de desarrollar un tratamiento integral respecto a estos centros de atención, sobre la base del conocimiento técnico operativo y la experiencia.

La propuesta legal contemplaría lo siguiente:

- Asignación de competencias a la SUNAT para crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).
- Precisiones normativas de carácter presupuestarias para el cumplimiento de las acciones indicadas.

II.1.3 Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público privada, conforme a lo siguiente:

a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos.
b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; exoneración de responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que participan en los procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.
c) Ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional.
d) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.



La implementación de medidas normativas resulta necesaria ante los persistentes desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura, que se originan principalmente por: i) múltiples dificultades en el cumplimiento de requisitos y en la tramitación de títulos habilitantes para el desarrollo de proyectos de infraestructura, así como regulación contradictoria entre los diferentes niveles de gobierno, requisitos innecesarios, procedimientos administrativos disímiles o desactualizados para entidades del mismo nivel de gobierno, o arbitrariedades en la emisión de los referidos títulos y exigibilidad de

requisitos; y, ii) deficiente adquisición de terrenos y liberación de interferencias, lo cual ocasiona retrasos en los cronogramas de obras y sobrecostos en los proyectos de infraestructura.

En ese marco, se requiere una norma con rango de ley, en tanto que las medidas a impulsar comprenden la modificación de la normativa de determinados sectores (transportes, saneamiento, energía, electricidad, portuario, entre otros), con la finalidad de optimizar los requisitos, plazos y procedimientos para impulsar el avance en la obtención de títulos habilitantes y otros requisitos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. De igual manera, respecto a las medidas de adquisición de terrenos y liberación de interferencias, se requiere la modificación del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, —que regula dicha materia para la ejecución de obras de infraestructura— y otras normas vinculadas, a efectos de establecer mejores herramientas en normas con rango de ley, para solucionar la problemática predial existente. Por otro lado, establecer medidas para impulsar la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones.

Cabe precisar que las medidas propuestas se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

II.1.4 Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos; a fin de regular su alcance, marco institucional y mejora de procesos, garantizando la eficiencia y la predictibilidad en el desarrollo de cada una de las fases; e incorporar actividades de alto interés social o para la prevención y atención de emergencias, que atiendan necesidades de la población, que actualmente no se consideran inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

La medida propuesta requiere la promulgación de una norma con rango de ley que regule el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), a efectos de ordenar y optimizar el marco normativo existente constituido por la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la participación del Sector Privado; y su Reglamento. Cabe destacar que el mecanismo de OxI ha representado un importante herramienta para el desarrollo de —principalmente— proyectos de inversión, garantizando la entrega adecuada y oportuna de infraestructura; sin embargo, el mecanismo ha pasado por un constante cambio normativo (la Ley N° 29230 ha sido modificada en nueve oportunidades) por lo que existen disposiciones que hacen más dispersa su regulación, lo cual dificulta su adecuada aplicación de parte de las entidades del sector público y privado.

Adicionalmente, la propuesta normativa busca ampliar el alcance del mecanismo de OxI con la finalidad de atender las necesidades más urgentes de la población que requieren acciones inmediatas y continuas. Por ello, se busca ampliar el alcance de las intervenciones a través de este mecanismo, especialmente cuando están dirigidas a abordar actividades que tengan como finalidad la

provisión de servicios sociales, así como la prevención y la atención de emergencias decretadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que las medidas propuestas se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

II.1.5 Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dichas medidas comprenden los siguientes temas:

a) **Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación.**
b) **Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos.**
c) **Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.**

El desarrollo de proyectos de APP presenta una problemática vinculada – entre otros – a un alto índice de retraso en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de inversión bajo las modalidades de APP y PA, afectando la reducción de la brecha de infraestructura pública. Así, con el objetivo de agilizar la adjudicación de proyectos de inversión que contribuyan con la reactivación de la economía, así como evitar problemas en su ejecución, se requiere establecer medidas para fortalecer el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de APP y PA; así como optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).

Las medidas propuestas tienen la finalidad de impulsar y dinamizar el desarrollo de proyectos de APP y PA, regulados mediante el Decreto Legislativo Nº 1362[4], así como otras normas complementarias, considerando la relevancia del impulso de la implementación de los proyectos de APP y PA como instrumento que coadyuve en la reactivación económica del país y el cierre de brecha de infraestructura.

[4] Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos

En línea con lo señalado, cabe señalar que los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP) son instrumentos de gran relevancia para el fortalecimiento de la gobernanza y la mejora en la gestión de los proyectos de APP, dirigidos al aseguramiento de la disponibilidad de infraestructura pública y efectiva prestación de los servicios públicos en beneficio de los usuarios y de la población en general.

Bajo dicho contexto, las presentes medidas comprenden disposiciones dirigidas a la implementación efectiva de los OEGEP, garantizando y promoviendo su adecuado funcionamiento y operativización, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1543, Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar la gestión de proyectos y los procesos de Promoción de la inversión privada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 211-2022-EF. Cabe precisar que las referidas medidas no implican la redistribución, reasignación o modificación de competencias a cargo de las entidades públicas titulares de proyectos.

Asimismo, también se ha previsto el impulso de medidas dirigidas al fortalecimiento del rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación. En adición a lo antes indicado, también se incluye la regulación de medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos bajo la modalidad de APP y PA.

II.1.6 Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en función al grado de complejidad de la materia.

La propuesta normativa requiere una norma con rango de Ley dado que propone establecer un régimen especial al dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), para la atención de los recursos administrativos interpuestos ante la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en los procedimientos administrativos sancionadores a su cargo. Ello redundará en la emisión de resoluciones con una evaluación y fundamentación más profunda, lo cual conllevará a que los administrados tengan menos incentivos para interponer recursos de apelación o acciones contencioso - administrativas ante el Poder Judicial.

La urgencia de la medida se evidencia en la necesidad de alinear los plazos de la SMV en forma similar a los considerados por otros organismos (INDECOPI, OEFA, SUNAT y Contraloría General de la República), que ya cuentan con periodos más extensos debido a la complejidad de los casos que manejan,

asegurando así una administración efectiva y eficiente de la justicia administrativa.

II.1.7 Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

El IntegrAmbiente se creó con el fin de promover que los titulares en un solo procedimiento obtengan su Certificación Ambiental y 14 títulos habilitantes, siendo que desde el 2016 hasta el 2024, es decir en 9 años, sólo 8 proyectos han sido evaluados y aprobados por este procedimiento, los cuales son:

- Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Central Térmica Humay
- Estudio de Impacto Ambiental detallado del Lote 131
- Estudio de Impacto Ambiental detallado del Lote 58
- Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Río Seco
- Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Zafranal
- Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado de la ampliación de la zona operativa portuaria – etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Lote 31-C
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Lote 88

Esto debido a que en la Ley se limita a un número determinado de títulos habilitantes, generando pérdida de grandes inversiones, teniendo en cuenta que los proyectos de inversión que son necesarios para el desarrollo sostenible del país y el cierre de brechas, son carreteras, hospitales, aeropuertos, saneamiento, electrificación, así como proyectos productivos y extractivos, que incluye los diversos proyectos mineros que son uno de los motores de crecimiento económico, así como los proyectos APP, entre otros.

Asimismo, los proyectos de inversión una vez que obtienen la Certificación Ambiental, los titulares deben gestionar los demás permisos, licencias, autorizaciones y otros requerimientos para su ejecución, no permitiendo la Ley que se puedan realizar de manera paralela.

De igual manera, cuando se realiza el acompañamiento a la línea base se formulan recomendaciones u observaciones que son reiterados en la evaluación del estudio ambiental, a pesar de haber sido considerado, incurriéndose en costos negativos para el Estado, así como para los titulares, toda vez que no tiene una naturaleza vinculante.

Para tal efecto, se busca optimizar los procesos y procedimientos de IntegrAmbiente para que los proyectos de inversión puedan tramitar de manera simultánea sus títulos habilitantes, es decir que sea paralelo a la evaluación de impacto ambiental, así como integrar otros títulos habilitantes a la certificación ambiental por su naturaleza, y aquellos que no se puedan, se evalúen de manera paralela.

De esta manera, se reducirá considerablemente el tiempo para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión, lo cual contribuirá con una reactivación económica.

En ese sentido, realizar estos cambios normativos contribuye con la ejecución oportuna de los proyectos de inversión sin desnaturalizar la calidad técnica de los estudios ambientales, lo cual es concordante con el cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en la Política Nacional del Ambiente referido a la gobernanza ambiental, considerando que al 30.03.2024, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) tiene en evaluación 106 proyectos de inversión, los cuales representan una inversión total de aproximadamente 14 mil millones de dólares, de los cuales 55 proyectos que representan 13 190 millones de dólares corresponden a los sectores agricultura, minería, hidrocarburos y electricidad; y, 51 proyectos que representan 810 millones de dólares corresponden a proyectos de infraestructura como transportes y gestión de residuos sólidos, entre otros.

Asimismo, se esperan nuevos proyectos mineros por montos de 6 700 millones de dólares y de APP por montos mayores a 25 000 millones de dólares lo cual dinamizará la economía nacional.

Finalmente, respecto del financiamiento, el presente proyecto normativo no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, toda vez que serán financiados con cargo al presupuesto institucional asignado a las entidades de la administración pública previstas en el artículo I del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, según corresponda.

II.1.8 Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Teniendo en consideración que la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) data del año 2001, y este se constituye en un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que sean susceptibles de causar impactos ambientales negativos significativos; y, regula la debida aplicación de los criterios, instrumentos y procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, resulta necesario optimizar los procesos y criterios del SEIA que conlleven al cumplimiento de plazos legales, debido a que ésta ley necesita ser actualizada para generar predictibilidad y seguridad jurídica y celeridad en la evaluación de impacto ambiental con el fin que los proyectos se ejecuten de manera oportuna.

Los proyectos de inversión que son necesarios para el desarrollo sostenible del país y el cierre de brechas, ya sean carreteras, hospitales, aeropuertos, saneamiento, electrificación, así como proyectos productivos y extractivos, que incluye los diversos proyectos mineros que son uno de los motores de crecimiento económico, así como los proyectos APP, entre otros, no pueden

ejecutarse en tiempos razonables puesto que existe una demora excesiva en la tramitología.

Teniendo en cuenta la antigüedad de esta norma, está causando que el inicio de la ejecución de los proyectos sea tardío y no se cumpla con los plazos establecidos en la Ley, lo cual no contribuye con la reactivación económica, el cierre de brechas ni con el desarrollo sostenible.

Por ejemplo, se advierten los siguientes casos:

- Mediante Resolución Directoral N° 0145-2021-MINEM/DGAAE de fecha 3 de agosto de 2021, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto "Central Hidroeléctrica Oco 2010" presentado el 13 de junio de 2014.
- Mediante Resolución Directoral N° 0027-2021-SENACE-PE/DEAR del 12 de febrero de 2021 se otorgó la conformidad a la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Las Bambas, presentado por Minera Las Bambas S.A. el 31 de mayo de 2017.
- Mediante Resolución Directoral N° 00031-2020-SENACE-PE/DEAR del 12 de febrero de 2020 se otorgó la conformidad a la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de Sísmica 2D y Perforación de pozos Exploratorios en el Lote 95, de PetroTal Perú S.R.L., presentado el 05 de junio de 2017.
- Mediante Resolución Directoral N° 00076-2022-SENACE-PE/DEAR del 16 de mayo de 2022 se otorgó la conformidad a la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental "Modificación de los componentes de la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila", presentado por Kallpa Generación S.A. el 20 de diciembre de 2018
- Mediante Resolución Directoral N° 00101-2020-SENACE-PE/DEAR, del 02 de setiembre del 2020, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Minero El Padrino, presentado por Nexa Resources Perú S.A.A, el 29 de octubre del 2018.
- Mediante Resolución Directoral N° 00120-2023-SENACE-PE/DEAR, del 06 de setiembre del 2023, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Yumpag Carama, presentado por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., el 01 de julio del 2021.
- Mediante Resolución Directoral N° 00104-2023-SENACE-PE/DEAR, del 01 de agosto del 2023, se aprobó la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la unidad minera Inmaculada, presentado por Compañía Minera Ares S.A.C., el 26 de julio del 2021.
- Mediante Resolución Directoral N° 00027-2024-SENACE-PE/DEAR, del 14 de febrero del 2024, se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la unidad minera Antamina, presentado por Compañía Minera Antamina S.A., el 12 de abril del 2022.



En ese sentido, realizar estos cambios normativos contribuye con la ejecución oportuna de los proyectos de inversión sin desnaturalizar la calidad técnica de los estudios ambientales, lo cual es concordante con el cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en la Política Nacional del Ambiente referido a la gobernanza ambiental, considerando que al 30.03.2024, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) tiene en evaluación 106 proyectos de inversión, los cuales representan una inversión total de aproximadamente 14 mil millones de dólares, de los cuales 55 proyectos que

representan 13 190 millones de dólares corresponden a los sectores agricultura, minería, hidrocarburos y electricidad; y, 51 proyectos que representan 810 millones de dólares corresponden a proyectos de infraestructura como transportes y gestión de residuos sólidos, entre otros.

II.1.9 Fortalecer el marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.

La legislación migratoria vigente no dispone expresamente la exoneración de visas a través de decisiones unilaterales. Si bien el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones establece que, el MRE es la autoridad en materia migratoria externa, además de ejercer competencias en materia migratoria interna según la normativa vigente, se hace necesario contar con una cobertura legal expresa en el ejercicio de la potestad constitucional que tiene el Presidente de la República, la misma que se ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. (numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú).

Actualmente, el MRE otorga calidades migratorias a ciudadanos extranjeros que ingresan al país en cumplimiento de funciones por encargo de su gobierno u organismos internacionales, así mismo a expertos o voluntarios que vienen a realizar actividades de asistencia social, humanitaria, entre otros, dentro del marco de la cooperación internacional, también a quienes realizan actividades de intereses para el Estado peruano o son invitados a eventos oficiales, además de periodistas, personal técnico y artístico que contribuyen a visibilizar nuestro país y sus diferentes regiones a nivel internacional, así como la calidad de servicio ofrecido por los diferentes sectores del Estado Peruano. Los referidos ciudadanos han presentado inconvenientes cuando se han excedido del tiempo de permanencia otorgado, ya que no han podido acceder a un procedimiento de regularización, y solo les queda como opción la salida del país, pagar la multa impuesta por Migraciones y volver a ingresar. En este punto y a fin de que estos ciudadanos accedan a dicho procedimiento, se hace necesario establecer la atribución del MRE para realizarlo, ya que la legislación vigente no lo contempla. Asimismo, también se deberá incluir para el MRE la potestad sancionadora, a efectos de poder imponer la multa que corresponda.

Respecto al carné de identidad que expide el MRE, viene presentando problemas para su reconocimiento ante instituciones públicas y privadas, por lo cual se hace necesario modificar el numeral 15.1 y señalar el nombre asignado a este documento oficial, así como incorporar un artículo donde se brinde la definición, sus características y efectos jurídicos.

II.1.10 Establecer disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.

En la actualidad el Decreto Ley N° 18093, que crea el cargo de traductor público para documentos del servicio y uso de particulares, modificado por el Decreto Legislativo N° 712 legisla de manera insuficiente los elementos relacionados con la gestión del servicio de traducciones oficiales alice cargo de traductores públicos juramentados, las mismas que son exigidas por otras entidades públicas y privadas. Por ello, el presente proyecto impactará positivamente en la gestión del referido servicio (mejora en los tiempos de atención, calidad y costos de las traducciones, mayor seguridad jurídica, con la adecuada acción fiscalizadora y sancionadora).

La ley actual no da el marco para los requisitos, condiciones del proceso de selección y ratificación, las funciones y la potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados.

II.1.11 Modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos, estableciendo disposiciones para disminuir los plazos para el pronunciamiento, en el caso de expedientes reingresados.

La propuesta está dirigida a que las instituciones encargadas de emitir licencias de construcción (municipalidades), autorizaciones y derechos de uso de vía (PROVIAS), así como de área acuática (DICAPI), emitan su dictamen en un plazo razonable en el caso de que el expediente de solicitud haya sido revisado más de una vez, con el objetivo de evitar que esto afecte y retrase el inicio de la ejecución de la obra.

Según los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de estas instituciones, como la Municipalidad de Lima (para la concesión de licencias de construcción), PROVIAS NACIONAL (para el uso de derechos de vía) y DICAPI (para el uso de derechos de área acuática), el plazo máximo para su dictamen es de 30 días hábiles, el cual también es aplicado para los expedientes que hayan sido observados, habiendo reingresado en más de una oportunidad en el lapso de un año, que en muchas ocasiones se extiende aún más.

Sin embargo, considerando que estas instituciones ya tienen conocimiento de la solicitud y la naturaleza de la intervención, el plazo de revisión debería reducirse, permitiendo así que el proceso sea más ágil y que el inicio de la obra se produzca dentro del plazo estimado.



Se propondría modificar el plazo de los trámites establecidos en el TUPA. Estos procedimientos están respaldados por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444 artículo 39, que establece un plazo máximo de 30 días hábiles para el dictamen.

II.1.12 Modificar el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE)

Uno de los principales problemas del Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje – RENACE, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es que la inscripción a dicho registro no es obligatoria. Con ello, el RENACE no ha podido cumplir su finalidad de combatir la inseguridad jurídica y descrédito del arbitraje, debido a la proliferación de centros de arbitraje, creados sin mayor rigurosidad y en los que se han detectado diversos casos de corrupción. En ese sentido, la propuesta apunta a disponer la obligatoriedad del registro, lo que exige que todo árbitro deba inscribirse si desea prestar sus servicios en el sistema arbitral. Además, coadyuva al cumplimiento del acceso a la justicia de manera idónea y contribuye a dar seguridad jurídica en los casos cuyas controversias se dilucidan a través del arbitraje.

La propuesta no ocasiona gasto alguno el tesoro público, pues la función de registro ya viene siendo desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De otro lado, al fortalecer el sistema arbitral y promover la seguridad jurídica en este ámbito, su implementación permitirá que el arbitraje cumpla su rol constitucional de mecanismo alternativo de solución de conflictos.

II.1.13 Aprobar mejoras regulatorias en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica con el objetivo de incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica y promover una mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica para el suministro de los usuarios regulados, a fin de contar con energía eléctrica a menor costo y menos contaminante, lo que contribuirá a reducir las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.

Identificación de problemática

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM y/o Ministerio) ha identificado como problema público, la elevación continua a nivel del país, del costo de la energía eléctrica, afectando a los 8.7 millones de usuarios/suministros (que representan aproximadamente 34.8 millones de personas), afectando la economía en general y en especial a las familias de bajos recursos económicos, habiendo sido reportado por parte de Osinergmin el incremento sostenido del costo unitario de la tarifa eléctrica, por lo que se justifica la urgencia de emitir una norma con fuerza de Ley, vía delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que conlleve a reducir los costos de este servicio público esencial.

En atención a lo antes expuesto, se considera como línea de acción la promoción y el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, a través de la modificación de la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, con la finalidad de incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica y promover una mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica renovable no convencionales para el suministro de servicio público de electricidad en beneficio de los 8.7 millones de usuarios/suministros regulados a nivel nacional, quienes contarán con energía eléctrica de menor costo y menos contaminante y ambientalmente sostenible.

Al respecto, la Comisión Multisectorial de reforma del Subsector Eléctrico (CRSE), creada por Resolución Suprema Nº 006-2019-EM, dentro de sus actividades ha estudiado algunos temas del sector eléctrico de corto plazo, tales

como: "Promoción de energías renovables no convencionales (ERNC) en zonas aisladas", "Esquemas para la mejora en las Licitaciones para el Suministro de Electricidad", "Separación de Compras para el suministro eléctrico por potencia y energía", cuyos informes están publicados en el portal web de la CRSE. Dentro de las actividades de corto plazo, concluidas en julio de 2020, se han identificado algunas alternativas de mejora regulatoria para el mejor desempeño del subsector electricidad en las actividades de generación que requieren ser implementadas en el menor plazo posible, a través de normas con fuerza de Ley, como lo es un decreto legislativo.

El OSINERGMIN mediante el Oficio Nº 002-2021-OS-PRES del 5 de enero de 2021, presentó al MINEM propuestas de mejoras normativas de corto plazo, para que sean impulsadas por el sector. Dentro de estas propuestas, se plantean modificaciones a la Ley Nº 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica (Ley Nº 28832), las cuales este sector ha venido evaluando para formular una propuesta normativa.

Con fecha 24 de junio de 2022, mediante Resolución Ministerial N° 227-2022-MINEM/DM, se dispuso la publicación de la propuesta de iniciativa legislativa denominada "Ley que modifica la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, así como de su Exposición de Motivos en el Portal Institucional del Ministerio, a efectos de recibir los comentarios y/o aportes de los interesados y ciudadanía por el plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación, hasta el 24 de julio del año en curso. La propuesta fue sustentada mediante el Informe N° 0190-2022/MINEM-DGE de fecha 8 de junio de 2022, a partir del cual se inició el trámite de la propuesta.

Con fecha 24 de julio de 2022, mediante Resolución Ministerial N° 264-2022-MINEM/DM, se dispuso ampliar el plazo para que los interesados puedan presentar sus comentarios y sugerencias a la propuesta de iniciativa legislativa mencionada, por treinta (30) días calendario adicionales, a ser contados a partir del día siguiente de la culminación del plazo establecido en el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 227-2022-MINEM/DM, fecha que culminaba el 23 de agosto de 2022. Posteriormente se llevaron a cabo reuniones participativas para explicar a los interesados los alcances de la propuesta.

Es así que, la propuesta de iniciativa legislativa fue objeto de un proceso participativo promovido por el MINEM, se continuó con la formulación de la Propuesta legislativa que fue aprobada por el Consejo de Ministros y luego fue presentada al Congreso de la República el 24 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 075-2023-PR, como una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, conforme lo establece el marco legal vigente, con la denominación de Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE. Cabe precisar que, dicha propuesta contó con la exoneración del AIR Ex Ante, debidamente aprobada por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la PCM, el Anexo "Proyectos Normativos en Trámite" debido a que el proyecto de iniciativa legislativa que propone modificar la Ley 28832, (recogido en Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE) había sido prepublicado con anterioridad a la obligatoriedad de la realización del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), por ello la referida Comisión mediante correo de fecha 26 de enero de 2023, comunica la no obligatoriedad de la realización del AIR Ex Ante.

Dicho lo anterior debe indicarse que esta propuesta es formulada debido a la problemática referida al déficit de generación eléctrica de bajo costo y barreras de ingreso a inversiones con tecnologías de generación eficientes de bajo costo, lo que tiene un impacto en el costo de la energía eléctrica que se produce en el SEIN y sistemas aislados. De no tomarse medidas oportunas para corregir este problema, según estimaciones realizadas por el regulador (OSINERGMIN), se tendría un posible incremento en las tarifas que pagan todos los usuarios regulados en los próximos años. En ese sentido, cabe mencionarse lo siguiente:

Justificación de la medida normativa

Conforme se ha mencionado el Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE presentado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con la exoneración del AIR Ex Ante, una vez evaluado dentro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú, fue acumulado con los Proyectos de Ley N° 2139/2021-CR, 3662/2022-CR , 4748/2022-PE, los cuales fueron debatidos y analizados al interior de la mencionada Comisión, con un proceso participativo de diversos agentes que fueron invitados para exponer sus comentarios.

El análisis realizado por la Comisión de Energía y Minas que se encuentra recogido en el Dictamen N° 30 aprobado en mayoría, identifica como problema público que el Perú tiene una las tarifas reguladas más altas de América Latina, originada por la exigencia de contratar la provisión de electricidad en la modalidad de *full requirement* (obligaciones de venta conjunta de potencia firme y de energía). Asimismo, existe una falta de diversificación de la matriz energética, al no aprovechar los recursos renovables existente en el país. Por ello, las propuestas normativas plantean trabajar tres aspectos: (i) promover la competencia en el segmento de generación y promover las inversiones de RER, (ii) brindar predictibilidad a las licitaciones que deben efectuar las empresas distribuidoras y promover precios de generación más eficientes, (iii) promover el desarrollo de generación RER en sistemas aislados y establecer un operador en estos sistemas cuando haya más de un operador.

La Comisión coincide con lo propuesto en los mencionados proyectos de ley, ya que buscan reducir la facturación de energía eléctrica mediante apertura de participación de la energía RER no convencionales en las licitaciones de suministro de energía eléctrica para los 8.7 millones de usuarios regulados, lo que beneficiaría a cientos de familias a nivel nacional, siendo que dicho beneficio también implica contar energía limpia que es ambientalmente sostenible.

Análisis de necesidad y viabilidad

- La Política Energética Nacional 2010-2040 establece como uno de sus lineamientos el contar una matriz energética diversificada con énfasis en fuentes renovables y eficiencia energética.
- En los últimos años la participación de las RER ha crecido de 3,4 5 en el 2016 a 5,5% en el 2022 (eólicas 3,2%, solares 1,4% y biomasa 0,9%). El 42,2% de la matriz energética está compuesta por térmicas que usan gas natural y el 50% por centrales hidroeléctricas (expuestas a riesgos de sequías).

- En enero del 2022, el MINEM publicó el DS de emergencia climática que establece una nueva meta de participación de las energías renovables en la matriz energética al 2023, de 20% sujeto a la oferta y demanda.
- Potencial de las RER en el Perú: (i) potencial solar en la zona norte y sur del país con una potencia instalada de 287 MW; (ii) potencial eólico de 20,493 MW y se tiene una potencia instalada de 668 MW (solo se aprovecha el 3,25% potencial eólico); (iii) potencial geotérmico (sur del país) es de 2,860 MW con una potencia instalada actual "cero"; (iv) potencial biomasa (vegetales) sin explotar que se puede convertir en energía.
- Respecto de los proyectos RERNC: a la fecha se tienen 12 centrales eléctricas con RERNC en proyecto y con concesión definitiva suman un total aprox. USD 1,573 millones de inversión y 1,944 MW de capacidad instalada en conjunto.

II.1.14 Modificar el artículo 2 de la Ley N° 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrogeno verde

Identificación del problema público que se busca resolver

La Ley N° 31992 define que "el hidrógeno verde es un vector energético producido con tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero". Al respecto, esta definición es incoherente toda vez que abriría la posibilidad de producción de hidrógeno mediante recursos fósiles y tecnologías de captura de carbono, las cuales están más asociados a la denominación de hidrogeno azul.

La ambigüedad contenida en la ley abre la posibilidad a la producción de hidrógeno mediante recursos fósiles, lo cual mantendría la dependencia energética hacia los hidrocarburos, intensificaría la reducción de reservas nacionales de gas natural, asimismo, podría promover el uso de tecnologías de producción de hidrogeno maduras que no necesitan mayor incentivo. Adicionalmente, existe controversia sobre la tecnología de captura de carbono por los riesgos en el almacenamiento o disposición del CO2 capturado, que ante una posible falla, aumentaría las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al ambiente.

En un contexto mundial donde la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles es imperativa, es fundamental que Perú se alinee con estándares internacionales claros y precisos. Mientras países como Chile, Uruguay, Colombia y Brasil adoptan definiciones rigurosas y alineadas con estos estándares, el Perú corre el riesgo de quedarse rezagado.

Propuesta de solución

El Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de proponer alternativas regulatorias y promocionales que impulsen y viabilicen el desarrollo de proyectos relacionados al hidrógeno verde en el país (GTM-H2V) creado con Resolución Ministerial N° 165-2023-MINEM/DM, coligió en su informe final que la definición de hidrógeno verde corresponde a lo siguiente "vector energético producido mediante la electrólisis del agua usando electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables, fomentando la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y contribuyendo a la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero". Esta definición es más concordante con la definición establecida por organismos internacionales, como IRENA (International Renewable Energy Agency), que señala lo siguiente: "el Hidrogeno Verde es aquel producido a partir de las energías renovables por electrólisis del agua"[5].

Por ende, se considera que la definición de hidrógeno verde debe corresponder a lo siguiente "vector energético producido mediante la electrólisis del agua usando electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables, fomentando la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".

II.1.15 Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica nacional para la implementación y operación de Plantas Petroquímicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes

En el Perú, hay una ausencia de infraestructura petroquímica enfocada en la producción de fertilizantes (urea, nitrato de amonio, entre otros), por otro lado, en el contexto del cambio climático, se tiene un incremento en la demanda de fertilizantes a fin de mejorar la eficiencia productiva de los campos de cultivo, lo que se refleja en un alto riesgo de seguridad alimentaria nacional en el corto plazo. Cabe precisar que el mayor porcentaje de la oferta de fertilizantes, es de origen importado, lo cual encarece el precio de los mismos ante las fluctuaciones del mercado internacional, trayendo consigo un impacto inmediato en la estructura de costos de las actividades que conforman la cadena de valor de la agricultura, y ello a su vez, en la canasta básica familiar, en especial de la población vulnerable.

Sin embargo, en los últimos años por consecuencia de los conflictos bélicos de los principales países productores de fertilizantes y el crecimiento de la industria minera (que demanda nitrato amonio para sus actividades productivas), se cuenta con diversas iniciativas privadas para desarrollar Plantas petroquímicas en el Perú a fin de producir urea y nitrato de amonio. Cabe precisar que los montos de inversión de los proyectos petroquímicos de tal naturaleza ascienden a valores superiores de los 2000 millones de dólares, con un tiempo de construcción que oscilan entre 3 y 5 años sin contar con los periodos de permisología (ambientales, municipales, seguridad industrial, entre otros) que exige el Estado. Cabe precisar que los mencionados inversionistas petroquímicos, han manifestado que los tiempos que demora la obtención de los permisos (EIA, PEA, CIRA, licencias municipales, Registro de Hidrocarburos, entre otros) que implica la implementación de una Planta petroquimica de tal magnitud, son demasiado extensos, lo que desalienta las inversiones por el alto riesgo de ser paralizados.

Por tanto el MINEM viene impulsando medidas que permitan alentar la inversión para la construcción de industrias petroquímicas, a partir del uso del gas natural, priorizando la producción de fertilizantes (urea, nitrato de amonio) en beneficio

[5] Fuente: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Green_hydrogen_policy_2020.pdf

de la agricultura nacional, con miras de sostenibilidad de largo plazo lo cual contribuirá en fortalecer la seguridad alimentaria nacional, con la posibilidad de producir explosivos (nitrato de amonio), y con ello se estima dinamizar actividades económicas promotoras de desarrollo, como es la Minería, entre otras, que contribuirán en una reactivación económica sostenible del país.

Entre las principales medidas que propone la norma que fomenta la promoción y desarrollo de la industria petroquímica, para la producción de fertilizantes, cabe señalar:

- Agilidad en el régimen de autorizaciones para el desarrollo de proyectos de la industria Petroquímica
- Agilidad en los regímenes de la gestión pública para obtener los permisos, autorizaciones o licencias en las actividades de diseño, construcción y/u operación de proyectos de petroquímica.
  i. Las autorizaciones sectoriales a cargo del OSINERGMIN y/o PRODUCE para la construcción y/u operación de las plantas petroquímicas (incluyendo trámite de Certificaciones de Inspección y Registro de Hidrocarburos)
  ii. La expedición del CIRA y PEA a cargo del Ministerio de Cultura,
  iii. La aprobación de los EIA de los proyectos de plantas petroquímicas
- Imposición de servidumbres para proyectos de petroquímica
- Condiciones para garantizar el Gas Natural para la Industria Petroquímica
- Precio del gas natural en boca de pozo y tarifas del servicio de transporte de gas natural
- Categoría tarifaria especial para la Industria Petroquímica
- Supervisión de los proyectos de inversión
- Prioridad del abastecimiento de la agricultura nacional
- Esta propuesta no afecta las competencias de las municipalidades; asimismo, estas medidas son iguales a las medidas establecidas a los Proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad - PNIC.

II.1.16 Modificar los artículos 8, 9, 14, 15 y 18 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, y artículos conexos para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural

Identificación del problema público



Por Decreto Supremo N° 026-2007-EM del 4 de mayo de 2007, se creó la Dirección General de Electrificación Rural (en lo sucesivo la DGER), la cual conforme a lo señalado en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, es el órgano de línea del despacho Viceministerial de Electricidad, encargado de la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del Sector Energía y Minas y, de modo específico, de la ejecución y/o coordinación de proyectos electromecánicos, prioritariamente en el área rural y zonas de extrema pobreza;

Dentro de las labores encomendadas a la DGER de acuerdo a lo dispuesto en el literal "q" del artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Energía y Minas aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-MEM y sus modificatorias, se encuentra habilitada para proponer proyectos en aspectos normativos referentes a la electrificación rural.

En ese sentido, se puede advertir que siempre la problemática que se busca resolver es el cierre de brechas y difícil acceso al servicio público de electricidad por parte de los pobladores ubicados en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, cuya baja cobertura en electrificación rural ubica al Perú en los últimos lugares en el ámbito de la región latinoamericana.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo tiene como objetivo acelerar el acceso de la población rural a la energía eléctrica, y para ello cuenta con un Plan Nacional de Electrificación Rural que permitiría llegar a una cobertura de electrificación rural del 96% al año 2026, siendo actualmente la cobertura a nivel nacional del 85,8% (hasta fines del año 2023), documento que se encuentra a cargo de la elaboración y evaluación continua por parte de la DGER.

En ese contexto, con relación al uso productivo de la electricidad la Ley prevé que excepcionalmente se disponga del 1% de los recursos para la Electrificación previsto en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, lo que conlleva a limitaciones para el correcto y eficiente desempeño del fin propuesto.

Con relación al artículo 9, relativo al destino y administración de los recursos, en el quinto párrafo del mismo señala que aquellas obras que hayan sido ejecutadas por los gobiernos subnacionales u otras entidades, que no cumplan con el Código Nacional de Electricidad, normas técnicas, ambientales, municipales u otra pertinente y sean observadas por el Distribuidor a cargo de la ZRT donde se ubiquen las obras, la DGER transferirá recursos a ADINELSA para la subsanación u observaciones.

Al respecto, como primer elemento limitante, se tiene que la observación a la deficiencia de las obras se encuentre a cargo de la distribuidora de la ZRT donde se encuentre la obra, debiendo permitirse que la observación sea efectuada, además, por interesados o terceros que busquen mantener la seguridad e integridad de la población.

Por otro lado, el artículo señala exclusivamente a ADINELSA como el encargado de obtener el subsidio para la ejecución de obras de mejora ante las deficiencias encontradas, pudiendo ampliar esta posibilidad y considerarse a la EDE de la ZRT involucrada.

Respecto del artículo 14, relativo a la tarifa rural existe la necesidad que el Ministerio de Energía y Minas pueda adecuar los factores de compensación social eléctrica para los sistemas eléctricos rurales en energías renovables.

Asimismo, el artículo 18 prevé que las transferencias de obras y propiedad de conexiones domiciliarias tenga como regla general la transferencia a favor de

ADINELSA y como excepción a las empresas de distribución eléctrica de la ZRT. Criterio que, en la práctica desde la modificación normativa en el año 2015, no ha permitido la transferencia de manera eficiente y oportuna puesto que existe la necesidad de sustentar técnicamente la necesidad de recurrir a dicha excepción, debiendo bajo nuestro criterio transferirse a favor de las EDES al corresponder en el desarrollo de sus actividades dentro del territorio involucrado y que ellos administran y por excepción a ADINELSA.

Asimismo, con la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA), se creó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

De acuerdo con ello, según el artículo 3 de la Ley del SEIA, no se puede iniciar la ejecución de los proyectos y actividades de servicios y comercio que se encuentren sujetos al SEIA y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.

Asimismo, el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley del SEIA establece que la resolución que aprueba el estudio ambiental constituye la certificación ambiental, que declara la viabilidad ambiental del proyecto propuesto en su integridad, la cual se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos que el titular requiera para su ejecución.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley del SEIA, el SEIA comprende los siguientes estudios ambientales:

a. Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA): aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos leves.
b. Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos moderados.
c. Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): aplicable a los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos altos.



Bajo este contexto, a través del Decreto Legislativo N° 1207 se modificó al artículo 15 de la Ley N° 28749, Ley general de electrificación rural (en adelante, LGER), de tal forma que se estableció que, para la ejecución de proyectos de distribución considerados como Sistemas Eléctricos Rurales (en adelante, SER), se presentará una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA).

Es decir, la modificación del artículo 15 de la LGER implicó la incorporación de una norma con rango de ley al ordenamiento jurídico, la cual establece que los proyectos de distribución calificados como SER deben obtener obligatoriamente la obtención de la certificación ambiental a través de la aprobación de una DIA.

Sin embargo, de la experiencia de la evaluación ambiental de proyectos eléctricos, se advierte que los impactos ambientales relacionados con proyectos de distribución calificados como SER tienen una naturaleza puntual y no significativa debido a su propia envergadura. Por lo que, no corresponde que este tipo de proyectos de se encuentre dentro de los alcances del SEIA ya que este sistema únicamente comprende categorías aplicables a proyectos con impactos ambientales significativos. Por lo tanto, el artículo 15 de la LGER establece una exigencia ambiental que no guarda proporcionalidad con la magnitud de los impactos ambientales que generan los proyectos de distribución calificados como SER.

Sobre el particular, la sujeción de un proyecto a la normativa del SEIA y, por lo tanto, a la obtención de la certificación ambiental, implica el cumplimiento de ciertos requisitos y procedimientos propios de la evaluación ambiental, según la normativa aplicable. De modo que, el artículo 15 de la LGER tiene las siguientes implicancias:

- La obtención de la concesión de electrificación rural se encuentra condicionada a la obtención de la certificación ambiental.

- De forma previa a la elaboración de la DIA, se debe obtener la aprobación de Términos de Referencia para la elaboración de este estudio ambiental.

- La elaboración de la DIA debe ser realizada por una consultora ambiental inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales administrado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles.

- Se debe realizar el procedimiento de evaluación de la DIA para obtener la resolución aprobatoria de la Autoridad Ambiental Competente, el cual incluye -según corresponda- solicitudes de opiniones técnicas vinculantes y la implementación de mecanismos adicionales.

En ese sentido, el requisito ambiental contenido en el artículo 15 de la LGER se traduce en costos y tiempos que retrasan la ejecución de los proyectos de distribución de energía eléctrica que han sido calificados como SER, lo cual genera un impacto directo en el acceso a la energía eléctrica y en el cierre de brechas del servicio público de electricidad en zonas rurales del país.

Análisis del contenido de la parte dispositiva y sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad del proyecto normativo

De acuerdo con la Ley del SEIA y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, los proyectos sometidos a las disposiciones del SEIA son aquellos que se encuentran en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.

Al respecto, para el subsector Electricidad, en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, se ha considerado a todas las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica. Por lo que, en un escenario ordinario existe la posibilidad de promover la emisión de una

nueva Resolución Ministerial que tenga como objetivo excluir a los proyectos de distribución calificados como SER del SEIA.

No obstante, el artículo 15 de la LGER constituye un impedimento legal para promover la aprobación de una Resolución Ministerial de este tipo. Por lo que, existe la necesidad de emitir una norma con rango legal que elimine este impedimento y precise que los proyectos de distribución calificados como SER no requieren de la aprobación de ningún estudio ambiental.

Bajo este orden de ideas, la propuesta normativa modifica el artículo 15 de la LGER con el fin de establecer que los proyectos de distribución calificados como SER no requieren de la obtención de la certificación ambiental. De igual modo, la propuesta indica que, para este tipo de proyectos, se de cumplir con los lineamientos de gestión ambiental que apruebe el Ministerio de Energía y Minas.

De esta manera, se adecúa los requisitos ambientales para el desarrollo de proyectos de distribución de energía eléctrica calificados como SER a la magnitud y naturaleza de sus impactos ambientales. Asimismo, los lineamientos de gestión ambiental permiten que ya no sea necesario la presentación de ningún documento de gestión ambiental a la Autoridad Ambiental Competente (como es el caso de una Ficha Técnica Ambiental regulada en otros sectores), ya que los mismos comprenderán todas aquellas medidas de manejo ambiental que se deben tomar en consideración para la construcción y operación de los proyectos de distribución mencionados. De esta manera, se promueve la simplificación administrativa para la obtención de la concesión de electrificación rural desde un enfoque que priorice la eficiencia y el desarrollo sostenible del subsector.

De manera paralela, el proyecto normativo también comprende la modificación del numeral 15.2 del artículo 15 de la LGER con la finalidad de otorgar predictibilidad respecto al tratamiento que se les dará a los proyectos de generación y transmisión calificados como SER. Por lo que, para este tipo de proyectos, la obligación de obtener la certificación ambiental es establecida de conformidad con la normativa que regula el SEIA.

Al respecto, se advierte que los proyectos de generación y transmisión comprenden actividades y componentes con una envergadura distinta a los proyectos de distribución. Por lo que, para los proyectos de generación y transmisión calificados como SER se requiere de la identificación de parámetros que permitan establecer qué tipo de proyectos se encuentran dentro de los alcances del SEIA.

Sin embargo, debido a que no existe ninguna norma con rango legal que establezca que los proyectos de generación y transmisión calificados como SER deben obtener la aprobación de un estudio ambiental, es posible la emisión de una Resolución Ministerial con la que se precise los parámetros aplicables para determinar si un proyecto de generación o transmisión calificado como SER necesita de certificación ambiental de forma previa a su ejecución.

Por último, la propuesta normativa comprende una Disposición Complementaria Transitoria en la cual se señala que el Ministerio de Energía y

Minas, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, mediante Resolución Ministerial, aprueba los lineamientos para la gestión ambiental de los proyectos de distribución calificados como SER, a fin de complementar las modificaciones introducidas al artículo 15 de la LGER.

Al respecto, el plazo dispuesto para la aprobación de esta Resolución Ministerial se sustenta en la necesidad de un plazo razonable para la identificación y sistematización de las medidas de manejo ambiental aplicables a los proyectos de distribución calificados como SER, a partir de la casuística presentada en los últimos años en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental.

II.1.17 Fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional.

Esta medida resulta urgente y necesaria, dado que la creación de un Mecanismo de Compensación permitirá acelerar el acceso al gas natural a una mayor cantidad de usuarios a nivel nacional, cerrando las brechas de infraestructura y promoviendo la realización de inversiones en las regiones del interior del país.

Se requiere una norma con rango de ley debido a que se busca crear el Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, el cual es financiado por un recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos y no irroga gastos al tesoro público, cuya finalidad es nivelar los precios finales para los usuarios del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional, ***lo cual permitirá masificar el gas natural en beneficio de toda la población y de esta manera reducir la importación de GLP y la contaminación ambiental***.

Ahora bien, este recargo se aplica a las empresas concesionarias del servicio de distribución y a los consumidores independientes, en su condición de usuarios de las empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos.

En el caso de las empresas concesionarias del servicio de distribución de gas natural que adquieren el servicio de transporte, el recargo que se le aplique es trasladado al precio final del gas natural que se establece en el recibo de todos sus usuarios finales, conforme lo establece la normativa vigente (Passthrough).

Por otro lado, el recargo que es pagado por los generadores eléctricos, como consumidores independientes, es compensado mediante un cargo a ser incluido en el peaje del sistema principal de transmisión eléctrica. Esta compensación debe ser regulada por el Osinergmin según lo que disponga el reglamento, sin afectar el equilibrio económico financiero de los contratos APP vigentes en transmisión eléctrica.

En ese sentido, siendo necesario que el beneficio del mecanismo de compensación se aplique a todos los usuarios regulados del servicio de distribución de gas natural a nivel nacional. Dicha medida permite:

- Lograr el acceso en igual de condiciones al gas natural en las regiones del interior del país.
- Reducir la importación de GLP.
- Satisfacer necesidades básicas de toda la población, ya que podrán contar con combustibles menos contaminante que el GLP para la cocción de alimentos, calefacción (ante las heladas en las regiones altoandinas), entre otros.
- Nivelar los precios finales del gas natural a nivel nacional.
- Generar el subsidio cruzado a largo plazo para que las empresas concesionarias sigan invirtiendo en redes de distribución para usuarios residenciales.
- Generar demanda de gas natural en las regiones del interior del país fuera de Lima y Callao.
- Generar el desarrollo industrial descentralizado que genere puestos de trabajo y desarrollo económico en las regiones del interior del país.

Análisis de impacto del equilibrio financiero de las APP con contratos de concesión vigentes y de aquellas que se encuentran en Proceso de Promoción

Es preciso indicar que, con fecha 10 de noviembre de 2021, el Poder Ejecutivo, contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros (con opinión favorable del MEF), remitió al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 679/2021-PE "Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural" (en adelante, PL 679), el cual incluye la creación del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural; sin embargo, a la fecha el mencionado PL 679 aún sigue en la Comisión de Energía y Minas. Cabe precisar que, en la exposición de motivos del PL 679 se sustentó el impacto del equilibrio financiero de las APP con contratos de concesión vigentes y de aquellas que se encuentran en Proceso de Promoción.

Cabe mencionar que, los contratos de APP contienen una cláusula de equilibrio económico financiero, mediante la cual las partes declaran que a la fecha de suscripción sus derechos y obligaciones se encuentran en equilibrio. Dicha cláusula establece también que, ante la ruptura del equilibrio económico financiero, su restablecimiento puede ser invocado por cualquiera de las partes, únicamente cuando este se vea afectado debido al cambio de leyes y disposiciones aplicables, en la medida que se presenten variaciones significativas en los ingresos o costos del proyecto, a fin de compensar a la parte afectada (ya sea que se trate del concedente o del concesionario).

Por tal motivo, se realizó el análisis del impacto económico financiero teniendo en consideración lo siguiente:

- El referido análisis se realizó para la Concesión de Ica y la Concesión Norte dado que son las únicas concesiones que cuentan con condiciones específicas de regulación del equilibrio económico financiero (variación de ingresos o costos de operación y mantenimiento de manera tal que la

diferencia entre dichas variables durante un periodo de 12 meses consecutivos o más varíen en un equivalente a más del 10%.

- En el caso de la Concesión de Lima y Callao, las condiciones de la cláusula de equilibrio económico financiero contempladas en el contrato no aplican para efectos del mecanismo de compensación propuesto.
- Se excluyó a la Concesión Sur Oeste del presente análisis dado que a la fecha no cuenta con una empresa concesionaria.
- Se excluyeron a las Concesión de Piura, toda vez que estas no se encuentran conectadas al sistema de transporte de gas natural por ductos.

Luego del análisis efectuado, y bajo los supuestos empleados, se determinó que, ***con la aplicación del Mecanismo de Compensación para el Acceso al Gas Natural, no existe ruptura del equilibrio económico financiero para la Concesión de la Región Ica y de la Concesión Norte bajo los supuestos establecidos en los respectivos contratos de concesión***.

Asimismo, la aplicación del Mecanismo de Compensación no tiene impacto en la Concesión de Transporte de Gas Natural (no genera ganancias ni perdidas en el Concesionario al ser este recargo passthrough), además, este recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos es pagado por todos los clientes de las empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos y tiene la misma naturaleza que el recargo FISE.

II.1.18 Fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.

Se requiere una norma con rango de ley debido a que se busca incluir un nuevo destino de los recursos del FISE, como es el financiamiento de la operación y mantenimiento (OPEX) de los proyectos de masificación de gas natural que viene licitando el FISE en las regiones que no son parte de una concesión de distribución de gas natural, lo que implica la modificación de la Ley FISE. Cabe anotar que el artículo 6 de la Ley FISE señala que el FISE tiene carácter intangible y sus recursos se destinan única y exclusivamente a los fines a que se refiere dicha norma en su artículo 5.

El proyecto normativo es urgente y necesario debido a que busca asegurar que las regiones que no tienen acceso al gas natural cuenten con dicho servicio, principalmente las regiones del sur del país. Al respecto, esta necesidad se sustenta en que luego de varios intentos de licitación del proyecto "Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali" (Proyecto Siete Regiones), en el año 2021 este fue declarado desierto por Proinversión al no haberse recibido ninguna oferta del sector privado. Ante esta situación, el MINEM, como Administrador del FISE, en aplicación del marco legal que regula el FISE, viene impulsando proyectos de masificación de gas natural bajo la figura del abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), regulada en el Decreto Supremo N° 063-2005-EM, para lo cual se encuentra tramitando licitaciones para contar con empresas

contratistas para la construcción de instalaciones de GNC y/o GNL y redes de gas natural, encargadas de la construcción de la infraestructura de los proyectos. A la fecha, se ha otorgado la buena pro y suscrito el contrato de la licitación del proyecto de masificación en la región Huancavelica; además se ha convocado licitaciones para el proyecto de la región de Cusco (Cusco y Quillabamba).

Análisis de sostenibilidad financiera del FISE

En el Programa Anual de Promociones 2024 aprobado con Resolución Ministerial N° 121-2024-MINEM/DM, se ha asignado un monto estimado de S/ 200 millones para financiar el programa de masificación de gas natural en las regiones del interior del país, que no cuentan con una concesión. Con dicho monto, el Administrador del FISE ha licitado los primeros proyectos pilotos en las regiones de Huancavelica y Cusco, los cuales fueron adjudicados en el primer trimestre de 2024.

Asimismo, de acuerdo a la proyección de Ingresos y Egresos del FISE 2024-2038, se tiene proyectado una asignación acumulada hasta el año 2027 de S/ 800 millones para el referido programa.

Es importante precisar que este programa permitirá, en el corto plazo, el suministro de gas natural a la población de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica, Puno y Ucayali, hasta que se cuente con un Concesionario de Distribución de Gas Natural.

En ese sentido, la asignación de recursos a dicho programa no compromete la sostenibilidad de los fondos del FISE en los próximos 04 años, dado que ya se encuentra incorporado en la proyección de egresos del 2024-2038.

Se ha estimado, que la administración de OPEX requerido para el proyecto, será de máximo tres (03) años, conforme se detalla a continuación:

Año 1	Año 2	Año 3	TOTAL, OPEX estimado
S/ 500,000	S/ 26,114,900	S/ 26,114,900	S/. 52,729,800

Cabe mencionar que el presupuesto para los años 2 y 3 se encuentra condicionado al avance de la construcción de las redes de gas natural a ser realizadas por las empresas constructoras ganadoras de los procesos de licitación, además se ha considerado montos máximos que incluyen la operación simultánea de las 7 regiones. En este sentido el presupuesto de los S/ 800 millones destinado al programa de masificación de gas natural en las regiones abarcaría lo siguiente

CAPEX	OPEX	TOTAL, estimado
S/ 700,000,000	S/ 100,000,000	S/. 800,000,000

Finalmente, es preciso recalcar que ***el financiamiento de la operación y mantenimiento que propone el Proyecto Normativo se encuentra dentro de estos S/ 800 millones, lo cual no afecta la sostenibilidad de los demás programas de masificación de gas natural y de otros proyectos que financia el FISE, ni contratos de APP suscritos a la fecha***. Cabe precisar que, esta medida es distinta al proyecto de ley que el MINEM viene impulsando para obtener más recursos para el programa BONOGAS, el cual sería destinado para las regiones que cuentan con un concesionario, por un monto equivalente a S/ 624 millones de soles para el año 2024.

II.1.19 Modificar la Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.

En la actualidad, el MINEM asume, en función a la debida tutela del interés público, la tarea de remediación de aquellos pasivos de alto y muy alto riesgo, cuyos responsables de la remediación (generador, responsable legal o remediador voluntario) no pueden ser identificados o no asumen su responsabilidad; destinándose para este fin recursos públicos que son otorgados anualmente por el Estado al MINEM con fines de transferencia a la empresa estatal Activos Mineros.

Asimismo, la normativa no establece diferenciación entre las responsabilidades y sanciones en la ejecución de la remediación de pasivos ambientales mineros entre el responsable y la intervención del Estado, retrasando la tarea de remediación por parte del Estado.

En ese contexto, se ha verificado que la aplicación de la Ley N° 28271, no ha logrado los objetivos esperados para remediar los pasivos ambientales a nivel nacional, debido a que, existen limitaciones para la actuación del Estado ya que se establecen exigencias idénticas a las que deben cumplir los privados, sin tomar en cuenta que el Estado debe transitar por requerimientos presupuestales anuales, normas de inversión pública y de contrataciones estatales que retrasan su accionar.

Asimismo, se ha identificado que los mecanismos de remediación voluntaria no están dando los resultados esperados, se advierte que se tiene un número importante de derechos de reaprovechamiento otorgados que no ha cumplido con la obligación de presentar sus instrumentos de gestión ambiental, sin embargo, dicho incumplimento no genera la extinción del derecho, por lo que se considera conveniente incluir causales de extinción en una norma con rango de ley.

Así, con las modificaciones propuestas se pretende, incentivar la remediación voluntaria, optimizar la intervención del Estado en la remediación de los pasivos a su cargo, mejorando el uso de recursos públicos que se destinan a dicha remediación y reduciendo los impactos ambientales que vienen generando los pasivos.

II.1.20 Ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.

El proceso de formalización minera integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal creado por el Decreto Legislativo N° 1293[6] se encuentra a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales, las que a su vez, tienen a cargo la evaluación de los requisitos para la formalización y otorgan la autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de

6 Publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano.

beneficio a los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO.

Este proceso vigente desde el año 2017, conforme su norma de creación tuvo inicialmente una vigencia de treinta y seis (36) meses; posteriormente, con la Ley N° 31007, Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, publicada el 17 de octubre de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, mediante su primera disposición complementaria final se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021[7] el plazo del proceso de formalización minera integral establecido en el Decreto Legislativo N° 1293.

Posteriormente, con fecha 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 31388, Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral, modificándose el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1293, estableciéndose que la vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre de 2024.

La naturaleza del proceso de formalización minera integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, es excepcional, porque regulariza actividades en curso y es temporal considerando que culmina el 31 de diciembre de 2024; asimismo, no constituye la única vía para obtener la autorización para el desarrollo de las mencionadas actividades, en el mencionado estrato, ya que existe la posibilidad de obtener la autorización para iniciar actividades de exploración, explotación o de beneficio de minerales para pequeña minería y minería artesanal siguiendo los trámites y procedimientos establecidos en la Ley N° 27651 y sus disposiciones reglamentarias y el Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM.

Resulta importante señalar, que en el marco del proceso de formalización minera integral, los mineros informales son identificados en el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO, a través de su número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes8; precisándose que dicho Registro es de carácter dinámico y de acceso público, pudiendo ser verificado a través del portal web del Ministerio de Energía y Minas, a través del siguiente enlace: http://pad.minem.gob.pe/REINFO_WEB/Index.aspx. Siendo que, al 18 de abril de 2024, existen 22181 inscripciones vigentes y 64737 inscripciones suspendidas[9].



7 De conformidad al artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 el plazo del proceso de formalización minera concluía el 1 de agosto de 2020.

8 Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 018-2017-EM

9 En el marco del Decreto Supremo Nº 009-2021-EM se incorporó dentro del ordenamiento minero el régimen de la *"suspensión de la inscripción en el REINFO"* por el incumplimiento de las condiciones de permanencia relacionadas a lo siguiente: a) la presentación del instrumento de gestión ambiental; b) tener RUC en renta de tercera categoría y CIU de minería; c) tener inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados (en el caso de usar mercurio o cianuro); y, d) presentar declaración de producción minera semestral.

A su vez, debe precisarse que, para formalizar 2042 mineros en vías de formalización, el Estado asumió un costo solo respecto de las transferencias a los Gobiernos Regionales, ascendente a S/. 51, 739, 072 (cincuentaiuno millones setecientos treintainueve mil sesentaidos con 00/100 soles) desde el año 2017, este costo no involucra la implementación de herramientas informáticas tales como Ventanilla Única, entre otras acciones, evidenciándose que no existe mayores resultados respecto del mencionado proceso excepcional a cargo de los Gobiernos Regionales, que al 18 de abril corresponden a 86917 inscripciones entre personas naturales y jurídicas.

En ese sentido, la propuesta recoge medidas para su ordenamiento y fortalecimiento del proceso de formalización minera, se plantea:

- Asignación de manera temporal, al Ministerio de Energía y Minas, de las competencias y funciones en materia de formalización minera, que a la fecha se encuentran a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales, conforme lo establece el Decreto Legislativo Nº 1293.

- Creación de un único proceso para ordenar y regular las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, lo que comprende: transparentar y sistematizar la información de los sujetos del proceso, autorizaciones y plantas de beneficio; promoción de la asociatividad en el desarrollo de la actividad minera, la comercialización que permita la trazabilidad de los minerales que provengan de esta actividad; y establecer una regulación específica para Madre de Dios.

La implementación de la propuesta, propone la reestructuración del proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria, siendo que la misma, no generará gastos a los mineros en proceso de formalización.

Los beneficios esperados es incrementar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal generando un ordenamiento de dicha actividad en todos sus aspectos: explotación, beneficio y comercialización; reduciendo así la actividad ilegal.



La presente propuesta implicará modificaciones reglamentarias referidas a las competencias y funciones del MINEM, modificación del REINFO, y competencias de las Direcciones o Gerencias regionales de los Gobiernos regionales.

II.1.21 Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.

Bajo el Plan de Seguro "SIS para todos" del régimen de financiamiento subsidiado, a todas las personas residentes en el territorio nacional –como los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y los miembros de las rondas campesinas y nativas y comités de autodefensa - que no cuenten con ningún seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica, se les garantiza la cobertura gratuita del PEAS; adicionalmente, dentro de lo establecido por el Decreto de Urgencia No 046-2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078- 2021, cuyas disposiciones han sido prorrogadas por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, cuentan con la cobertura del PEAS más planes complementarios al PEAS (Prestaciones Administrativas, LEAC y el Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas), hasta el 31 de diciembre del año 2024. No requiere financiamiento del presupuesto público. La norma se fundamenta técnicamente en que la población sobre la que se dispone regular la incorporación al SIS ya está afiliada y recibe la cobertura como tal en la actualidad.

II.1.22 Derogar la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.

En la actualidad, a través del Decreto de Urgencia N° 017-2019 y el Decreto de Urgencia No 046-2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078- 2021, cuyas disposiciones han sido prorrogadas por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, los residentes en el país cuentan con la cobertura del PEAS más planes complementarios al PEAS (Prestaciones Administrativas, LEAC y el Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas), hasta el 31 de diciembre del año 2024. La Ley 29761 resulta más acotada respecto de derechos adquiridos que son irreversibles para los afiliados a la fecha. Asimismo, regula el régimen semicontributivo que en los hechos cada vez cuenta con menos afiliados dada la normativa vigente para la afiliación bajo el régimen subsidiado con un alcance universal.

II.1.23 Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos

La Ley N° 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento expedida el 20 de enero del 2007, establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades, el cual fue modificado con el Decreto Legislativo N° 1271 publicado el 20 de diciembre del 2016, y en lo que respecta a la autorización sectorial de nuestra entidad se modificó el literal d.4 del artículo 7 de la mencionada ley marco quedando redactado actualmente de la siguiente manera:

> *"(...) d.4)* ***Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de***

***Cultura**, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación."*

Actualmente, en el artículo 28-A-4 del Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se regula el procedimiento para requerir la autorización sectorial para la emisión de licencia de funcionamiento en Monumentos declarados bien integrante del patrimonio cultural de la Nación, como un trámite previo al requerimiento de los administrados ante las municipalidades para la expedición de licencias de funcionamiento en inmuebles declarados como Monumentos, **sin embargo, de la revisión de solicitudes y autorizaciones sectoriales emitidas por el Ministerio de Cultura se advierte que dicha revisión y evaluación de solicitudes resulta similar a la revisión efectuada por las municipalidades para la expedición de licencias de funcionamiento**, puesto que recae en la verificación de los usos, giros o actividades comerciales aprobados por las normas ediles.

En ese sentido, con la finalidad de simplificar administrativamente los trámites que realizan los administrados que requieren licencias de funcionamientos en monumentos históricos, resulta necesario evaluar la necesidad de la autorización que expide el Ministerio de Cultura para la emisión de licencia de funcionamiento en monumentos, debido a que la revisión que se efectúa actualmente por parte del Ministerio de Cultura tiene como finalidad de verificar que los usos o giros propuestos para el monumento sean compatibles con las normas municipales vigentes, siendo posible que dicha revisión solo lo haga la municipalidad y de esta manera evitar un doble trámite por parte del ciudadano que emprende un giro comercial, en aplicación de la simplificación administrativa. Cabe precisar que, esta medida no afectará la conservación o protección de los monumentos, ni los pondrá en riesgo.

II.1.24 Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que facilite la inversión pública y privada.

En la actualidad no existe una planificación integral de los proyectos de inversión pública, por ende, la población considera que las entidades del sector público entorpecen la ejecución de sus obras o que no reciben información suficiente para la toma de decisiones.

La medida permitirá que el Diagnóstico Arqueológico de Superficie sea incluido como un procedimiento de parte, a cargo de profesionales en arqueología externos al Estado, que se incluya en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, y por tanto en el flujo de los procedimientos administrativos a cargo del Ministerio de Cultura.

La medida tiene como finalidad complementar el diagnóstico arqueológico superficial como un documento que permita el desarrollo de proyectos de

inversión pública y privada. Este documento se circunscribe a un espacio definido por coordenadas geográficas georreferenciadas, y es realizado por un profesional en arqueología, colegiado y habilitado, contratado por una persona natural o jurídica.

II.1.25 Facultar al Ministerio de Cultura para crear una nómina de especialistas encargados de realizar acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios, en el marco de la promoción de las inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

El decreto legislativo facultará al Ministerio de Cultura a contar con una Nómina de Especialistas para la identificación de pueblos indígenas u originarios en el marco de sus competencias. Esto es, que permitirá al sector contar con un listado de profesionales calificados que integran la cartera de especialistas en trabajos de campo para la identificación de pueblos indígenas u originarios, que permitan fortalecer la información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, en el marco de la función establecida en el Decreto Legislativo Nº 1360 y los procesos de consulta a su cargo.

De igual forma, se habilitará al Ministerio de Cultura para aprobar posteriormente, a través de una norma sectorial, los criterios y requisitos específicos para la inscripción, calificación y clasificación de los profesionales que integrarán dicha nómina, así como los procedimientos para la contratación, a través de un proceso de selección, designación y ejecución de las tareas que se encomienden a terceros, según convocatoria.
Al facultar al Ministerio de Cultura para crear una Nómina de Especialistas, se contará con un grupo humano capacitado que permitirá atender la demanda de identificación de pueblos indígenas u originarios para la ejecución de proyectos de inversión proyectados por el gobierno, lo que implicará que se contará con un mayor número de recursos humanos con el perfil adecuado para dicha actividad. Es importante recordar además que para esta labor actualmente se viene realizando la contratación de servicios de especialistas con órdenes de servicio. No obstante, se debe tener en cuenta que existe una prohibición legal de la contratación de servicios recurrentes, y que, además, los productos presentados por estos terceros deben ser revisados por personal CAS, lo que genera demora en la emisión de los informes de identificación.



En ese sentido, con la aprobación del decreto legislativo se tendrá dos beneficios concretos. Por un lado, permitirá incrementar los trabajos de campo de identificación de pueblos indígenas u originarios a cargo del sector, dado que se contará con un mayor número de recursos humanos con el perfil adecuado para dicha actividad; y por el otro, se reducirán los plazos de los procesos de consulta previa.

Considerando lo antes expuesto, y en línea con lo señalado por el premier en su discurso de investidura, desde el gobierno se buscará dinamizar la economía a través de la inversión minera, con transparencia, eficiencia y un compromiso con el bienestar de las comunidades locales, garantizando que la minería contribuya de manera positiva al crecimiento económico del país, teniendo como meta viabilizar una inversión minera de hasta US$ 4,600 millones, sustentados en la inversión de 7 proyectos mineros, proyectando que, para el año 2026, el nivel de

ejecución de inversión minera supere los US$ 5,400 millones. De igual forma, según la "Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2024" presentada por el Ministerio de Energía y Minas en marzo de 2024, existe una proyección de 51 proyectos mineros, que representan una inversión de US$ 54,556 millones, con el objetivo de fomentar e iniciar actividades mineras como explotación o beneficio en concordancia con la normativa vigente.

Del mismo modo, la medida beneficiará a los proyectos de inversión en materia de servicios públicos, los cuales también debe pasar por consulta previa siempre que se superpongan sobre territorios de pueblos indígenas u originarios. Durante los años 2022 y 2023, diversas entidades públicas han remitido información al Ministerio de Cultura sobre setecientos veintidós (722) proyectos de inversión planificados que involucran al sector Salud y al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a los subsectores electricidad, comunicaciones, transportes, y a los gobiernos regionales de Arequipa, Amazonas, Madre de Dios y San Martín.

Durante el año 2022, el Ministerio de Cultura ha realizado trabajos de campo de identificación de pueblos indígenas u originarios en 144 comunidades campesinas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lima, Pasco y Tacna. Mientras que, durante el 2023, visitó 120 localidades de pueblos indígenas u originarios correspondientes a los departamentos de cinco (5) departamentos (Ancash, Ayacucho, Huánuco, Lima, Puno). Por último, en lo que va del año 2024, se ha realizado visitas a 13 localidades de pueblos indígenas u originarios. Los resultados de estos trabajos de campo han sido incorporados a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura.

Adicionalmente, se ha identificado que, a la fecha, sobre los ámbitos de las localidades sin identificación de pueblos indígenas u originarios se localizan 66 proyectos de exploración minera y 47 proyectos de inversión minera.
Asimismo, estos espacios se cruzan con 81 conflictos socioambientales activos relacionados con proyectos mineros, de acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo (febrero, 2024).

Para cubrir la demanda de proyectos de inversión que se impulsarán de acuerdo a lo señalado en el discurso de investidura, así como de la información del Ministerio de Energía y Minas y de las entidades públicas encargadas de proyectos de inversión en servicios públicos, se requiere fortalecer la información disponible en BDPI, cuya brecha actualmente es de 1495 entre comunidades campesinas (1069) y localidades de pueblos indígenas en la zona andina (426), con énfasis en ámbitos donde se localizan proyectos de inversión y exploración minera, así como conflictividad social latente asociada a proyectos de inversión, sobre las cuales se proyecta realizar trabajos de campo para identificación de pueblos indígenas.



II.1.26 Establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno, contemplando acciones de garantía, respeto y valoración de la diversidad cultural que permita construir una ciudadanía intercultural

La diversidad cultural es un valor intrínseco de nuestra sociedad y motor para el desarrollo. El Perú, se constituye como uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo, la cual se encuentra íntimamente relacionada con la extraordinaria diversidad geográfica, biológica y de climas existentes en el país. Nuestra riqueza cultural se evidencia en la diversidad étnica de nuestra población.

Los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano han sido históricamente excluidos de los servicios estatales, diseñados predominantemente para una población urbana y culturalmente homogénea. Tal diseño ha generado no sólo altos niveles de exclusión, sino también brechas culturales significativas y una actitud de rechazo hacia los servicios proporcionados por el Estado, especialmente en regiones de alta diversidad como la Amazonía peruana. Según los Censos Nacionales de 2017, un 25,8% de la población de 12 años y más se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena u originario, mientras que la población afroperuana constituye cerca del 4% de la población total del país. Esta diversidad cultural y lingüística plantea un desafío significativo en la prestación de servicios adecuados, lo que justifica una intervención estatal orientada por un enfoque intercultural.

La falta de servicios adecuados tiene profundas implicaciones económicas, sociales y de salud. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2014 a 2018 revela que el nivel de pobreza es significativamente mayor en comunidades donde se hablan lenguas indígenas en comparación con aquellas que hablan principalmente castellano. El 32.3% de la población con lengua materna indígena se encuentra en situación de pobreza, casi duplicando el 17% de aquellos cuya lengua materna es el castellano.

En el ámbito de la salud, los indicadores también son críticos. Al 2022, se registraron 809,738 casos de enfermedades en personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, siendo las enfermedades osteomusculares, mentales, genito-urinarias y de la piel algunas de las más frecuentes. Este dato es aún más alarmante considerando que, según el III Censo de Comunidades Nativas 2017, el 67% de las comunidades indígenas no cuenta con establecimientos de salud adecuados. Por otro lado, los datos socioeconómicos y de salud del pueblo afroperuano también revelan disparidades significativas. Entre 2012 y 2019, la incidencia de la pobreza en hogares afroperuanos aumentó de 21,1% a 26,4%, y las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y los problemas de colesterol afectan desproporcionadamente a esta población.



Estos datos reflejan la urgente necesidad de políticas públicas que no solo reconozcan la diversidad cultural y lingüística del Perú, sino que se establezcan normas de rango legal que implementen soluciones específicas que aseguren el acceso intercultural y equitativo a servicios públicos. La transversalización del enfoque intercultural en los servicios públicos es fundamental para reducir estas brechas de acceso y garantizar que toda la población reciba la atención adecuada en condiciones de igualdad.

Hoy en día, el reconocimiento de nuestra diversidad cultural nos coloca en la necesidad de evidenciar el rol fundamental que tiene el derecho a la identidad cultural en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en igualdad de condiciones; así como en la reducción de brechas de desigualdad, la eliminación

de todas las formas de discriminación y la construcción de un desarrollo con identidad e inclusión social.

II.1.27 Autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos. La promoción de la visita tendrá especial énfasis en los Sitios del Patrimonio Mundial que por sus características únicas son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Cultura.

El problema público central se centra en las barreras significativas que enfrenta la población para acceder y valorar adecuadamente el patrimonio cultural, reflejado en la disminución de las visitas a monumentos arqueológicos post-pandemia y la prevalencia de visitantes con niveles de educación superior, lo que indica una brecha de acceso cultural entre diferentes grupos socioeconómicos y educativos.

Según datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2022, solo un 8% de la población visitó un monumento arqueológico en los últimos 12 meses, una caída significativa desde el 15% en 2018. Este descenso es más pronunciado entre la población rural y aquellos de estratos socioeconómicos más bajos, quienes citan la falta de recursos económicos como una barrera principal para el acceso.

En efecto, la población urbana muestra un mayor acceso a estos lugares en comparación con la rural (población urbana: 11% y población rural: 5%). Asimismo, según el análisis del perfil de los que asistieron a un museo, sitio arqueológico o monumento histórico en el 2017. Las personas que más asisten son aquellas que cuentan con postgrado o formación superior universitaria completa, incompleta o completa. Según grupo de edad, el grupo etario que más asiste es el de 14 a 29 años, en contraste del grupo de 65 a más años. En el caso de la diferencia según sexo, solo en el caso de los monumentos históricos las mujeres participan más que los hombres (Ministerio de Cultura, 2020).

Además, la falta de dinero es una de las principales razones para no visitar estos sitios culturales, según lo manifiestan una cuarta parte de los encuestados (24%). Esto se vuelve más agudo entre la población de menores recursos. En los Estratos Socioeconómicos D y E (los más bajos), la falta de dinero es la razón de no asistencia en más de un 25% de encuestados. A diferencia del estrato socioeconómico más alto (Estrato A) donde esta razón solo es aludida por un 18%.

Esta situación subraya la necesidad urgente de implementar políticas que promuevan un acceso más equitativo y fomenten una mayor apreciación del patrimonio cultural a través de iniciativas que reduzcan las desigualdades económicas y educativas en el acceso a estos recursos culturales valiosos.

Para lograr ello, se propone la emisión de una norma con rango de ley que faculte al Ministerio de Cultura, a través de un trámite ágil y simplificado, la aprobación de tarifas diferenciadas. Es necesaria la emisión de una norma con rango de Ley, pues las tarifas diferenciadas van a contemplar en algunos casos la gratuidad en el ingreso a sitios culturales. Cabe indicar que, hoy se cuenta con algunas

normas legales que benefician a determinados grupos poblacionales: (i) algunas de estas normas contemplan descuentos para personas en servicio militar, personas con discapacidad, personas adultas mayores, estudiantes y profesores y (ii) otras normas establecen el ingreso gratuito para los guías oficiales de turismo y los veteranos de guerra. No obstante, no se cuenta con una ley que autorice al Ministerio de Cultura a ampliar este beneficio para otros grupos. Por ende, resulta necesaria la aprobación de una normativa legal para tener dicha facultad y poder promover el acceso a estas manifestaciones culturales.

De otro lado, es importante señalar que, la Ley General de Turismo (art. 34) señala que se pueden establecer en determinados periodos tarifas promocionales con fines turísticos. No obstante, la propuesta normativa va más allá e esta disposición: (i) permite establecer beneficios que no solo sean temporales sino permanentes, (ii) permite otorgar entradas gratuitas y no solo descuentos, y (iii) permite que estas tarifas no solo se realicen con fines turísticos, sino también para asegurar el ejercicio de los derechos culturales.

Por último, es preciso señalar que, se requiere la aprobación de esta norma con carácter urgente pues permitirá beneficiar a un grupo relevante de actores, teniendo impactos positivos no solo en el turismo, sino también en las relaciones internacionales, la educación, la cultura e incluso la seguridad ciudadana. En esa línea, es de destacarse que, por tercera vez, Perú ha sido elegido sede del APEC que contará con la participación de representantes de 21 economías del Asia-Pacífico. En el marco de este importante evento es necesario dotar de las facilidades necesarias a los altos funcionarios y sus delegaciones para que puedan visitar los museos y bienes del patrimonio cultural más representativos. Siendo para ello crucial contar con un marco legal flexible que permita al ministerio otorgar rápidamente estas facilidades.

De otro lado, la norma también permitirá fortalecer derechos fundamentales como la educación, cultura, el turismo e incluso la seguridad ciudadana. Por ejemplo, contar con mecanismos que permitan a los escolares el acceso gratuito a los sitios culturales puede reafirmar su identidad cultural y su visión de comunidad, contando con impactos positivos en su desarrollo y en su desenvolvimiento en la sociedad.

En conexión con ello, también es importante clarificar que el Ministerio de Cultura tiene la función exclusiva de gestionar los sitios del patrimonio mundial. Estas zonas por su valor excepcional requieren de la atención exclusiva del sector para garantizar que se encuentren en condiciones óptimas para ser visitadas por la población. De esta manera, se asegura que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos culturales y conocer estos sitios históricos que forman parte clave de nuestra historia.



II.1.28 Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión público o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura tiene la obligación de conservar,

proteger, y poner en valor las zonas arqueológicas, siendo que para ello se requiere de inversión pública o privada y, para que ella se implemente se necesita de que dichas zonas arqueológicas cuenten con saneamiento físico legal.

Existen a la fecha más de 26 mil bienes inmuebles arqueológicos sin saneamiento físico legal y, siendo ello una condición para la inversión pública o privada, a la fecha dicho proceso de saneamiento viene siendo trabado por las dificultades en el cumplimiento de requisitos, así como en la falta de identificación de algunos propietarios. Cabe precisar que, a la fecha solo se cuenta con un aproximado de 406 bienes inmuebles arqueológicos. Esta cantidad mínima de bienes inmuebles en condiciones para la inversión genera que se mantenga una brecha de 99.9% en bienes inmuebles prehispánicos declarados patrimonio cultural de la nación sin servicios de interpretación cultural

Siendo ello así se requiere que se genere un marco normativo que logre el objetivo del saneamiento físico legal y facilite la inversión pública y privada, y que de oficio inscriba la carga cultural de la zona arqueológica quedando dicho bien con la calidad de saneado.

Asimismo, cabe precisar que la presente propuesta impacta también en el dinamismo económico local en el que se encuentra cada zona arqueológica, dado que, al generarse inversión para su puesta en valor, ello ocasionará que la misma, cuente con un atractivo adicional para el turismo cultural, y reforzar el interés del turista nacional o extranjero de conocer parte de nuestra historia fortaleciendo con ello la identidad cultural.

II.1.29 Reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura a nivel nacional.

En la actualidad existen constantes hechos de invasiones y asentamientos en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siendo que a la fecha se vienen registrando aproximadamente 800 invasiones en zonas arqueológicas. Esta problemática se agudiza en la medida que convergen acciones de tráfico de terreno que, a su vez, provoca una constante cadena de actos ilegales e irregulares que, además de afectar al patrimonio cultural de la nación, decanta en diversos hechos delictivos agudizan el problema de inseguridad en la comunidad.



Asimismo, estas afectaciones generan un costo económico y social importante respecto a la reversión de las afectaciones ocurridas en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, y a su vez por las constantes acciones que realiza el Ministerio de Cultura para la defensa y protección de los bienes culturales en trámites judiciales y administrativos.

Por otro lado, es menester señalar que a la fecha se han registrado 846 denuncias por asentamiento (invasión), los cuales se dividen en: 651 asentamientos precarios, 85 denuncias por lotización, 60 denuncias por ampliación de asentamiento y 50 denuncias por edificaciones precarias.

La actuación del Ministerio al respecto, es de 06 recuperaciones en el año 2020, 12 recuperaciones en el año 2021, 05 recuperaciones en el año 2022, 01 recuperación en el año 2023 y 02 recuperaciones en el año 2024, teniendo 16 recuperaciones que se encuentran pendientes de ejecución. Esta cantidad de acciones es insuficiente por lo complejo y costoso que resulta su ejecución. Del mismo modo, el marco normativo existente no permite realizar las recuperaciones en un plazo oportuno, que permita garantizar la salvaguarda y defensa del Patrimonio Cultural.

En esa línea, el presente proyecto normativo **establece además un procedimiento célere para la recuperación extrajudicial (plazo de 48 horas),** en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el gobierno local en que se encuentre el bien cultural afectado.

Así también, para la prosecución de la recuperación extrajudicial por parte del Ministerio de Cultura, se propone que **la propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura sobre un predio y/o bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, se acredite con la partida registral y/o resolución de declaratoria y/o plano de delimitación aprobado o cualquier otro documento o comunicación emitida por el Ministerio de Cultura** que sustente su condición cultural; independientemente de que el predio y/o bien inmueble se encuentre o no inscrito en el Registro de Predios, en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP o en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología-SIGDA.

II.1.30 Establecer un marco normativo para promover que la atención de las entidades públicas se brinde en el idioma local para los hablantes de lenguas indígenas u originarias, en ámbitos con predominancia lingüística.

El Decreto Legislativo promoverá la atención eficiente a hablantes de lenguas indígenas u originarias por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en ámbitos de predominancia lingüística, de acuerdo con la información del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Para ello, se propondrá que los puestos de atención directa al público hablante de lenguas indígenas u originarias de las entidades sean ocupados por personal (servidores) con un perfil bilingüe (lengua indígena-castellano), en ámbitos de predominancia lingüística, de conformidad con lo establecido en el Mapa Etnolingüístico del Perú, aprobado por el Ministerio de Cultura.

La norma se sustenta en dos (2) presupuestos. Por un lado, el ámbito de aplicación de la norma alcanza solo a entidades públicas ubicadas en zonas de predominancia lingüística de acuerdo con lo establecido en el Mapa Etnolingüístico del Perú; y por el otro, que la regulación buscará que solo los puestos de atención directa al público, en las entidades tenga el perfil bilingüe (tales como mesas de partes, oficinas de orientación al ciudadano, entre otros).

En esa línea, la norma tiene por propósito la reasignación del personal bilingüe (lengua indígena-castellano) que actualmente labora en las entidades públicas, a través de mecanismos como la modificación del lugar de prestación de servicios o rotación del personal CAS, figuras reguladas en el marco normativo

vigente. Excepcionalmente, cuando las entidades públicas vayan a convocar a personal, podrán priorizar la contratación de personal bilingüe específicamente para los puestos de atención directa a la población. La implementación se realizará en el marco de la asistencia técnica que brinda el Ministerio de Cultura a las entidades públicas para la implementación de servicios públicos con pertinencia lingüística, contando con un plan de trabajo para dicho efecto.

Al respecto, es importante destacar que desde el año 2017, el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, ha realizado dieciséis (16) campañas de certificación de competencias en las lenguas indígenas quechua, en sus variedades Chanka y Cusco-Collao, y aimara, lenguas que representan casi el 95% de hablantes de lenguas indígenas del país. Como resultado de dichas campañas se han certificado a un total de **2827 servidores(as) públicos bilingües** que prestan servicios en los departamentos de Ayacucho (1149), Cusco (834), Apurímac (465), Puno (306), Lima (13), Huancavelica (50), Arequipa (3), Junín (2), Moquegua (1), Madre de Dios (1) e Ica (3). Con ello, el Estado ha invertido tiempo y recursos en certificar a servidores públicos bilingües de todo el país, con lo cual se requiere su inserción en el servicio público. Cabe precisar que todo este personal actualmente ya se encuentra laborando en diversas entidades públicas de los distintos niveles de gobierno y que podría ser reasignada, de acuerdo con el perfil requerido, a las áreas de atención directa a la población hablante de lenguas indígenas u originarias. La fuente de información para las entidades públicas es el Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües – RENASERBI, creado por la Ley N° 29735, administrado por el Ministerio de Cultura.

Actualmente, hay instituciones públicas que cuentan con servidores públicos bilingües, como se advierte de las Encuestas Lingüísticas Institucionales realizadas por la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, en el marco de la asistencia técnica a las entidades públicas para brindar servicios públicos con pertinencia lingüística en ámbitos en los cuales una lengua indígena u originaria es predominante. En efecto, en departamentos como Apurímac, cuya predominancia lingüística determina que el 69.9% de su población habla una lengua indígena u originaria, las entidades públicas ya cuentan actualmente con personal con un dominio de la lengua. Por ejemplo, el Poder Judicial ya cuenta con 83 servidores públicos quechuahablantes; en la misma línea EsSalud cuenta con 40 servidores públicos bilingües contratados, el Ministerio Público con 53 servidores y la Dirección Regional de Salud con 17 servidores públicos quechuahablantes.

Lo mismo ocurre en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Carhuaz, en el departamento de Áncash, existe una predominancia lingüística del 71.8%, y a partir de la Encuesta Lingüística Institucional aplicada por el Ministerio de Cultura se ha determinado la existencia de 101 servidores públicos quechuahablantes en la Municipalidad Provincial.

Asimismo, parte de los/as intérpretes y traductores/as del Registro Nacional de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura laboran como servidores públicos en distintas instituciones públicas.

Finalmente, cabe precisar que esta propuesta es necesaria porque el Estado funciona bajo una perspectiva monolingüe y monocultural. En consecuencia, la

atención que brinda a los y las ciudadanas se realiza principalmente en castellano, siendo la lengua predominante en este espacio, excluyendo a las lenguas indígenas u originarias, así como a sus hablantes.

Asimismo, existe una desvalorización y discriminación de las lenguas indígenas u originarias y sus hablantes, quienes se hallan en una constante situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión, que limita su desarrollo. La exclusión tiene como consecuencia la falta de acceso a los servicios públicos y con esto la limitación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, educación, justicia, trabajo, entre otros.

Frente a esto, con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de la población hablante de una lengua indígena u originaria, y sus demás derechos fundamentales que les permita gozar de una ciudadanía plena se requiere garantizar la prestación de servicios públicos en lenguas indígenas u originarias.

II.1.31 Establecer estímulos económicos para incentivar la investigación en arqueología y otros ámbitos culturales relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble y mueble; y, la investigación sobre las artes, sobre la industria audiovisual y cinematográfica, y, sobre el libro y la lectura; con cargo a los estímulos económicos aprobados por Decreto de Urgencia 022-2019.

En la actualidad, existe una relegada actividad relacionada a la investigación en artes, libro, cine, arqueología y otros ámbitos culturales a pesar de que la Ley de Creación del Ministerio de Cultura establece como una de sus funciones la promoción de la investigación.

Cada año existe una reducida cantidad de proyectos de investigación cultural, en comparación con los proyectos preventivos vinculados a la ejecución de obras productivas, extractivas, de servicios e infraestructura. Esta situación es consecuencia del escaso financiamiento para la investigación arqueológica por parte de universidades e instituciones privadas vinculadas al quehacer científico, soportándose esta actividad en base al financiamiento de entidades internacionales.

A la fecha, contamos con más de 26 mil zonas arqueológicas identificadas, pero no se cuenta con el debido financiamiento para coadyuvar a su investigación, así como otros bienes culturales. Asimismo, existe un desbalance territorial de los proyectos de investigación arqueológica a nivel nacional, siendo beneficiadas solamente algunas regiones ubicadas en la costa peruana, mientras no se registran investigaciones en algunas regiones de la sierra y la selva. De esta manera, el conocimiento de nuestro pasado y riqueza cultural resulta parcial a nivel nacional, lo que produce desconocimiento de la importancia y potencial de los bienes inmuebles prehispánicos en ciertas regiones, situación que resulta perjudicial para la protección de estos bienes protegidos y administrados por el Estado.

De esta manera, desde el Estado no se logra desarrollar ni promover las acciones necesarias para la investigación en arqueología y otros ámbitos

culturales relacionados a los bienes inmuebles prehispánicos, manteniéndose el status quo de escazas investigaciones culturales a nivel nacional.

De igual manera, no se promueve la investigación arqueológica en ciertas regiones del país; por lo cual, los gobiernos locales solicitan continuamente que el Ministerio de Cultura financie estos proyectos que consideran fundamentales, a pesar que la entidad no cuenta con los recursos financieros necesarios para cumplir con esta labor.

Es importante precisar que, a la fecha existen estímulos económicos que convoca el Ministerio en virtud del DU Nº 022-2019-MC. Este presupuesto asignado se prioriza a líneas concursables y no concursables de producción y/o creación y es otorgado a personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades en el ámbito de las artes y las industrias culturales.

No obstante, hace falta el financiamiento para las líneas de estímulo de investigación que atiendan la necesidad de (i) promover e incentivar nuevos conocimientos en torno a los bienes inmuebles como las zonas arqueológicas y/o monumentos, entre otros; y, (ii) propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión de las labores del pasado que hicieron lo que el arte, el cine y el libro peruano son hoy.

De esta forma, el presente proyecto pretende la modificación de la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 022-2019, para autorizar al Ministerio de Cultura el otorgamiento de Estímulos Económicos también a favor de promover e incentivar nuevos conocimientos en torno a los bienes inmuebles como las zonas arqueológicas y/o monumentos, entre otros; y, propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión.

II.1.32 Regular el marco normativo para promover el sector artístico y creativo, considerando mecanismos de promoción y posicionamiento de los artistas y creadores.

El MINCUL considera prioritario la necesidad de elaborar una ley de promoción artística con la finalidad de brindar las mejores opciones de desarrollo de los artistas, siendo esta tarea muy especial por cuanto la pandemia del COVID-19 ha evidenciado la fragilidad de los sistemas de cultura en diversos países y mucho más en el nuestro.



A través del Estudio "Estimación de los efectos producidos por la pandemia COVID-19 en el empleo y los ingresos de las industrias culturales y creativas del Perú" advirtió que, en el segundo trimestre del 2020, se identifica que 6 de cada 10 trabajadores dejaron por completo su ocupación en actividades como la música, el cine, la edición de libros, el diseño o las telecomunicaciones a causa de la pandemia. La cifra da cuenta de que el mercado laboral de la cultura colapsó a inicios de la emergencia sanitaria y emergencia nacional. Luego se registró una recuperación, pero aún dentro de márgenes negativos, ya que el primer trimestre del 2021 el empleo decreció en 15% con relación al trimestre anterior.

Cabe precisar que, el citado estudio también identifica que, a través de una encuesta nacional, se evidenció que el 52% del total de encuestados registró pérdidas económicas entre S/ 1001 y S/ 5000, lo que representó una pérdida conjunta de aproximadamente S/ 17 296 000. Por otro lado, del total de encuestados, el 89% respondió que las actividades culturales que realizan son su principal fuente de ingreso económico.

Asimismo, como información referencial, se tiene que de la revisión de la información con la que cuenta RENTOCA se advierte que 4027 personas declararon que no contaban con un seguro de salud; y, 20328 trabajadores culturales declararon que no se encontraban afiliados a un sistema de pensiones. Cifras similares arrojan el estudio de condiciones laborales realizados en el marco del convenio Aschberg con Unesco donde se registra que el 69% de los trabajadores del arte y la cultura se encuentran en el SIS y tan solo el 18% en ESALUD. De igual manera, un 77% no se encuentra afiliado a ningún sistema de pensiones.

Ligado a ello, en la "Encuesta sobre el impacto de la Pandemia del Covid-19 en los trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021" se estableció que una gran cantidad de trabajadores no tienen la posibilidad de destinar un porcentaje de sus ingresos al ahorro. En el 2019, el 44.7% de los encuestados respondieron que no ahorraba y solo el 2.3% confirmó que lograba ahorrar más del 50% de sus ingresos. La situación se agrava en el 2021, ya que el porcentaje de los no ahorristas subió a 71.9%.

Por su parte, en relación con los espacios culturales resulta importante indicar que en el estudio "Hacia el diseño de un plan de recuperación al 2030: Diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en las industrias culturales y artes" se evidencia que en los países del SICSUR, el 100% de centros culturales fueron cerrados y casi el 100% de cines fueron cerrados. Esto ha afectado toda la cadena de valor de los bienes y servicios culturales.

Resulta importante resaltar que el sector cultural atraviesa un punto crítico generado a partir del COVID19, el cual también fue expuesto en la "Mesa de Trabajo EscuchArte", la cual tenía como objeto proponer medidas y estrategias para el fortalecimiento, reactivación y operatividad del sector artístico. A partir de la revisión de los aportes recibidos se identificó que los temas más recurrentes están relacionados con la necesidad de contar con mejores condiciones laborales; acceso a un seguro de salud; mejorar la difusión de las artes; mejorar las condiciones de formación y capacitación para los artistas; la necesidad de que los artistas cuenten con una pensión o jubilación; y que se cuente con un mayor número de espacios culturales. Garantizando una mejora en las condiciones laborales de un sector que según el documento "22 Indicadores de la Cultura para el Desarrollo en Perú" del Ministerio de Cultura, a partir de la Cuenta Satélite de Cultura, las actividades culturales aportarían el 1,58% al Producto Bruto Interno (PBI) de Perú.

En ese sentido, en la "Encuesta sobre el impacto de la Pandemia del Covid-19 en los trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021" se evidenció que ante la consulta vinculada con la existencia de mejores oportunidades para las actividades artísticas y culturales, la mayoría de los trabajadores encuestados (46%) considera que hubo pocas mejoras, mientras que el 51.7% opina que hubo peores

condiciones o que no mejoró ni empeoró. Solo el 2.9% opina que hubo grandes mejoras.

En ese sentido, a fin de atender algunas de las problemáticas que el sector ha manifestado a través de aquella Mesa técnica y otros documentos de trabajo, se ha propuesto este proyecto legislativo que promueve el sector artístico y cultural, impulsando la visibilidad de los autores y artistas, reconociendo su labor creativa.

II.1.33 Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural

Identificación del problema público

El 5G, actualmente en desarrollo, promete un crecimiento exponencial en usuarios, velocidades de descarga ultrarrápidas, confiabilidad y baja latencia; e incluso, el mundo ya se viene preparando para la siguiente generación 6G, que mejorará y adicionará capacidades adicionales a los de su predecesora.

Como se señaló ya anteriormente, de acuerdo con "The global economic impact of 5G" (2021), la adopción de la tecnología 5G supondrá una mayor eficiencia y productividad en la economía, lo que impactará en el PBI mundial en USD 1.3 billones al 2030 en los sectores salud, eléctrico, consumo y medios de comunicación, industrial y financiero. Asimismo, de acuerdo a la GSMA (2019), los servicios 5G podrían generar una expansión económica de USD 20,8 mil millones en América Latina en el 2034, lo que representa 1,2 por ciento de crecimiento del PBI.

Pese a ello, actualmente el Perú está rezagado en la asignación de espectro 5G con respecto a Europa y América Latina, siendo que países como Chile, Brasil, México, Uruguay y Argentina ya han asignado espectro en cantidades suficientes para un despliegue óptimo de 5G. Si bien en el Perú la implementación del 5G inició en el 2021, al Tercer Trimestre del 2023, tan solo once (11) provincias del país tienen coberturas parciales 5G, con asignaciones no óptimas que resultan en bajas velocidades respecto a lo que ofrece esta tecnología, toda vez que, conforme a la GSMA (2019) se requieren asignaciones a partir de 80-100 MHz en bandas medias para optimizar los servicios 5G.

Habida cuenta de lo señalado, los plazos prolongados de asignación de espectro 5G en el Perú mediante concurso público (que van de 2 a 4 años aproximadamente), retrasarían su óptimo y oportuno despliegue para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el sector industrial, así como en otros sectores tales como salud, eléctrico, financiero, entre otros, retrasando con ello los beneficios económicos (contribución al PBI) y la competitividad del país frente a otros países de la región.

Objetivo regulatorio

Contar con procesos céleres que respondan a la necesidad de promover de forma oportuna los servicios públicos de telecomunicaciones de quinta generación (5G) y superiores.

Propuesta de solución

Facultar al MTC a aprobar un régimen que contemple medidas especiales y facultativas para la promoción de los servicios de quinta generación (5G) y superiores, que regulen mecanismos alternos y céleres para la asignación de espectro radioeléctrico.

Mediante esta medida, se faculta al MTC a contemplar un mecanismo de "asignación de espectro bajo demanda", el cual consiste en asignar directamente el espectro a solicitud de las empresas operadoras, sujeto a obligaciones económicas a cargo de estas, tales como compromisos de inversión para el cierre de brechas, de tal forma que se garantice adecuadamente la retribución por el uso del recurso natural.

Dicho mecanismo se aplicaría únicamente cuando no existan restricciones en la disponibilidad de frecuencias, es decir, cuando la demanda de las operadoras interesadas en el desarrollo del 5G no supere la oferta de espectro disponible para dicho servicio.

Como consecuencia de ello, las empresas operadoras suscribirían nuevos contratos de concesión vinculados al espectro asignado, renunciando de ser el caso a los contratos que ya tuviesen previamente en la banda de frecuencias que es materia de asignación.

De esta manera, a través de la aplicación de esta nueva modalidad de otorgamiento de concesión, contaremos con un proceso más expeditivo y célere para la asignación (y explotación) del espectro, que permita la pronta y oportuna masificación de la tecnología 5G en el país En caso se identifique que sí existen restricciones en la disponibilidad de frecuencia (esto es, que la demanda supere la oferta de espectro disponible), se procedería con la convocatoria al concurso público correspondiente, conforme a las reglas vigentes en materia de promoción de la inversión privada (es decir, mediante proyectos en activos a cargo de PROINVERSIÓN).



II.1.34 Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta; así como, eliminar la necesidad de promulgar una Ley expresa para su disolución.

La "Empresa Nacional de Puertos" se transformó en "Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.-ENAPU" mediante Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.

La Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.-ENAPU, es una Empresa Estatal bajo el ámbito de FONAFE, en la cual éste es titular del cien por ciento de sus acciones, en representación del Estado.

ENAPU adopta la forma de Sociedad Anónima, regulada por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

La Ley General de Sociedades reconoce a la Junta General de Accionistas como el órgano supremo de la sociedad, disponiendo que los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente (en el caso de ENAPU, FONAFE detenta el 100% de acciones), deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia.

No obstante, en el caso de ENAPU, FONAFE no puede tomar decisiones propias de los accionistas como son fijar la sede social o decidir su disolución por cuanto el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98 (norma con rango de ley) establece que el domicilio social de ENAPU se ubica en la Provincia Constitucional del Callao.

Debido a que el domicilio social de ENAPU se encuentra establecido en una norma con rango de ley, resulta necesaria la emisión de una norma de jerarquía legal para modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98 y que se le permita a su accionista, FONAFE poder actualizar el Estatuto de la empresa mediante acuerdo de su Junta General de Accionistas y fijar el domicilio social donde técnicamente sea lo más idóneo.

Asimismo, debido a que se encuentra establecido en una norma con rango de ley que su disolución se da solo por norma expresa de otra ley, en vez de permitir tomar tal decisión a su accionista universal, resulta necesaria la emisión de una norma de jerarquía legal para modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98 y que se le permita a su accionista, FONAFE, poder actualizar el Estatuto de la empresa mediante acuerdo de su Junta General de Accionistas y poder decidir lo que técnicamente sea lo más idóneo para la empresa.

Esta propuesta tendrá los controles necesarios ya que el artículo 34° del Reglamento de la Ley de FONAFE, aprobado mediante DS N° 072-2000-EF, señala que la disolución y liquidación de Empresas del Estado de Accionariado Único (como es el caso de ENAPU) que disponga el Directorio de FONAFE, será autorizada por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual manera, FONAFE, cuenta con el Lineamiento Corporativo para la Liquidación de Empresas, el cual dispone el procedimiento a seguir en caso, eventualmente, se liquide alguna empresa bajo el ámbito de FONAFE.



II.1.35 Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

La presente propuesta tiene por objeto establecer medidas que permitan a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) preservar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en

los Contratos de Concesión de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT), a fin de garantizar la continuidad del servicio en los precitados Corredores Complementarios, evitando el riesgo de una paralización de dichos servicios.

En atención a ello, se plantea autorizar a la ATU, para que evalúe, determine y suscriba los acuerdos para el pago de indemnizaciones vinculadas a la ejecución de los contratos de concesión de los Corredores Complementarios. Así, **la ATU es responsable de sustentar, mediante un análisis costo beneficio, la conveniencia de los acuerdos que adopte, para lo cual evalúa las alternativas de solución a las controversias en trámite y la posibilidad de éxito, prefiriendo aquellas que garanticen la continuidad del servicio y la implementación de soluciones en un plazo razonable**.

Cabe señalar que los referidos acuerdos son suscritos por las instancias competentes de la ATU y su Presidente Ejecutivo.

Por otro lado, dado que se requiere brindar una solución integral y sostenible a la problemática de los proyectos de Corredores Complementarios, también se ha previsto la aprobación de medidas que autoricen a la ATU para negociar y acordar modificaciones a los referidos Contratos de Concesión de los Corredores Complementarios, garantizando la continuidad del servicio, el Valor por Dinero y la sostenibilidad económica y financiera de dichos contratos. Para dichos efectos, **la ATU sustenta, luego de un análisis costo beneficio de escenarios, que la opción elegida y plasmada en la propuesta de modificación contractual es la más beneficiosa para los intereses del Estado y de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao**.

Como parte de las modificaciones contractuales propuestas, las partes podrán redistribuir riesgos y adecuar parámetros económico-financieros, entre otros aspectos, con la finalidad de **alcanzar el equilibrio económico financiero del respectivo contrato**.

Cabe precisar que, sin perjuicio de las demás competencias del Ministerio de Economía y Finanzas a las que se refiere el artículo 5.6 del TUO del Decreto Legislativo N° 1362, para la evaluación del equilibrio económico financiero no resulta aplicable el artículo 58.1 del TUO del Decreto Legislativo N° 1362 respecto a dicha materia, sin perjuicio de que **el equilibrio económico financiero sea evaluado y alcanzado nuevamente en el marco de la modificación contractual integral propuesta**. En adición a lo indicado, es pertinente destacar que, en todo lo no regulado en la presente medida, resultan de aplicación las reglas del TUO del Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento.

Finalmente, la presente medida contempla la participación de la Contraloría General de la República, la cual efectúa el control concurrente de las acciones y la eventual suscripción de modificaciones contractuales que se realicen al amparo de la propuesta normativa antes expuesta, en el marco de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.

II.1.36 Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen, de manera simplificada, ágil, eficaz y eficiente.

El proyecto normativo tiene por objetivo optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos simplificados, ágiles, eficaces y eficientes para la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen; toda vez que se ha identificado retrasos o demora de los trámites de dichos procedimientos por parte de los gobiernos locales. La propuesta normativa permitirá la óptima ejecución y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de toda la cadena logística, humana y económica conexa; desarrollando entre los principales aspectos, así como creación de nuevos actores que intervendrán en las habilitaciones urbanas y edificaciones.

La propuesta de nuevos Actores, como son el Órgano Técnico Revisor, que es parte del órgano colegiado, y tienen como función revisar en única y última instancia administrativa los dictámenes vinculantes emitidos por los Revisores Urbanos; y, el Inspector Privado de Obra, que tiene como función verificar la correcta ejecución de las obras, reportar a la municipalidad y al colegio profesional; no son adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino estos profesionales pertenecen a los Colegios Profesionales, por tanto ambos actores no requieren financiamiento adicional del tesoro público. Por no formar parte de la estructura y funcionamiento del estado, no requieren opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública.

Asimismo, efectuado el análisis de impactos cuantitativos y cualitativos de la norma se verifica que la propuesta normativa no irrogará gasto adicional alguno al Tesoro Público, toda vez que sus disposiciones están orientadas a regular los procedimientos de emisión de licencias de habilitación urbana, de edificación y de todos los actos administrativos que las complementen; la ejecución, supervisión y fiscalización de las obras autorizadas; los roles, funciones y competencias de los distintos actores que intervienen en dichos procedimientos; la documentación y demás documentación que se requiere para la tramitación de estos procedimiento, así como los actos administrativos que se emiten al final.

II.1.37 Optimizar el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando las condiciones a cumplir en relación al plazo máximo de adecuación establecido, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental aplicable y medidas complementarias de simplificación, promoción e impulso integral de la adecuación progresiva

El Decreto Legislativo Nº 1285 mediante su artículo 4 estableció un plazo para la adecuación progresiva de los vertimientos del sector saneamiento no mayor de 9 años, el cual vence el 10 de agosto del 2026. Al respecto, faltando 2 años para cumplir el plazo antes indicado, de un universo de 1271 prestadores de servicios de saneamiento (PSS) solo el 26.9% ha obtenido el Instrumento de

Gestión Ambiental (IGA) pertinente, encontrándose en condiciones aptas para solicitar y tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la Autorización de Vertimiento respectiva, y posteriormente ejecutar la obra.

Mediante la propuesta normativa se pretende precisar que el plazo previsto en el referido artículo 4 del Decreto Legislativo 1285 corresponde al plazo límite para poder presentar el IGA ante la autoridad competente, siendo que la ejecución de la obra y el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental se logra conforme a lo que establezca el IGA aprobado. Para ello, también se establecerá predictibilidad respecto al tipo de IGA que corresponda a cada proyecto o intervención según su naturaleza, capacidad, entre otros aspectos que se desarrollarán en la propuesta normativa.

Además, se propone incorporar otras medidas, tales como incentivos para la adecuación, con programas de inversión focalizados, de transferencias condicionadas; así como, la promoción de la economía circular y el reúso de las aguas residuales, como parte esencial del pacto nacional por la economía circular, y de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 20301, que promueven, entre otros, la reducción del vertimiento, así como otras medidas para el abordaje integral de esta problemática.

II.1.38 Establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.

La brecha (cualitativa y cuantitativa) del sector construcción, que genera un déficit de infraestructura, tiene como una de sus causas el uso de pocos materiales y productos de la construcción (concreto y bloques de albañilería, esencialmente) así como de insuficientes o inadecuados procedimientos constructivos (lentos o riesgosos).

En la actualidad no se cuentan con medidas que fortalezcan y faciliten la utilización de tecnologías alternativas y/o sistemas, y/o materiales constructivos no convencionales (SCNC), que propicien no sólo la reducción de la vulnerabilidad sino además el desarrollo del sector construcción.

Asimismo, no se cuentan con reglas técnicas y legales que doten de predictibilidad al proceso para la utilización de sistemas constructivos no convencionales, lo que hace que el procedimiento sea engorroso, además de generar altos sobrecostos en aquellos interesados en gestionar inversiones en estas tecnologías constructivas no convencionales; generando el desincentivo en los administrados que proponen innovaciones tecnológicas para la mejora en la infraestructura, específicamente en construcción y saneamiento.

Cabe precisar que las tecnologías constructivas no convencionales ofrecen ventajas como la reducción de costos y en la reducción de los tiempos de construcción, entre otros.

Por ejemplo, la construcción modular prefabricada implica la fabricación de componentes de edificios en fábricas y su posterior ensamblaje en el lugar de construcción, lo cual permite una mayor eficiencia en la utilización de materiales y una reducción en los residuos de construcción.

A pesar de las ventajas, la adopción de tecnologías constructivas no convencionales aún enfrenta algunos desafíos, como la resistencia a la innovación, la necesidad de estándares de calidad y seguridad, y la falta de regulaciones específicas en algunos países como el Perú.

II.1.39 Fortalecer y modernizar la gestión del Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

Se busca dotar al IMARPE de una nueva Ley que promueva una verdadera modernización de la Entidad:

El marco legal Institucional vigente no cuenta con un análisis mínimo que justifique una reorganización institucional, tampoco cuenta con la opinión, ni de especialistas en gestión de instituciones públicas científicas, ni con el parecer del personal científico del IMARPE.

No reconoce la función rectora del IMARPE en el país, en el campo de las ciencias acuáticas y pesqueras, como sí lo hacen las leyes de otros institutos públicos de investigación del país.

No vislumbra, ni enfatiza funciones futuras que promuevan el estudio de grandes problemas de la agenda internacional en materia de las ciencias acuáticas y del mar (biodiversidad y genómica, biotecnología, enfoque ecosistémico, variabilidad ambiental y cambio climático, contaminación de los ambientes acuáticos, pesca ilegal, pesca fantasma, etc.). **lo cual redunda en el beneficio a la comunidad pesquera nacional y a la sociedad en su conjunto.**

No promueve y menos reconoce el rol importante que tiene el IMARPE actualmente en la formación de profesionales de las ciencias del mar, a través del desarrollo de tesis de pre y pos grado, teniendo en cuenta que es la única institución del país que en esos campos desarrolla investigaciones permanentemente desde hace 6 décadas, y puede convertirse en una entidad promotora complementaria a las instituciones educativas en la formación de recursos humanos de calidad y con altos niveles de competitividad.

Reduce el ámbito geográfico del Instituto solo al mar peruano, soslayando la importancia de los intereses del Perú en la altamar y en la Antártida, ámbitos en los que actualmente el IMARPE realiza investigaciones científicas, y que deben explícitamente ser promovidas.

Conforma el Consejo Directivo del instituto, con entidades cuyo ámbito funcional no incluye las ciencias del mar (el mayor porcentaje de la actividad del instituto), así como con personas independientes que no ejercen representatividad de organizaciones públicas o privadas; por lo tanto, sin la obligación de la rendición de cuentas, que van a recibir información muy sensible para la toma de decisiones por parte del PRODUCE y otras entidades del Estado.

No advierte la necesidad de implementar mecanismos para la captación de recursos financieros complementarios mediante la oferta de servicios especializados, como sí lo hacen las leyes de otros institutos públicos de investigación.

No promueve mecanismos para una mejora remunerativa ante el trabajo especializado y de riesgo del personal científico y técnico del IMARPE, como sí lo hace la reciente ley de un instituto público de investigación.

Incluye funciones referidas a investigaciones tecnológicas sobre preservación a bordo y del desembarque, que en los años 80 ya fueron transferidas al ITP, y por tanto ya no realiza el IMARPE.

No fortalece a la institución en su estructura organizacional, para un mejor cumplimiento de sus fines y misión institucional, ya que desaparece la instancia necesaria de coordinación multidisciplinaria de la investigación como es la Dirección Científica, y concentra toda la toma de decisiones en una sola instancia: la Presidencia Ejecutiva. Esta situación ya se ha experimentado temporalmente en el año 2020, demostrando que complica la gestión óptima de la institución. Esto va contra una tendencia en la evolución institucional, desde su creación, hacia la diversificación de la toma de decisiones; que ha demostrado en la práctica que la gestión óptima de la generación de conocimiento científico en IMARPE se basa en tres pilares: una de dirección general y representación, otra de coordinación científica multidisciplinaria para la gestión de la generación del conocimiento y otra de coordinación de la gestión administrativa.

Fundamento técnico

Los recursos que habitan los ecosistemas acuáticos tienen límites para su explotación ya que, si bien son renovables, también son potencialmente agotables. Las malas o débiles prácticas de gestión pueden conllevar a incurrir en sobrepesca y poner en riesgo la sobrevivencia del recurso, así como su disponibilidad para la pesca, poniendo en peligro, a su vez, la actividad económica en el sector pesquero. Por este motivo la FAO, organismo de Naciones Unidas aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CPR-FAO, 1995), recomendando que los Estados deberían establecer medidas de gestión u ordenamiento de sus pesquerías en base a la información científica más fidedigna disponible, obtenida a partir de investigaciones serias y responsables que tengan como objetivo evaluar el estado de los recursos pesqueros y el análisis de los posibles efectos que dichas medidas puedan tener para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos.

En la actualidad el Perú, como el resto del mundo, se enfrenta a nuevos desafíos que afectan al estado de los ecosistemas marinos y continentales: los recursos naturales varían en su abundancia y están amenazados por el cambio climático, la destrucción de hábitats, la contaminación, las actividades pesqueras no sostenibles y destructivas, la pesca ilegal, la acidificación y el calentamiento de los océanos, los cambios de las corrientes, la disminución de los niveles de oxígeno en el mar, entre otros **y por consiguiente a la sociedad desde el punto de vista de sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.**

En tal sentido, el rol que debe cumplir el Instituto del Mar del Perú – IMARPE en el futuro, en relación con el avance de la ciencia y tecnología, las nuevas demandas de investigación, la temática que recogen las agendas nacionales e internacionales respecto a los recursos pesqueros y su sostenibilidad, resulta necesario y oportuno dotar a la entidad de un nuevo dispositivo que fortalezca su funcionamiento, considerando las nuevas funciones que viene ejecutando y prevé ejecutar la institución.

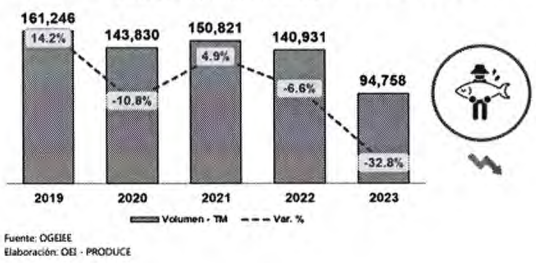
II.1.40 Modificar la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.

Según el Ministerio de Producción, el Perú captura, en promedio, más de 5.5 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos al año, lo que representa el 7.1 % de la pesca mundial, esta situación nos coloca como la tercera potencia pesquera, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otro lado, se señala que la actividad acuícola proyecta convertirse en uno de los motores de crecimiento del país en el marco del Plan Nacional de Competitividad y alcanzar no menos del 15% del PBI pesquero en los próximos cinco años.

De acuerdo a cifras del INEI, en el año 2023, la mayor caída en el índice de producción nacional lo registró el sector pesca, el cual presentó una caída del 19.75%, siendo consecuencia de las condiciones climáticas adversas por la ocurrencia del Fenómeno El Niño costero presentadas desde diciembre de 2022.

Así, en dicho año, la cosecha de recursos hidrobiológicos de la acuicultura presentó una disminución, en términos de volumen, del 32.8% (46,173 TM) respecto al año 2022. Este desempeño negativo obedece entre otros factores a una competitividad limitada en el sector, en un escenario climatológico adverso.

Cosecha de recurso hidrobiológicos de la acuicultura, 2019 –2023
(Miles de TM y variación % anual)



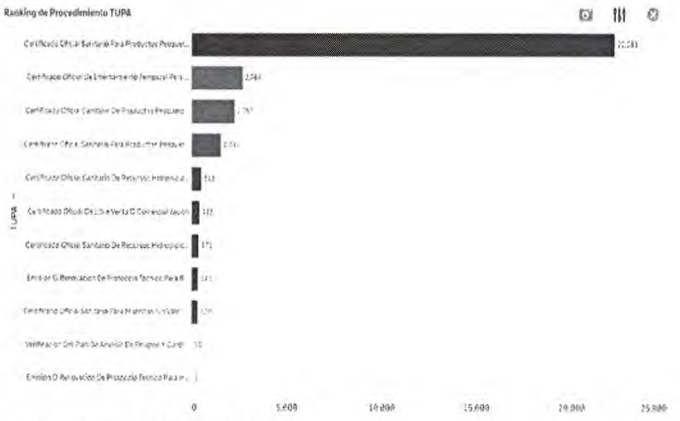
Fuente: OGEIEE
Elaboración: OEI - PRODUCE

La modificación de Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), permitirá la implementación del análisis de riesgo y optimizar la gestión en los procesos relacionados al otorgamiento de certificaciones y/o habilitaciones, así como la priorización en la fiscalización estableciéndose intervenciones según niveles de riesgo (canal verde, amarillo y rojo) lo cual contribuirá a generar confiabilidad, transparencia y competitividad, en el marco del fortalecimiento, optimización de recursos y mejora continua de los procesos asociados.

Cantidad de trámites de certificaciones / habilitaciones 2023 – Sanipes

EQUIPO	TIPO	MP SANIPES	VUCE	Total general
CERTIFICACIONES	EXPORTACION		21,935	21,935
	IMPORTACION		4,343	4,343
	MERCADO NACIONAL		1,237	1,237
Total CERTIFICACIONES			**27,515**	**27,515**
HABILITACIONES	IMPORTACION - EXPORTACION		258	258
	-	5,135		5,135
Total HABILITACIONES		**5,135**	**258**	**5,393**
Total general		**5,135**	**27,773**	**32,908**

Fuente: SIGESDOC – Sanipes 2023



Fuente: VUCE 2023

Actualmente, los pequeños productores acuícolas tienen limitado acceso a certificaciones/habilitaciones sanitarias que garanticen la sanidad e inocuidad de los recursos o productos hidrobiológicos, por lo que es necesario establecer la implementación progresiva de los Principios Generales de Higiene y Buenas Prácticas de Manufactura, lo cual contribuirá a su inclusión en el mercado productivo, cumpliendo las exigencias sanitarias, ello significa la optimización y simplificación de los procedimientos administrativos.

Nro. de Centros Acuícolas	Con habilitación sanitaria	%
3230	800	24.77%

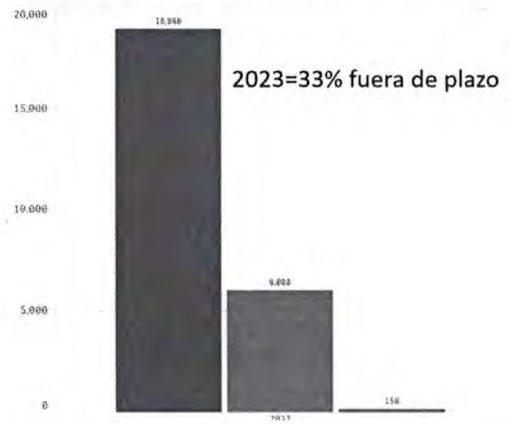
Fuente: PESEM 2024-2030 Produce

Asimismo, la actual estructura organizacional y funcional de SANIPES, pese a ser una organización altamente especializada, tiene un diseño que dificulta cumplir la misión institucional al no estar alineada a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 de la PCM. Es preciso señalar que la estructura de la entidad debe estar orientada a garantizar la sanidad e inocuidad, así como la promoción de la competitividad en el mercado nacional e internacional y seguridad jurídica.

En la misma línea, se tiene la necesidad de visibilizar a la autoridad sanitaria nacional como una organización con competencia técnica, confiable y eficiente, que a su vez sea referente a nivel nacional y para las autoridades sanitarias de los países de destino.

En razón de ello es requerido alinear al SANIPES con la política de modernización vigente, con un enfoque orientado a la creación de valor público en beneficio del ciudadano, así como los destinatarios de los bienes y servicios otorgados por la institución, generando un impacto positivo en toda la cadena productiva pesquera y acuícola, considerando procesos adaptativos rápidos al entorno en un contexto en el que dicha cadena se encuentra en permanente evolución y cambio por factores económicos, sociales, así como ambientales.

Cantidad de trámites VUCE fuera de plazo 2023 – Sanipes



Por otro lado, existe una brecha de productores pesqueros y acuícolas, principalmente pequeños, que no cumplen o no cuentan con los medios suficientes para acceder al mercado de manera competitiva. En esta línea, también es necesario fortalecer dentro de las competencias de la entidad, a la acuicultura como actividad productiva con el mismo nivel y alcances que la actividad pesquera alineándose a la política general de acuicultura, permitiendo así no solo visibilizar la actividad acuícola sino implementando acciones que impulsen la competitividad en esta cadena productiva.

En adición a lo señalado, es necesario advertir que en la normatividad vigente que regula la creación y funcionamiento del Sanipes, así como los servicios de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, no se incluye como objeto de ley, la garantía de la sanidad hidrobiológica. Adicionalmente, las funciones actuales están restringidas a los piensos siendo necesario incorporar los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.

II.1.41 Modificar los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 13 e incorporar la Quinta Disposición Complementaria Final en el Decreto Legislativo N° 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, a fin de establecer las condiciones habilitantes para el impulso de la inversión privada y pública en infraestructura productiva industrial.

Se requiere la modificación del DL 1199, considerando que, a la fecha, se cuenta con el primer parque industrial de relevancia nacional (Parque Industrial Ancón) en proceso de implementación a través del mecanismo de proyectos en activos, el cual forma parte de la cartera de PROINVERSION; cabe precisar que, también

se cuenta con tres (3) iniciativas de parques industriales privados en proceso de incorporación al Sistema Nacional de Parques Industriales (SNPI); requiriéndose además incorporar otras tipologías de espacios donde se desarrollan actividades industriales, entre ellas zonas industriales, áreas industriales, polígonos industriales, centros industriales, entre otros, que complementen y consoliden el SNPI.

La modificación normativa propuesta está centrada en la actualización de los componentes del SNPI, así como definir y actualizar las condiciones para la ejecución de parques industriales, además, el desarrollo de los beneficios que el SNPI establece para las iniciativas de parques industriales en el país, ello con el objetivo de facilitar la inversión tanto pública como privada en este tipo de infraestructura productiva.

La propuesta modificatoria, se encuentra alineada a la realidad del sector industrial del país; permitirá incorporar además de los parques industriales, las zonas industriales, centros de desarrollo Industrial, polígonos industriales, complejos industriales, conglomerados, áreas, espacios industriales y clústeres; viabilizará la gestión e implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura industrial por los diferentes niveles de gobierno que cuenten con las capacidades y recursos necesarios para su ejecución (generación de las condiciones como la accesibilidad, el saneamiento de los predios, dotación de los servicios básicos a través de los entes competentes y habilitación de lotes industriales).

Asimismo, incluirá una serie de condiciones habilitantes que fomentarán la inversión privada en estos espacios habilitados para el desarrollo industrial, en los cuales puedan coexistir la micro, pequeña, mediana y gran industria, formando una sinergia productiva.

Propone un modelo de administración centralizada que garantice el funcionamiento de los tipos de espacios con actividades industriales. Dicho modelo priorizará la gestión privada de dichas áreas componentes del SNPI.

Cabe precisar que, actualmente la participación de la industria manufacturera en el Producto Bruto Interno (PBI) representa el 12%, cifra poco alentadora con el proceso de industrialización del país, la propuesta busca revertir la tendencia decreciente experimentada como país en los últimos 10 años, y que el 94.2% del total de las empresas manufactureras del país son microempresas y el 4.7% representan las pequeñas empresas.

II.1.42 Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

A través del artículo 11 de la Ley N° 30056, (publicada el 03.07.2013), se modificó el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto

Supremo N° 008-2008-TR, estableciéndose como único parámetro para la caracterización y/o medición de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), el nivel de sus ventas, eliminándose el parámetro de número de trabajadores, que se mantuvo vigente con el Decreto Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

A la fecha, se encuentra vigente el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que consolida la Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa y sus modificaciones realizadas mediante el Decreto Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente y la Ley N° 30056 (Ley MYPE).

No obstante, el cambio realizado a través de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056 dispuso que: *"Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086*".

Si tenemos en consideración que de conformidad con el numeral 2 del artículo 64 del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y desarrollo de la Mico y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Reglamento de la Ley MYPE, se ha previsto que la inscripción en el REMYPE, tiene por finalidad *"Autorizar el acogimiento de la micro y pequeña empresa a los beneficios que le correspondan conforme a la Ley y el presente Reglamento (...)"*, las MYPE al momento de inscribirse al REMYPE, dependiendo de su fecha de constitución, serán evaluadas bajo un doble estándar: i) Las empresas constituidas hasta el 03.07.2013, su inscripción en el REMYPE dependerá del nivel de ventas y trabajadores; y ii) Las empresas constituidas a partir del 04.07.2013, su inscripción en el REMYPE dependerá exclusivamente del nivel de ventas.

El doble estándar considerado a través de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056 afecta al segmento empresarial MYPE, que representa a más del 99% de las empresas a nivel nacional. Este tratamiento desigual, no solo es contrario a lo establecido en la nueva caracterización de la MYPE a partir de la Ley N° 30056, sino que además complica innecesariamente la administración del citado registro.



Adicionalmente, esta situación resulta incompatible con la dinámica de la gestión empresarial. Ello se evidencia a través del siguiente ejemplo: Dos empresas A, constituida el 2010, y B, constituida el 2014, por razones de campaña, temporada, etc., lo cual es muy frecuente, decidieran contratar trabajadores a tiempo parcial, y debido a que el costo laboral es menor en estos casos, decidieran contratar a quince (15) trabajadores, como consecuencia del doble estándar se darían consecuencias diferentes frente a una misma medida o estrategia empresarial. La Empresa A, constituida el 2010, sería excluida del REMYPE, y queda sujeta al cambio de sus beneficios, generándose

contingencias no previstas y mayores costos laborales, pues habría superado el número máximo de diez (10) trabajadores, mientras que la empresa B, constituida el 2014, se mantendría en el REMYPE, y seguiría siendo beneficiaria de los derechos de la Ley MYPE, pues, por la fecha de constitución, no le es aplicable el parámetro de trabajadores.

Este doble estándar, afecta innecesariamente la productividad y competitividad de las empresas, pues ante el mayor costo laboral por el cambio de régimen, se verían obligadas5 a reducir personal y perdiendo competitividad ante sus pares, exponiéndose con ello a una eventual salida del mercado o incursionar en la informalidad empresarial y/o laboral.

Si tenemos en consideración que el segmento empresarial MYPE representaba el año 2012 el 99.3% del tejido empresarial (es decir, 1 338 252 empresas), y como tales constituidas al 2013 es decir sujetas a ser medidas en función del nivel de ventas y el número de sus trabajadores, mientras que al 2021 las MYPE representaban al 99.4% (es decir, 2 118 293 empresas). Si tomamos como referencia estos datos, sin considerar la mortalidad empresarial, podríamos inferir, para efectos de establecer una aproximación para determinar a las potenciales MYPE que accederían al REMYPE, según su fecha de constitución, podríamos establecer que 780,041 MYPE estarían constituidas después del 2013, es decir sujetas a ser medidas en función a su nivel de ventas, facilitando el acceso al REMYPE de un número mayor de empresas.

II.1.43 Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento.

Actualmente, la Ley N° 30512 en su artículo 24-A regula dos (2) etapas del procedimiento de licenciamiento de IES y EES: (i) evaluación integral para realizar todas las evaluaciones y (ii) la etapa resolutiva que finaliza el procedimiento. Asimismo, dispone que el plazo de licenciamiento es de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud.

Bajo ese marco normativo, es preciso señalar que desde el año 2022, la evaluación conjunta de la admisibilidad de la presentación de documentos y su contenido vinculado al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad supone un desgaste del periodo útil para la atención de los expedientes de licenciamiento, lo cual genera la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos humanos y financieros.

Dicha evaluación conjunta supone que todos los expedientes sean tramitados conforme al marco normativo vigente que incluye visitas de verificación presencial que generan un gasto adicional tanto de personal contratado para dicho fin como de personal CAS. Cabe señalar que dicha actividad se realiza incluso en aquellos expedientes en los que se identifican omisiones de documentos obligatorios. Es decir, que a menos que se identifique un problema

de improcedencia en las solicitudes, corresponde la evaluación y contratación de personal para expedientes que tendrán un resultado negativo como inadmisibles. Al respecto, es pertinente indicar que el setenta y cinco (75) por ciento (%) de expedientes evaluados que equivale a setenta y cuatro (74) expedientes recibidos han presentado observaciones vinculadas con documentos de admisibilidad, tomando en cuenta documentos con dependencia de otras entidades o documentos declarativos.

En virtud del contexto antes señalado, se presentan algunos escenarios: (i) los administrados no cuentan con información intermedia respecto de aquellos documentos, que por omisión involuntaria o no, no se presentaron y que deben subsanar a fin de que se les permita evidenciar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad; (ii) se suele extender el periodo para la evaluación de los expedientes a consecuencia de un insuficiente periodo de levantamiento de observaciones toda vez que el administrado deberá rectificar la información observada en base a los criterios de cumplimiento, así como modificar aquellos documentos que no fueron presentados, a fin de mantener la coherencia y consistencia requerida por norma.

Sumado a ello, cabe mencionar que, las modificaciones que realice el administrado deben estar sujetas a la planificación de forma anual, tal es el caso, de requerir un Plan de Cumplimiento que tiene un periodo de hasta dos (02) años para las instituciones públicas o de hasta un año para las instituciones privadas, se deberá realizar una tercera evaluación de todos los documentos, los mismos que deben ser ajustados a la fecha de presentación. Por lo que, el procedimiento de licenciamiento tendría una duración de más de dos (02) años. Al respecto, en dicho escenario se encuentra el cien (100) por ciento (%) de expedientes ingresados por adecuación que equivale a noventa y cinco (95) expedientes.

Por otra parte, respecto del plazo del procedimiento de licenciamiento de IES y EES, se evidencia una limitación en el período de ciento veinte (120) días hábiles para la atención de los expedientes, toda vez que el marco normativo vigente, en primer lugar, dispone que se deben evaluar tanto los requisitos de admisibilidad como las condiciones básicas de calidad y; en segundo lugar, habiéndose subsanado las observaciones, se debe realizar por segunda vez dicha evaluación, lo cual implica que el periodo del procedimiento de licenciamiento sea mayor al establecido en la normativa vigente; a fin de lograr que los administrados logren su licenciamiento institucional habiéndose respetado el debido procedimiento de todas las etapas de forma preclusiva.

Siendo así, resulta oportuno y pertinente modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento de IES y EES de ciento veinte (120) días hábiles a doscientos (200) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud, siendo más precisos, corresponde establecer un periodo específico para la etapa de admisibilidad y la evaluación de la información presentada, así como disponer de plazos diferenciados para culminar con la evaluación de admisibilidad antes de iniciar con la evaluación de las condiciones básicas de calidad.

En tal sentido, resulta necesario modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, referido al plazo y etapas del procedimiento de licenciamiento de IES y EES, que permita simplificar dicho procedimiento y lograr una eficiencia en los resultados.

II.1.44 Establecer medidas de simplificación administrativa al marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas, a fin que se mejore y agilice el procedimiento actual.

Conforme con lo previsto en el artículo 79 de la LGE, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado, teniendo como función, de acuerdo al literal i) del artículo 80 de la mencionada norma, el liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar el presupuesto nacional de educación, así como los planes de inversión e infraestructura educativa.

En el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, se establecen principios, normas y procedimientos que aplican al proceso de modernización de la gestión pública, el cual consiste en la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas. En el presente caso el valor público en la prestación del servicio educativo por parte del Estado (MINEDU) se ve complementado en una disminución de la brecha de infraestructura, lo cual será factible dotando al MINEDU de los dispositivos legales idóneos que le permitan regularizar los derechos reales (propiedad y/o uso) que ejerce sobre los predios e inmuebles ocupados por Instituciones Educativas (procedimiento especial de saneamiento físico legal más célere), lográndose de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas generando beneficios a la sociedad (dotar de infraestructura y espacios idóneos beneficiarán directamente a los estudiantes).

Mediante la Resolución Ministerial N° 153- 2017-MINEDU de fecha 6 de marzo del 2017, se aprueba el "Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025" - PNIE del Ministerio de Educación, concebido como el instrumento central de planificación de infraestructura educativa en el Perú al 2025. Este documento presenta una estrategia para el cierre de la brecha de infraestructura educativa pública para los servicios de Educación Básica, Educación Técnico- Productiva y Educación Superior Pedagógica y Tecnológica; cuyo principal objetivo es contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando su condición, capacidad, gestión y sostenibilidad para avanzar hacia una educación de calidad para todos.

Respecto al Objetivo 01 del PNIE, el Ministerio de Educación (MINEDU) identificó que la brecha de infraestructura educativa pública al año 2017 ascendía a S/ 72,747.00 MM (setenta y dos mil setecientos cuarenta y siete millones de soles) para reducir el riesgo estructural y brindar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada.

A partir de ello, la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) del MINEDU ha realizado la actualización del cálculo de brecha de infraestructura educativa asociado al primer objetivo estratégico del PNIE, el cual se incrementó de S/72 747 millones a S/ 174,603 millones al 26 de diciembre de 2023, asociada a 55,135 locales educativos (99.6% de los 55,358 LL.EE.); situación que se ha

agravado con la exposición de la infraestructura a eventos ante desastres naturales en el marco del Fenómeno El Niño (FEN).

Respecto al saneamiento físico legal de los predios e inmuebles ocupados por instituciones educativas, el PNIE señala que el saneamiento constituye un elemento fundamental para la ampliación de espacios para la prestación del servicio educativo.

Ahora bien, considerando que, uno de los ejes de gestión del servicio educativo es la infraestructura educativa, la misma cuya brecha es significativa y por la cual el MINEDU se encuentra enfocado en la priorización de estrategias que permitan contar con una infraestructura educativa que brinde condiciones básicas de seguridad y funcionalidad que permita brindar un servicio educativo de calidad, resulta indispensable contar con un procedimiento de saneamiento físico legal mucho más célere que permita otorgar la publicidad y seguridad jurídica respecto de los derechos que goza el MINEDU en cada uno de los predios e inmuebles ocupados por I.E, lo que permitirá la ejecución de proyectos de inversión.

En tal sentido, el problema público que subyace en torno a la propuesta normativa es dotar al MINEDU de un procedimiento de saneamiento físico legal más célere (El cual se constituye en un elemento fundamental para la ampliación de espacios para la prestación del servicio educativo, que permita el reconocimiento de derechos reales (propiedad, posesión, uso de I.E.) a favor del MINEDU, con lo cual se podrán ejecutar proyectos de inversión que permitan reducir la brecha de la infraestructura educativa que existe actualmente a nivel nacional.

Cabe precisar que identificar la brecha de infraestructura educativa resulta sumamente importante, toda vez que permite destinar los fondos públicos a la efectiva prestación de servicios y a la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, a través de la ejecución de inversiones priorizadas de acuerdo a los criterios de priorización de inversiones definidos por el sector educación (proyectos de inversión, proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos e inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación).

Para determinar cuantitativamente las instituciones educativas que cuentan con saneamiento físico legal, se tiene como fuente de información: i) el Sistema de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE); ii) el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE); y, iii) el Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles (SGBI) a cargo de la Dirección de Saneamiento de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario - DISAFIL.

En tal sentido, cabe precisarse que existe una diferencia del total de IE existentes a nivel nacional en cada sistema. Según ESCALE, existen 55,358 IE y en el SGBI, 46,271 IE. Por tanto, existen 9,087 IE registradas en el ESCALE que no se encuentran registradas en el SGBI

Sobre la base de la información del Sistema ESCALE, a nivel nacional se cuenta con 55,358 instituciones educativas, de las cuales, 29,186 cuentan con predios o inmuebles con saneamiento físico legal (53% del total), y **existen 26,172 IE que se encuentran con predios o inmuebles sin saneamiento físico legal (47% del total).**

Asimismo, cabe indicarse que la presente propuesta normativa de modificación de la Ley N° 31318, respecto al régimen de notificaciones y publicaciones, busca establecer como regla general la notificación personal, y, en vía subsidiaria – ante la imposibilidad de la notificación personal, la notificación mediante publicación, en un solo diario, sea el diario oficial El Peruano u otro diario del lugar de ubicación del bien, a elección de la entidad que ejecute el saneamiento físico legal, resultando dicha propuesta acorde a la prelación regulada en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Nótese, además, que esta prelación está también incorporada en el procedimiento especial de saneamiento físico legal previsto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.

II.1.45 Aprobar la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley N° 28036, a fin de fortalecer el marco regulatorio del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y promover la mejora de la prestación de los servicios públicos para la práctica del deporte en beneficio de la población en general.

Desde su publicación en el año 2003, la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte ha sido modificada de manera sucesiva por las Leyes N° 28910 (2006), N° 29544 (2010), N° 29665 (2011), N° 29825 (2012), N° 30037 (2013), N° 30474, (2016), N° 30832 (2018), N° 30879 (2018), N° 31958 (2023), N° 31978 (2024), y N° 28523 (2005), las cuales no permiten una adecuada gestión en la promoción de la práctica del deporte por parte de la población, a partir del rol del Instituto Peruano del Deporte. Además, no se ha logrado reglamentar, entre otras, la Ley N° 30994, Ley del Deportista de Alto Nivel (publicada el 16 de agosto de 2019) y la Ley N° 29825 (publicada el 5 de enero de 2012), que modifica los artículos 10 y 11 de la Ley N° 28036, sobre el Consejo Directivo.

De otra parte, con fecha 29 de febrero de 2024, la Unidad de Cumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó a la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD) que ha identificado una serie de disposiciones en la Ley N° 28036 en materia antidopaje que no cumplen con lo dispuesto en el CONAD, otorgándole al Estado Peruano como plazo hasta el 29 de mayo de 2024 para la adecuación de su marco normativo a la regulación internacional. Su incumplimiento conllevaría graves consecuencias para el deporte peruano, incluyendo la prohibición al país de ser sede de campeonatos y eventos deportivos regionales, continentales y mundiales.

Por otro lado, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 31224, modifica el artículo 7 de la Ley N° 28036, estableciendo, entre otros aspectos, que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU) y que ejerce la rectoría del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), mientras que el MINEDU es el ente rector en la materia deporte, actividad física, educación física y recreación. Aun cuando se han establecido las responsabilidades, no se ha

logrado poner en operatividad el SISDEN, pues no se cuenta con la regulación que permita su funcionamiento, esto debido a que se considera todavía en los documentos del IPD a la Educación Física como parte de sus responsabilidades siendo los aspectos curriculares responsabilidad del MINEDU. Asimismo, el marco normativo vigente crea confusión sobre las acciones que son responsabilidad de los gobiernos locales y gobiernos regionales.

En otro extremo, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU aprueba la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física- PARDEF, que tiene como objetivos prioritarios los siguientes:

(i) OP.1 Incrementar la práctica regular de la actividad física, recreación y del deporte recreativo en la población de todas las edades, a lo largo de sus vidas;
(ii) OP.2 Desarrollar competencias educativas para una vida activa y saludable, en los estudiantes de todas las etapas, niveles y modalidades educativas,
(iii) OP3. Desarrollar competencias profesionales en los profesores de educación física y otros mediadores de aprendizajes deportivos,
(iv) **OP.4 Incrementar el desempeño exitoso de deportistas de alta competencia en torneos internacionales**.

La PARDEF cuenta con 18 lineamientos, considerados como estrategias o medios para alcanzar los objetivos propuestos; con 22 servicios prestados a la población y a los deportistas federados. A su vez, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU, establece lo siguiente:

> *"3.1. El Ministerio de Educación conduce la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF) y la implementan progresivamente las direcciones generales del Ministerio de Educación, sus organismos adscritos o las que hagan sus veces, responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF), están a cargo de la implementación y ejecución de la misma.*
>
> *3.3. Las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional de Actividad Física, Deporte y Educación Física - PARDEF, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a su autonomía y competencias. Para tal efecto, se realizan los arreglos y adecuaciones organizacionales que se requieran para la implementación de los servicios identificados y otras intervenciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Actividad Física, Deporte y Educación Física - PARDEF. Las actividades operativas y medidas se implementan en el marco de las competencias y responsabilidades que correspondan a las entidades involucradas.*
>
> *3.4. Del mismo modo se realizan las modificatorias en los programas presupuestales relacionados a la política, en el marco de la normativa vigente."*



Respecto a la calidad del gasto, según los resultados de la Evaluación de

Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas" (2018), la programación de recursos no se alineaba directamente a los objetivos del Programa Presupuestal. Esto debido a que los criterios de programación que se suelen utilizar se basan en la asignación histórica, en vez de la brecha de provisión de los bienes y servicios relacionados y los costos asociados al desarrollo de las actividades.

En el año 2018, este Programa Presupuestal representó el 47% del presupuesto total de la División Funcional de Deportes. Además, respecto a la división de sus actividades, sin contar los proyectos de inversión, el 55% de su presupuesto estuvo dirigido al acceso y desarrollo deportivo de alta competencia (es decir, a un grupo objetivo reducido); mientras que solo el 23% a la masificación deportiva. Con el fin de garantizar un correcto uso de estos recursos y una mayor formalidad en la dirección de las federaciones en 2018 se publicó Ley Nº 30832, modificando artículos de la Ley 28036 (Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte). Así, una de sus principales modificaciones es la del Artículo 71-A, obliga que el 40% de las subvenciones otorgadas sean usadas "de forma obligatoria y directa a favor de actividades del deportista".

En base a lo anterior, resulta evidente la necesidad de fortalecer las capacidades de los organismos públicos y privados que integran el SISDEN, a efectos de tener una gestión estructurada e integrada en beneficio del desarrollo de la actividad física, recreativa y deporte en los diferentes niveles de gobierno.

En relación a la infraestructura deportiva, el IPD tiene alrededor de 260 infraestructuras a nivel nacional. La infraestructura que administra no sólo es de alta competencia, sino que tiene pequeños complejos o lozas para la recreación que deberían ser administradas por los gobiernos locales. La mayor parte de inversiones efectuadas por los gobiernos regionales no cuentan con convenios vigentes o los proyectos no han sido liquidados, en ese sentido, se requiere considerar la transferencia de competencia a los Gobiernos Regionales y con ello transferir predios y mejorar las infraestructuras existentes.

La Ley 28036 en su Art 14 .Consejos Regionales del Deporte el IPD cuenta con consejos regionales integrados por seis (6) miembros, que son los siguientes: Un (1) Presidente designado por el Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), a propuesta del presidente del gobierno regional, Un (1) miembro elegido por las ligas deportivas de la región o departamentales, Un (1) miembro elegido por las municipalidades provinciales, Un (1) miembro elegido por las municipalidades distritales, Un (1) miembro de la gerencia, dirección o área que tenga competencia en materia deportiva regional, en representación del gobierno regional y Un (1) miembro representante de las universidades e institutos superiores de la región.

Sus funciones entre otras son:
(...)
3. Reconocer a las organizaciones deportivas de su jurisdicción.
4. Velar por el correcto desarrollo de las elecciones de las organizaciones deportivas de la jurisdicción.

5. Proponer al Instituto Peruano del Deporte para su firma, convenios a nivel internacional.
6. Otorgar distinciones y condecoraciones a los deportistas destacados de su jurisdicción.
7. Apoyar y supervisar la participación de representantes regionales en eventos de carácter nacional e internacional.

Artículo 16.- Funciones del Presidente del Consejo Regional del Deporte

El Presidente del Consejo Regional del Deporte tiene las mismas funciones que el Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) aplicables a su jurisdicción, dentro de su competencia y con las excepciones y limitaciones que la presente Ley o su reglamento dispone.

En el artículo 17 de la Ley 28036, Apoyo a las Municipalidades, el Instituto Peruano del Deporte a través de sus respectivos Consejos Regionales apoyará con asistencia técnica especializada a las municipalidades para la elaboración de planes y programas de promoción y desarrollo en materia deportiva, recreativa y de educación física.

Por otro lado, la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, establece:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional.

El IPD superpone el rol del desarrollo del deporte en la región cuando la política regional del deporte es responsabilidad del Gobierno Regional.

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece en su Artículo 82. Educación, ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación", Literal 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan con las entidades públicas responsables y convocan la participación del sector privado

Como se puede apreciar, existe una duplicidad y superposición de roles en la gestión del deporte, por un lado, el IPD implementa Academias Municipales, cuando le Ley de Municipalidades explicita que es responsabilidad del gobierno local.

En cuanto al aspecto presupuestal, para la promoción de la práctica deportiva el mayor presupuesto de la división funcional de deporte lo constituye el Programa Presupuestal 0101 (PP 0101): Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", siendo el Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte el responsable de velar por su ejecución en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Sin

embargo, en el año 2022 se asignó un total de S/ 2 485 060 583 (Dos mil millones cuatrocientos ochenta y cinco millones sesenta mil quinientos ochenta y tres y 00/100 Soles); de los cuales solo se ejecutaron S/ 1,645,300,010 (Mil seiscientos cuarenta y cinco millones trescientos mil y 00/100 Soles, siendo el mayor presupuesto asignado a los gobiernos locales, quienes ejecutaron únicamente el 65.30% de los recursos asignados, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Comparativo entre el presupuesto asignado y ejecutado

Año 2022	Asignado	Ejecutado	% Ejecución
Nacional	107,490,047	99,805,051	94.3
Regional	118,720,610	72,906,883	61.4
Local	2,258,849,926	1,472,588,076	65.3

Fuente: Consulta amigable MEF al 31-12-2022

En el año 2023, la ejecución en el PP 0101 al mes de noviembre llegó al 71 57%, una no ejecución de recursos al tesoro público del 27.2% (sin certificar), y más de 136 millones devueltos al tesoro público, lo cual implica que se requiere un mejor monitoreo de la ejecución del PP101, conforme se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2: Ejecución presupuestal

Año 2023	Asignado	Ejecutado	% Ejecución
Nacional	122,416,843	113,566,036	92.8
Regional	1,576,341,461	1,103,084,415	70.0
Local	87,649,338	65,353,294	74.6

Fuente: Consulta amigable MEF al 31-12-2023

Por lo indicado y en el marco del fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, se propone contar con una nueva ley de promoción y desarrollo del deporte que permita implementar las políticas nacionales vigentes, actualizar el PP 0101 y cumplir con la normatividad internacional para el incremento de la competitividad deportiva a nivel nacional e internacional en beneficio de la población del país.

II.1.46 Modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.

Los commodities agrarios en el mercado internacional están escaseando e incrementando sus precios debido a los bajos rendimientos ocasionados por el cambio climático, las crisis económicas regionales y los conflictos internacionales, que involucran a sus principales países productores. Estos productos de los que el Perú es dependiente y que podrían ser producidos en el territorio nacional garantizarían la provisión de insumos y productos para la

población y la industria ganadera. En el mundo existen nuevas variedades de cultivos de canola, soya, caña de azúcar y alfalfa, más productivas y eficientes en aprovechar los factores productivos por su resistencia a plagas y enfermedades, así como condiciones abióticas que se pueden adaptar a las condiciones del país y de esta forma proveer estos productos a los diferentes usuarios en el país.

Así, la actividad agropecuaria requiere de nuevas y mejores tecnologías resultantes de los avances de la ciencia y la tecnología a fin de garantizar su sostenibilidad y competitividad, como es el caso de los Organismos Vivos Modificados - OVM, que permiten la provisión de alimentos y forrajes para la seguridad alimentaria de los peruanos y el desarrollo y sostenibilidad de la industria nacional; tales como las variedades de los cultivos de soya o soja, canola, caña de azúcar y la especie forrajera alfalfa, entre otros, no originarios del Perú. La Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años, aprobada en el mes de diciembre del año 2011 y ampliada su vigencia mediante la Ley N° 31111, hasta el 31 de diciembre de 2035, ha permitido avanzar en el desarrollo de las Líneas de Base de las especies nativas, así como los criterios técnicos e instrumentos para regular el ingreso y uso de los organismos vivos modificados al territorio nacional, por lo que la medida se inserta en un marco institucional y de capacidades técnicas adecuado para su implementación.

La no utilización de los Organismos Vivos Modificados – OVM en el país debido a la moratoria dispuesta por la Ley N° 29811 causa serios perjuicios a la productividad agraria nacional y los productores agrarios. Por ejemplo, cuando se evalúa qué hubiera pasado en el año 2017 de haberse empleado las semillas transgénicas de algodón, maíz y papa, se encuentra la rentabilidad perdida en un año por la moratoria, que ascendería a 3,129 millones de soles, unos 956.88 millones de dólares.

Por ello, se propone modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, incorporando los numerales 4 y 5 con el contenido siguiente: (i) Numeral 4: La producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) destinados únicamente a la alimentación animal de las especies no originarias del Perú que se detallan en el Anexo I del presente Decreto Legislativo; y, (ii) Numeral 5: La investigación y producción de OVM derivados de la edición génica y otras técnicas modernas de la biotecnología; con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición genética y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.



La propuesta se financiará con los recursos propios de los órganos institucionales involucrados del INIA en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto y las demás disposiciones legales vigentes, esta situación garantiza que la medida no generará gastos adicionales para el Estado.

II.1.47 Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Mediante Resolución Ministerial N° 118-2020-MIDAGRI de fecha 14.05.2020, en el marco de la Ley N° 30157 y su Reglamento, se aprobó el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios con una vigencia de cinco (05) años prorrogables, en el que se establecen las líneas de acción siguientes: fortalecimiento institucional, desarrollo tecnológico e innovación, mejora y desarrollo de la calidad de los servicios, y asistencia técnica especializada; lo que se vería afectado si no existiera la continuidad de los consejos directivos vigentes con una vigencia de poder que les permita asumir compromisos en el marco del citado programa. La continuidad del fortalecimiento de las juntas de usuarios, coadyuvará al incremento de la recaudación de retribución económica y de la tarifa de agua que es necesaria para financiar las actividades de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica, con lo que se mejoraría el servicio público de suministro de agua a los usuarios, lo que beneficia directamente en la actividad agraria desarrollada en el marco de la Política Nacional Agraria 2021-2030.

Aplicando la Ley N° 30157 y su Reglamento, el proceso electoral de renovación de consejos directivos no tuvo resultados positivos oportunos, teniéndose organizaciones que renovaron su consejo directivo en diferentes tiempos, ocasionando la acefalía de las mismas, siendo necesario la emisión de normas complementarias para que las habilite a desarrollar su proceso electoral, sin embargo, con un proceso electoral en el marco de la Ley N° 31801 sería más favorable y con mejores resultados, considerando que se han establecido nuevas reglas que simplifican el proceso electoral, lo que redundará en la elección oportuna de los consejos directivos, con lo que las organizaciones de usuarios de agua tendrán su vigencia de poder oportunamente, lo que permitirá continuar con el desarrollo de las actividades enmarcadas en la Política Nacional Agraria 2021-2030.

En ese sentido, es necesario precisar que en el Perú existen un total de 13990 organizaciones de usuarios de agua entre reconocidas y no reconocidas, de estas 128 son Juntas de Usuarios; 1664 Comisiones de Usuarios y 12 198 son Comités de Usuarios. De las 9756 organizaciones de usuarios de agua reconocidas a nivel nacional, se tiene que 128 son juntas de usuarios, 1421 son comisiones de usuarios y 8207 son comités de usuarios, representando a un total de 732375 usuarios de agua. Respecto a las organizaciones de usuarios que cuentan con personería jurídica y que por consiguiente deben tener inscritos a sus consejos directivos ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se tiene a 1155 comisiones y 2336 comités de usuarios con personería jurídica. Por consiguiente, se tiene que 266 comisiones y 5871 comités de usuarios no cuentan con personería jurídica, pero si con reconocimiento administrativo.

Además, es importante señalar que las organizaciones de usuarios de agua debieron desarrollar sus procesos electorales en el año 2020 desde junio a noviembre, sin embargo, por motivos de la pandemia por la COVID-19 y la Declaración del estado de Emergencia Nacional, las reuniones como, las asambleas generales y demás sesiones que desarrollan, se vieron limitadas en

su celebración, por lo que las juntas de usuarios no pudieron renovar a sus consejos directivos en el año 2020. Por ello, a través de una norma excepcional y de urgencia, se dictaron disposiciones para que las OUA mantengan su representatividad, confiriéndoles la continuidad de los mandatos de los consejos directivos durante todo el año 2021, y a la vez, se dictaron normas complementarias que regularon el proceso electoral extraordinario para que a través de elecciones democráticas renueven a sus directivos hasta el 31.12.2021, siendo la norma medular, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 143-2020 (publicado el 29.12.2020) que dice lo siguiente:

> **CUARTA**.- Regulación extraordinaria para las organizaciones de usuarios de agua durante el año 2021 Por excepción, autorizase a la Autoridad Nacional del Agua para que, en un plazo no mayor a seis (06) meses, contado desde el 01 de junio del año 2021, convoque a un proceso electoral extraordinario de las organizaciones de usuarios de agua, de renovación de sus consejos directivos para el periodo 2021-2024; en consecuencia dispóngase la continuidad del mandato de los consejos directivos de las citadas organizaciones, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el día hábil siguiente de notificado el resultado de la elección por el comité electoral o el comité de impugnaciones, según corresponda. El nuevo consejo directivo sujeta su período de mandato al plazo que quede por transcurrir de los cuatro (04) años originalmente previstos en la Ley N° 30157, Ley de las organizaciones de usuarios de agua. Para los citados efectos, por el sólo mérito del presente dispositivo, la Administración Local de Agua de la Autoridad Nacional del Agua comunica mediante oficio la continuidad de los mandatos de los consejos directivos, Comités de Administración Temporal y otros similares de las organizaciones de usuarios de agua: i) a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, respecto de Juntas, Comisiones y Comités de usuarios para su respectiva inscripción; ii) a las comisiones y comités de usuarios de agua que no cuentan con partida registral en la SUNARP.
>
> El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante Decreto Supremo, aprueba las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Es preciso indicar que, el citado decreto de urgencia se complementa con lo dispuesto en la Ley N° 30157 y su Reglamento, precisándose en el numeral 36.3 del artículo 36 del Reglamento que, "En los casos en los que habiéndose convocado a elección de consejo directivo no se obtuviere resultado válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. En estos casos el consejo directivo asumirá sus funciones en forma inmediata y sujetará su periodo de mandato al plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años originalmente previstos".



Además, en el numeral 57.2 del artículo 57 del Reglamento se precisa que, "En los casos en los que habiéndose convocado a elección de consejo directivo no se obtuviere un resultado válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias hasta obtener un consejo directivo En estos casos, el consejo directivo asumirá sus funciones en forma inmediata y sujetará su período de mandato al plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años originalmente previstos".

Es preciso indicar también que, el citado decreto de urgencia dispuso la continuidad de mandato de los consejos directivos, considerando que tenían vigencia solamente hasta 31.12.2020, a fin de que no queden acéfalas las organizaciones de usuarios de agua y puedan desarrollar su proceso electoral en el marco de la emergencia sanitaria.

En mérito de lo antes señalado se dictaron normas complementarias para el desarrollo del proceso electoral de las organizaciones de usuarios de agua para elección de consejos directivos periodo 2021-2024. // Proceso electoral desarrollado en el año 2021 El proceso electoral desarrollado en el año 2021 se desarrolló con disposiciones establecidas con los decretos supremos y resoluciones jefaturales siguientes: Decretos Supremos N° Resoluciones Jefaturales N° 003-2021-MIDAGRI (26.02.2021) 039-2021-ANA (28.02.2021) 068-2021-ANA (25.03.2021) 008-2021-MIDAGRI (29.04.2021) 117-2021-ANA (03.06.2021) 015-2021-MIDAGRI (09.07.2021) 145-2021-ANA (15.07.2021) 162-2021-ANA (27.07.2021) 200-2021-ANA (20.10.2021)

Además, se promulgó la Ley Nº 31345 (publicado el 17.08.2021) que modificó el artículo 8 de la LOUA, el cual quedó redactado conforme al tenor literal siguiente:

> **"Artículo 8. Quórum**.
>
> La elección de los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua, se realiza en acto electoral descentralizado, el cual requiere la participación de más del 35% de los electores que integran el padrón electoral aprobado por la respectiva Administración Local de Agua, caso contrario, el comité electoral convoca a un segundo acto electoral que requiere como mínimo la participación del 25% de los electores que integran el referido padrón. De no existir resultado válido, convoca a un tercer acto electoral y cuantos otros sean necesarios, hasta obtener un resultado válido, para lo cual basta la participación del 20% de electores" Nº 019-2021-MIDAGRI que modifica el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDAGRI.
>
> A consecuencia de esta modificación, fue necesario emitir el Decreto Supremo Nº 019-2021- MIDAGRI (17.09.2021) para modificar el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 003- 2021-MIDAGRI y que guarde coherencia con este nuevo texto normativo. Proceso electoral desarrollado en el año 2022 Con Decreto Supremo N° 026-2021-MIDAGRI (publicado el 31.12.2021) se modificó el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, teniéndose para el proceso electoral desarrollado en el año 2022 las normas complementarias siguientes: Decretos Supremos N° Resoluciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

Jefaturales N° 026-2021-MIDAGRI (31.12.2021) 003-2022-ANA (06.01.2022) 026-2022-ANA (27.01.2022) 091-2022-ANA (28.03.2022) 131-2022-ANA (06.05.2022) 016-2022-MIDAGRI (07.10.2022) 314-2022-ANA (11.10.2022).

Proceso electoral desarrollado en el año 2023."

A fin de que las organizaciones de usuarios de agua que no lograron elegir consejos directivos al 31.12.2022, se promulgó el Decreto Supremo N° 002-2023-MIDAGRI (publicado el 21.03.2023) que establece disposiciones para el desarrollo del proceso electoral complementario para la elección de los consejos directivos correspondientes, además, se emitió la Resolución Jefatural N° 0095-2023-ANA (23.03.2023), que establece disposiciones para que se desarrollen las acciones democráticas para la elección de los consejos directivos.

Respecto a la recaudación de la tarifa de agua y retribución económica de todas las juntas de usuarios a nivel nacional, se tiene lo siguiente: RECAUDACIÓN DE TARIFA DE AGUA RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Año 2022 S/ Año 2023 S/ Año 2022 S/ Año 2023 S/ 135 057 903,77 125 913 010,07 16 526 862,06 16 877 796,76 Observándose que la recaudación de la tarifa de agua, con la cual las juntas de usuarios financian sus diferentes actividades, como la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica ha disminuido en el año 2023, pudiendo afectar la distribución del recurso hídrico por parte de los operadores de la infraestructura hidráulica, resultando en el incumplimiento de la ejecución de actividades programadas en el Plan de Operación Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica (POMDIH). Asimismo, de acuerdo al marco normativo vigente, el año 2024 es un año electoral, ya que debe desarrollarse el proceso electoral de renovación de consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua correspondiente al período 2025-2028; sin embargo, aproximadamente el 85 % de las juntas de usuarios no ha considerado presupuesto en su POMDIH para las actividades de desarrollo de proceso electoral para el periodo 2025-2029, el cual es aprobado por la Administración Local de Agua mediante resolución administrativa.

Asimismo, el proceso de Reglamentación de la Ley N° 31801, Ley que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el Fortalecimiento de su participación en la Gestión Multisectorial de los Recursos Hídricos, se ha desarrollado en el marco de la consulta pública de la manera siguiente:

c) Elaboración del Primer Borrador de Reglamento. Se habilitó el formulario en línea: https://forms.office.com/r/0H6NuKKPYh, a fin de recabar aportes de las organizaciones de usuarios de agua, elaborándose el Primer Borrador de Reglamento.
d) Elaboración del Segundo Borrador de Reglamento Una vez obtenido el Primer Borrador de Reglamento, se realizaron acciones para poder promover que las juntas de usuarios, entre otros actores, realicen sus aportes a fin obtener un Segundo Borrador de Reglamento, desarrollándose 18 talleres descentralizados dirigidos a todas las juntas de usuarios a nivel nacional y usuarios no agrarios. Con los aportes recogidos en estos talleres, se elaboró el Segundo Borrador de Reglamento.

e) Elaboración del Tercer Borrador de Reglamento Una vez obtenido el Segundo Borrador de Reglamento, se desarrollaron dos talleres nacionales en la ciudad de Lima, convocándose a los presidentes de las juntas de usuarios y representantes de usuarios de agua no agrarios, así como entidades estatales relacionadas a la Ley N° 31801. A sugerencia de las juntas de usuarios, la metodología utilizada consistió en que todos los participantes analicen en plenaria el Segundo Borrador de Reglamento. Al culminar el Segundo Taller Nacional, las juntas de usuarios eligieron en Plenaria a 25 representantes de juntas de usuarios según los departamentos del Perú para que continúen con la siguiente etapa de evaluación de aportes del Tercer Borrador de Reglamento y formen parte del Grupo de Trabajo Multisectorial.

f) Elaboración y Publicación de la Versión Preliminar de Reglamento Una vez obtenido el Tercer Borrador de Reglamento, se reunió el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado por los representantes de juntas de usuarios, representantes de los usuarios de agua no agrarios y entidades involucradas a la Ley N° 31801. La metodología empleada consistió en que los participantes se encargaron de analizar y discutir los aportes contenidos en el Tercer Borrador de Reglamento, validando su pertinencia técnica-legal para ser incluidos en la versión preliminar. Habiéndose culminado las reuniones del Grupo de Trabajo Multisectorial, se obtuvo la Versión Preliminar de Reglamento, la que se elevó al MIDAGRI para su publicación. Mediante Resolución Ministerial N° 0379-2023-MIDAGRI publicada el 10.11.2023 en el diario oficial El Peruano, se dispone la publicación del "Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el Fortalecimiento de su participación en la Gestión Multisectorial de los Recursos Hídricos, del referido Reglamento y de su Exposición de Motivos", por un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día hábil siguiente de la publicación, siendo éste el día lunes 13.11.2023 y culminando el día 27.11.2023, a fin de recibir aportes virtuales del público en general, habilitándose el link siguiente: https://forms.office.com/r/95VJ7N58s0. Se procedió a recepcionar, consolidar y sistematizar los comentarios, aportes, recomendaciones y sugerencias recibidas a la versión preliminar del Reglamento.

g) Elaboración de Versión Final de Proyecto De Reglamento Luego de la publicación de la Versión Preliminar de Reglamento y la consolidación de aportes correspondientes, se realizó un Tercer Taller Nacional en diciembre del 2023, contándose con la participación de representantes de las juntas de usuarios, usuarios de agua no agrarios y entidades estatales relacionadas con los alcances de la Ley N° 31801. De acuerdo a la metodología del taller, se expuso en plenaria cada uno de los artículos haciendo referencia a los aportes virtuales recibidos, se analizó la pertinencia de los mismos y se planteó la redacción final de cada artículo con los aportes recibidos en la plenaria, llegándose al consenso de los participantes, y analizándose que lo propuesto no se contraponga con otras normas.

h) Con Oficio N° 0001-2024-ANA-J de fecha 03.01.2024 se remitió al MIDAGRI el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 31801 para conocimiento y fines,

posteriormente se obtuvo la conformidad de todas las entidades estatales involucradas con el proceso de Reglamentación, en lo correspondiente a sus atribuciones. Finalmente, con Oficio N° 0153- 2024-ANA-J de fecha 29.02.2024 se remite al MIDAGRI el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31801 "Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos" para su conformidad y continuación del procedimiento que corresponde a la Reglamentación de la Ley N° 31801 en el marco del Reglamento de Mejora de Calidad Regulatoria y lineamientos para Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante) aprobado con Decreto Supremo N° 063-2021-PCM.

i) En cumplimiento a lo señalado por el citado Decreto Supremo, el proyecto de Reglamento ya se encuentra registrado en el Aplicativo informático AIR Ex Ante con toda la documentación requerida, administrado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el cual se ingresó la información requerida por el AIR Ex Ante para su posterior revisión por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

Es importante resaltar que la entrada en vigencia de la Ley N° 31801 y su Reglamento implicará un proceso inicial y permanente de difusión, sensibilización y capacitación a todos los usuarios a nivel nacional, con un proceso de adecuación de las organizaciones de usuarios de agua a la nueva normatividad.

II.1.48 Establecer el marco normativo para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias, mediante su adaptación, de manera preventiva, para garantizar su continuidad operativa, a través de la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

Identificación del problema público

Diversas investigaciones y evaluaciones han mostrado que la respuesta del Estado peruano ante emergencias ha resultado, de inicio, rápida, pero con grandes desafíos en la implementación para atender a la totalidad de población

vulnerable y afectada, en activar intervenciones o modificar las mismas para la situación de emergencia sin protocolos o lineamientos preestablecidos, en asignar y mantener los roles de las entidades responsables de la preparación y la respuesta, en intercambiar la información de manera rápida durante la emergencia y en implementar mecanismos presupuestarios para la respuesta ante una emergencia.

Es decir, el Estado peruano no cuenta con un marco normativo que aborde de forma integral la continuidad de los servicios de protección social ante las situaciones de emergencias distintas a los desastres naturales, tales como sanitarios, alimentarios, o por conflictos sociales. La atención en estos casos se ha realizado a través de normativa de urgencia y emergencia principalmente sectorial. En otras palabras, como respuesta del Estado, cuando se abordan los servicios de protección social ante situaciones de emergencia nos encontramos ante un arreglo institucional fragmentado.

Por ello, **se identifica como problema público la falta de adaptación de los servicios pú**blicos de protección social para que, ante situaciones de emergencias, se asegure y garantice la continuidad de los mismos. Esto demuestra que existe un tema pendiente de atención por parte del Estado que impacta directamente en la población, especialmente en aquella que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad de caer en ella. Esto es, la falta de adaptación de los servicios públicos de protección social, siendo que las entidades proveedoras de servicios requieren de un marco que les facilite su adaptación progresiva y de manera preventiva.

Ante ello, es pertinente recordar que el MIDIS tiene como materia la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, y desde ese marco cuenta como función la supervisión y evaluación del impacto de las políticas y programas sociales a nivel intergubernamental. En tal sentido, se identifica que, dentro de las acciones de mejora continua - que forman parte del proceso de modernización de la gestión pública - es necesario que dicho Ministerio cuente con un marco legal claro que le permita dictar las orientaciones necesarias para el proceso de adaptación de dichos servicios públicos de protección social, dado que la no continuidad de los mismos en situaciones de emergencias, impactan negativamente en la población en situación de pobreza o vulnerabilidad de caer en ella.

Por ello, se propone una solución normativa a dicho problema público, mediante la incorporación de un literal que autorice al Poder Ejecutivo a establecer disposiciones que permitan promover y facilitar condiciones para el proceso de adaptación de los servicios públicos de protección social ante emergencias, a fin de asegurar que, frente al impacto de una emergencia, las personas afectadas no caigan o agraven su situación de pobreza.

Entre estas disposiciones, se incluye la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la

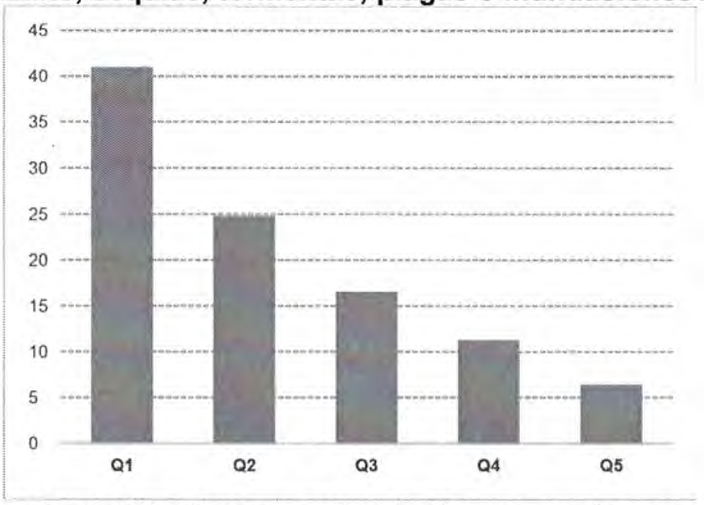
exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para la determinación de la instancia del MIDIS encargada de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.

Con ello, se busca salvaguardar que los servicios públicos orientados a la protección social, al estar adaptados, mantengan su continuidad operativa ante una emergencia de modo que se garantice que las personas afectadas continúen recibiendo dichos servicios, a fin de evitar que caigan en pobreza o agraven dicha situación.

Análisis de la necesidad de la propuesta

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, el 40.8% de personas del quintil 1 de ingresos (es decir las personas más pobres) declararon haber sido afectadas a causa de sequías, inundaciones, plagas, entre otros, a diferencia de tan solo el 5.3% del quintil 5 de ingresos (personas con mayores ingresos).

Incidencia de choques por quintil de ingresos, Perú (2022)
En los últimos 12 meses, ¿se ha visto su hogar afectado por robos, asalto, sequías, tormentas, plagas o inundaciones?

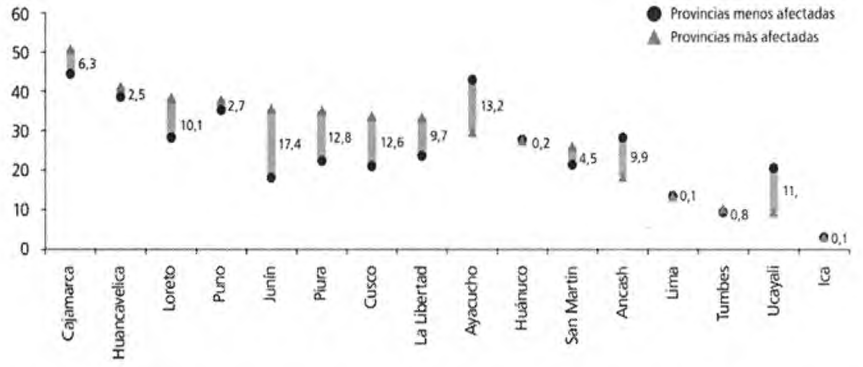


Porcentaje de ocurrencias de choques por hogar
Fuente: INEI-ENAHO 2022

Es decir, la intensidad de afectación frente a choques es mayor en las personas más pobres. Las personas pobres y vulnerables se ven afectadas de forma desproporcionada por los desastres, ya que sus medios de subsistencia dependen de activos menos diversos y más vulnerables; su consumo está más cerca de los niveles de subsistencia; no cuentan con ahorros para suavizar el impacto de las crisis; su salud y su educación corren un mayor riesgo; y pueden necesitar más tiempo para recuperarse. Cuando los pobres se ven afectados, la proporción de riqueza que pierden es entre dos y tres veces mayor que en el caso de las personas no pobres.

Otro estudio del Banco Central de Reserva de diciembre de 2023, que analiza la relación entre la vulnerabilidad de las personas frente al Fenómeno El Niño (FEN) y la situación de pobreza, muestra que las personas que habitan en provincias más afectadas por el FEN tienen más probabilidades de ser pobres al siguiente año, en comparación de las menos o no afectadas. Así, se encontró que en las regiones de la costa norte más impactadas por el FEN tenían, en promedio, una tasa de pobreza 10 puntos porcentuales mayor a la de las regiones menos afectadas. Esta evidencia muestra que efectivamente los choques son un factor explicativo de la exclusión social que genera pobreza.

DIFERENCIA EN LA TASA DE POBREZA MONETARIA PONDERADA ENTRE LAS PROVINCIAS MÁS Y MENOS AFECTADAS POR EL FEN 2017
(En puntos porcentuales)



Es preciso recordar, por ejemplo, la reciente crisis por la COVID-19 que puso en relieve la importancia de garantizar que todos los sistemas de protección social frente a emergencias sean adaptativos y puedan responder rápidamente al impacto de los diferentes tipos de choques. No debemos olvidar que el Perú es altamente propenso a sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra (huaycos) que afectan fuertemente la infraestructura y las condiciones de vida de su población; pero también a distintos tipos de conflictos sociales, epidemias, plagas, y otra serie de riesgos sociales.

En ese sentido, el Perú requiere con urgencia una regulación sobre los servicios públicos relacionados a la protección social en situaciones de emergencias, para asegurar que las personas no agraven su situación de pobreza o caigan en ella. Si bien el MIDIS cuenta con facultad para regular sobre la materia, dado que esto abarca las rectorías de diversos sectores y la participación de los gobiernos regionales y locales, se considera necesario precisar el marco legal, a fin de precisar el alcance del Midis en el marco de su rectoría.

Esto, aunado a la regulación que se presenta, permitirá la adopción rápida y urgente de decisiones, en tanto incluye a diversos sectores y niveles de gobierno. Además, debe servir para mejorar la identificación del riesgo y la población afectada, la preparación, la reconstrucción resiliente y la protección financiera; con el fin de garantizar un mayor impacto en la promoción de la resiliencia y recuperación frente a eventos adversos tales como: eventos naturales, crisis alimentarias, epidemias, conflictos y otras situaciones de fragilidad.

Como se puede observar, una meta importante de un marco de protección social es solucionar la fragmentación de preparación y activar y verificar el desarrollo de los requerimientos legales y operativos para la preparación de la respuesta. Asimismo, una regulación que sea estable para estos esfuerzos permite la sostenibilidad y la operación continua de estas acciones.

Asimismo, se busca precisar la función del MIDIS en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social ante emergencias, de acuerdo a las competencias que ya le define su propia ley de creación.

II.1.49 Modificar el numeral 4.6 del artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, referidos a la nómina de especialistas para ejercer las funciones de revisión de estudios de impacto ambiental y supervisión y/o acompañamiento de la línea base y opiniones técnicas, según corresponda, a fin de fortalecer, agilizar y reducir los tiempos de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

La propuesta normativa tiene por objeto modificar el artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Se requiere modificar la Ley en mención, dado que regula las nóminas de especialistas relacionadas a temas ambientales.

Asimismo, la propuesta normativa tiene por finalidad facultar al Ministerio de la Producción a crear su propia nómina de especialistas, buscando reforzar con ellos sus capacidades operacionales vinculadas a la revisión de estudios de impacto ambiental y la emisión de opiniones técnicas; lo que coadyuva a dinamizar e impulsar el desarrollo de proyectos de inversión y promover la inversión privada y público – privada y la gestión de servicios públicos ambientales que proporciona el Ministerio de la Producción.

La aprobación de los estudios ambientales, constituye el paso previo para la ejecución de los proyectos de inversión, ya que es una condición necesaria para que puedan solicitar posteriormente los títulos habilitantes respectivos o para que se brinde seguridad jurídica para la continuidad de las operaciones de las actividades económicas.

Actualmente, al mes de abril del 2024, se tiene en el Ministerio de la Producción: a) 203 expedientes de instrumentos de gestión ambiental en trámite para el sector pesca, cuyos montos de inversión declarados ascienden a un total estimado de 650 millones de soles; y b) 179 expedientes de instrumentos de gestión ambiental para el sector industria, cuyos montos de inversión declarados ascienden a 42 millones de soles, aproximadamente.

Para la atención de la evaluación de los estudios ambientales, si bien el Ministerio de la Producción cuenta con un grupo de profesionales especializados, se advierte la necesidad de reforzar la capacidad operativa del Ministerio de la Producción a fin de agilizar su capacidad de respuesta a la

evaluación de los estudios ambientales y dotar con mayor celeridad la evaluación ambiental de los proyectos de inversión en los sectores de pesca e industria.

Ante dicha problemática el facultar al Ministerio de la Producción a crear su propia nómina de especialistas, de manera similar a como ya cuentan con ello otros sectores que desarrollan funciones ambientales similares, tales como: el SENACE, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros, permitirá fortalecer y agilizar los procedimientos de evaluación ambiental que desarrolla el Ministerio de la Producción y se reducirán los tiempos de evaluación de los procedimientos administrativos ambientales, lo que dinamiza los proyectos de inversión privada y público – privada, así como los servicios públicos de naturaleza ambiental que proporciona el Ministerio de la Producción.

La creación de la nómina de especialistas del Ministerio de la Producción se considera viable y oportuna, dado que para ello se requiere modificar la Ley N° 30327, a fin de incluir al Ministerio de la Producción dentro del listado de entidades que se encuentran ya facultados para contar con nóminas de especialistas, aclarando también con ello que los especialistas de la nómina podrán ejercer las funciones de revisión de estudios ambientales y opiniones técnicas, entre otras.

En ese sentido, se vienen ejecutando en el 2024, acciones para dotar de celeridad a la evaluación de los proyectos de inversión en los sectores de pesca e industria, con el objeto de atender las solicitudes de evaluación estudios de impacto ambiental en trámite de manera oportuna y dentro de los plazos reglamentarios. Por tanto, a fin de evitar dilaciones -por aspectos de capacidad operativa- y cumplir con los procesos que involucra el trámite de los estudios ambientales de proyectos de inversión, es necesario contar con una nómina de especialistas, que permita optimizar el reclutamiento de especialistas en la materia, mejorar la modalidad de contratación y evitar intermitencias en los plazos contractuales (renovaciones) para disminuir la alta rotación de personal; lo cual contribuye al fortalecimiento y simplificación en materia de inversión pública y privada.

Contar con un listado de profesionales calificados permite realizar adecuadamente las funciones de revisión, evaluación y atención de expedientes de la línea base, emitir opiniones técnicas, entre otros, dinamizando los tiempos de atención a efectos de brindar una respuesta oportuna y dentro de los plazos legales, a las distintas solicitudes que se presentan, permitiendo de ese modo, el desarrollo de las inversiones de las actividades pesqueras e industriales.

II.1.50 Permitir afiliar a la IAFAS SIS, bajo el Régimen de Financiamiento Subsidiado, independientemente de la clasificación socioeconómica, a todas las personas residentes en el Perú y a todos los peruanos residentes en el exterior que se encuentren en el territorio nacional y, que no cuenten con ningún seguro de salud, brindándoles la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS y Planes Complementarios a cargo de la IAFAS SIS, así como la cobertura del listado de enfermedades de alto costo, el listado de enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo a cargo de la Institución Administradora de

Fondos de Aseguramiento de Salud Fondo Intangible Solidario de Salud – IAFAS FISSAL.

El Decreto Legislativo es necesario por su carácter permanente y constituye el reconocimiento de los derechos adquiridos por los afiliados que resultan irreversibles, en consonancia con la continuidad política de Aseguramiento Universal en Salud de lo que en los hechos ya viene ocurriendo con el financiamiento de las prestaciones de salud en el marco de los Decretos de Urgencia N° 017-2019, 046-2021 y 078-2021, conforme a lo dispuesto en las Leyes de Presupuesto Público desde el año 2022 hasta la actualidad, de tal manera que en cuanto a su impacto cuantitativo beneficiará a los casi 26 millones de afiliados a la IAFAS SIS a enero de 2024 y constituirá el afianzamiento del Aseguramiento en Salud en nuestro país al brindar continuidad y permanencia en el tiempo para el acceso a los servicios de salud en su calidad de afiliados.

II.1.51 Fortalecer la regulación sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Perú.

A nivel mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la campaña en favor de una cobertura universal de salud exigen que los pacientes tengan acceso a productos médicos que sean eficaces, seguros y de calidad garantizada. Siendo que, en el Perú se cuenta con una cobertura de aseguramiento en salud del 97.7% es decir que más de 35.4 millones de habitantes están afiliados a un seguro de salud.

Uno de los elementos importantes para la atención integral de salud es el acceso a productos farmacéuticos eficaces, seguros, de calidad y con oportunidad, así como, a dispositivos médicos y productos sanitarios; y es responsabilidad del estado regularlos, vigilarlos y promoverlos.

Como parte del acceso a Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios es necesario contar con oferta en el mercado nacional y para ello se requiere mayor cantidad de dichos productos autorizados por la Autoridad nacional de Medicamentos (ANM) en nuestro país.

Los sistemas regulatorios sólidos de los productos médicos siguen siendo un elemento fundamental del buen funcionamiento de los sistemas de salud y contribuyen de manera importante a mejorar el acceso y, en última instancia, a alcanzar la cobertura universal de salud.

Establecer y mantener sistemas regulatorios maduros requiere que haya recursos suficientes, lo que incluye recursos humanos capacitados y competentes y una inversión económica considerable, por lo que, se requiere de buscar estratégicas que permitan optimizar el uso de los recursos.

La globalización de los mercados, el perfeccionamiento de las tecnologías sanitarias, la evolución rápida de la ciencia regulatoria y la complejidad cada vez mayor de las cadenas de suministro han mostrado a los reguladores la importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia o el desempeño de los productos utilizados localmente.

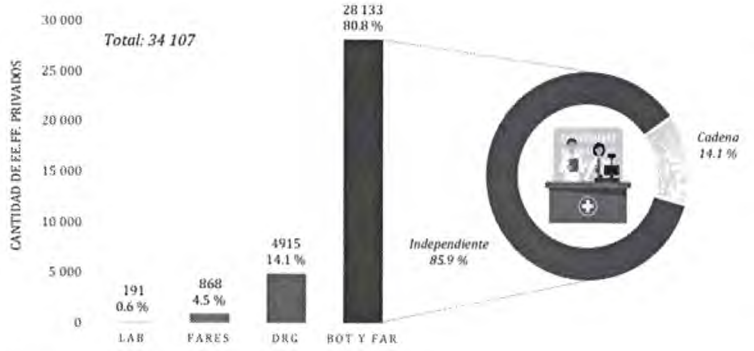
En vista de la magnitud y la complejidad de la fiscalización regulatoria necesaria para hacer frente a estos desafíos, es preciso que las Agencias Reguladoras Nacionales (ARN) consideren formas mejoradas, innovadoras y más eficaces de colaboración, para hacer el mejor uso posible de los recursos y los conocimientos técnicos disponibles, evitar la duplicación, y concentrar sus esfuerzos y recursos regulatorios donde más se necesitan.

La utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones representa una manera más inteligente y eficiente de regular los productos médicos en el mundo moderno. Por lo tanto, se alienta a los países a que elaboren y apliquen estrategias que fortalezcan sus sistemas regulatorios en consonancia con las buenas prácticas regulatorias, incluida la búsqueda de cooperación y convergencia en materia de regulación, además de la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones.

Los pacientes, los consumidores, la industria, los gobiernos nacionales, la comunidad de donantes y los asociados internacionales para el desarrollo se benefician de la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, al facilitarse y acelerarse el acceso a productos médicos eficaces, seguros y de calidad garantizada.

En el Perú se comercializan los medicamentos a través de los establecimientos farmacéuticos que a la fecha son alrededor de 34,107, de los cuales 4,915 (14.1%) que corresponden a droguerías y 191 (0.6%) a laboratorios, dichos establecimientos pueden solicitar un registro sanitario, el mismo que faculta a su titular la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos, en las condiciones que establece la normatividad vigente.

Distribución del total de establecimientos farmacéuticos autorizados y en estado activo



De los 34 107 EE.FF. privados con autorización Sanitaria de Funcionamiento vigente al 30 de junio de 2023; destaca en el sector mayorista las droguerías con 14.1 %, mientras que en el sector retail las boticas y farmacias concentran el 80.8 %; y, de este total, el 85.9 % corresponde a establecimientos independientes y solo el 14.1 % a cadenas. Asimismo, las farmacias de establecimientos de salud (clínicas) representan el 4.5 %.

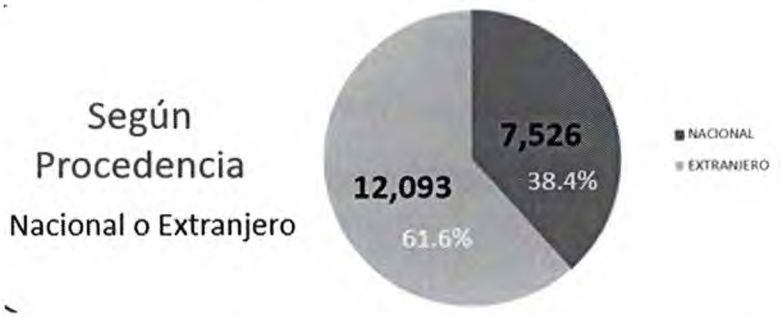
Nota:
***BOT**: Botica; **DRG**: Droguería; **FAR**: Farmacia; **FARES**: Clínicas; **LAB**: Laboratorio.*

Fuente: SI-DIGEMID.
Elaboración: EEIAU/DFAU/DIGEMID.

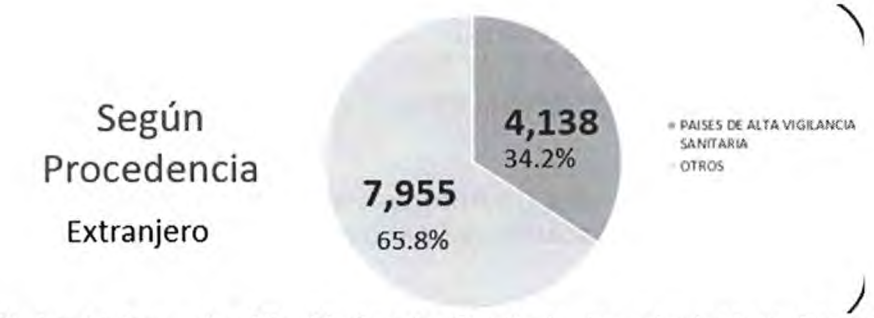
Los registros sanitarios vigentes de productos farmacéuticos en nuestro país son un total de 19,619. Que según su procedencia de fabricación corresponden el

61.6% (12,093) a productos extranjeros y el 38.4% (7,526) a productos nacionales.

De los Registros Sanitarios de Productos Farmacéuticos autorizados por DIGEMID



En el caso de los productos de procedencia extranjeras, el 34.2% (4,138) corresponden a países de alta vigilancia sanitaria y el 65.8% (7,955) corresponden a los demás países.



Nota: Países de Alta Vigilancia Sanitaria los siguientes: Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Suiza, Alemania, España, Australia, Dinamarca, Italia, Noruega, Bélgica, Suecia, República de Corea, Portugal, Irlanda, Hungría y Austria"

Del mismo modo, en el caso de dispositivos médicos y productos sanitarios se cuentan con productos registrados en su mayoría de procedencia extranjera, tal como se puede evidenciar a continuación:

Autorizaciones De Dispositivos Médicos

Fuente: SLIBROS

Dispositivos Médicos

Vigentes al 17/04/2024				
RUBRO	Extranjero	Nacional	Total	%
PRODUCTO SANITARIO(Articulo bebe)	413	1	414	1.81%
DISPOSITIVO MEDICO	14392	383	14775	65.00%
EQUIPO BIOMEDICO	3906	1	3907	17.00%
EQUIPO BIOMEDICO DE TECNOLOGIA CONTROLADA	444	0	444	2.00%
DISPOSITIVO MEDICO IN VITRO	3288	1	3289	14.00%
	22443	**386**	**22829**	99.81%

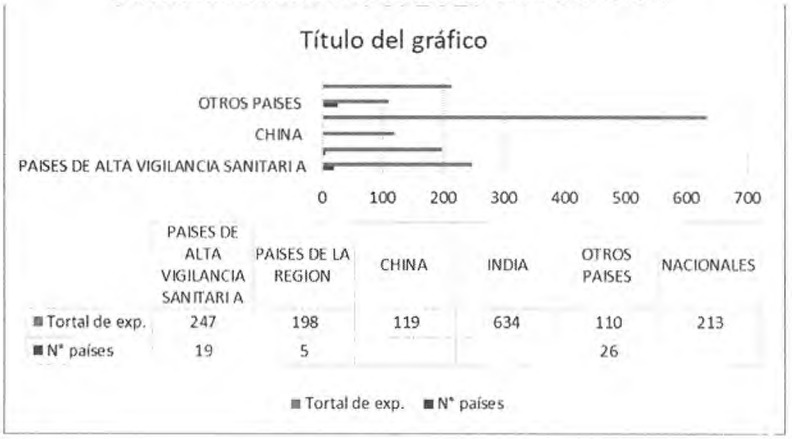
Autorizaciones De Productos Sanitarios

Fuente: SBELLA

Vigentes al 17/04/2024				
RUBRO	Notifica	Reconoce	Total	%
PRODUCTOS COSMETICOS	35,976	12,944	48,920	93.9%
PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL(*)	216	149	365	0.7%
PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE DOMESTICA(*)	2,004	826	2,830	5.4%
TOTAL AUTORIZADO	38,196	13,919	52,115	

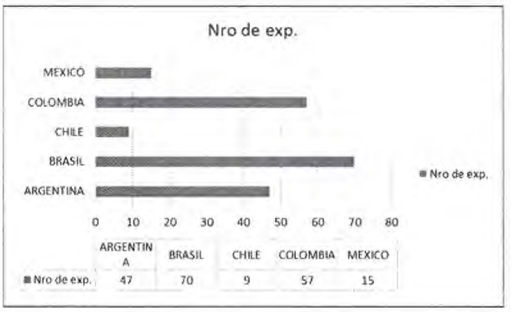
Del análisis de las solicitudes de autorizaciones de productos farmacéuticos pendientes de atención teniendo en cuenta la procedencia de fabricación, se evidencia que a fin de agilizar el proceso de autorización y optimizar el uso de los recursos se requiere contar con la simplificación de los procesos de evaluación a través de la metodología de confianza regulatoria y el reconocimiento no solo de las agencias reguladoras de los países de alta vigilancia sanitaria, sino también de otras agencias que han sido evaluadas por la (Organización Mundial de Salud) OMS y/o reconocidas con un nivel de madurez 4, sin dejar de lado los principios de calidad, eficacia y seguridad.

Solicitudes De Autorizaciones De Productos Farmacéuticos Pendientes De Atención



Sobre todo, teniendo en cuenta que, 198 corresponden a países de la región que sus agencias reguladoras se encuentran en proceso para la evaluación con la herramienta global de la OMS.

Solicitudes De Autorizaciones De Productos Farmacéuticos Pendientes De Atención de la Región



En América Latina, cuenta con mercados farmacéuticos importantes y en expansión con crecimiento más rápido en el mundo (Brasil, Chile, México, entre otros): Nuevos retos a las autoridades regulatorias relacionados con la complejidad (biotecnológicos, terapias avanzadas, innovadores, otros) y volumen de los productos que deben regularse.

De los antes expuesto, concluir que el Perú es un país importador de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios, por ello se hace necesario establecer estrategias para agilizar los procesos de autorizaciones sanitarias a través de la confianza regulatoria y el fortalecimiento del control y vigilancia sanitaria de los productos, lo que además permitirá la optimización del uso de los recursos, disminuyendo los tiempos de evaluación e incremento de la productividad.

Asimismo, teniendo en cuenta el desafío que se cuenta respecto a los procesos relacionados a los productos que ingresarán al país a través del mega puesto de Chancay y otros relacionados al alcance de la regulación de la ley productos innovadores de uso humano, así como aquellos que son usados desde muchos años atrás en nuestro país (productos naturales).

II.1.52 Modificar la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para incorporar la obligatoriedad de la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como condición, para obtener la autorización para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan interponer la demanda contenciosa administrativa ante resoluciones que emita la Sala en materia de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI, así como eliminar el requisito de que dicha autorización sea aprobada en el Consejo de Ministros.

Actualmente la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, contempla la emisión de un informe técnico que debe emitir la SGP como paso previo para obtener la autorización para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan interponer la demanda contenciosa

administrativa ante las resoluciones que emita la Sala en materia de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI; es decir, lo que se quiere con la disposición propuesta es elevar a nivel de norma con rango de ley lo ya establecido vía reglamentaria.

De otro lado, de acuerdo al TUO de la Ley N° 27584, se dispone que los plazos para interponer la demanda contencioso administrativa son de caducidad, es decir una vez transcurridos el plazo para su interposición (que son de 3 meses) se producirá la pérdida del derecho y de la acción correspondiente a favor de la entidad para exigir que el Poder Judicial analice la validez de la emisión de un acto administrativo que emita, en el presente caso, el INDECOPI. Como se advierte es un plazo corto el que regula la normativa procedimental por lo que se requiere, en aplicación del principio de oportunidad, un trámite simplificado que se dé al interior del Poder Ejecutivo para poder autorizar a la entidad interponer la demanda contenciosa administrativa para lo cual se propone eliminar la condición de que sea aprobada en el Consejo de Ministros, subsistiendo la condición de que sea autorizada, expresamente, por la máxima autoridad de la entidad, con lo que se garantizaría la posición sectorial del Poder Ejecutivo sobre un tema que, considera, le afecta directamente, más aún si para que se dé la autorización se requerirá también la opinión de la PCM, a través de la SGP.

Con la medida propuesta se pretende simplificar el trámite para que el Poder Ejecutivo pueda interponer demanda contenciosa administrativa en busca de revertir una situación que considera afecta a su sector, ello en resguardo del ejercicio de sus competencias y buscando siempre velar por el interés colectivo.

II.1.53 Modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para i) establecer las definiciones y alcance de los mecanismos de participación de la ciudadanía como parte de los derechos inherentes a la persona; ii) establecer el marco normativo que regule la gestión integral de los mecanismos de participación de la ciudadanía; así como, iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio; a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado, asegurando la participación de las entidades y empresas públicas y privadas que forman parte de la cadena de valor desde la mirada de las personas en el territorio

El inciso 7) del numeral 48.2 del artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, estipula que la Presidencia del Consejo de Ministros tiene como una de sus competencias establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación de la ciudanía (entre ellos, reclamos).

Sin embargo, dicha norma no define qué debe entenderse por mecanismos de participación de la ciudadanía ni su alcance; asimismo, regula diversos conceptos como son la queja por defectos de tramitación, queja administrativa, reclamos, denuncias, petición; entre otros.

Si bien la citada Ley N° 27444 hace referencia a los reclamos, peticiones y quejas que puede interponer la ciudadanía, ello no está regulado en forma integral bajo una mirada de Estado, conllevando a que cada entidad determine cómo atender los mismos; generando inclusive múltiples dispositivos normativos (sobre-regulación). En consecuencia, no es posible conocer y contar con información certera sobre las necesidades y expectativas de las personas (naturales y jurídicas) que permita fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las demandas ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural como señala la Política General de Gobierno.

Asimismo, las entidades utilizan los términos de reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones, entre otros, de manera diferenciada según el tipo de servicios que brindan; generando confusión en la ciudadanía, sin considerar además que los mismos términos se aplican de diferente forma para el sector privado. Lo cual, no está en concordancia con las prácticas internacionales que promueven una tendencia a brindar un único canal para la comunicación entre la ciudadanía y el Estado.

Dicha situación limita el acceso de las personas a ejercer su derecho de petición puesto que el/la ciudadano/a de a pie no distingue si se trata de una denuncia, queja o reclamo; lo que espera es que su derecho sea atendido en forma eficaz, oportuna y transparente por el Estado.

Cabe mencionar que, el derecho de petición es un derecho fundamental que es parte de los derechos inherentes a la persona humana y posee suma importancia en el ámbito de la participación ciudadana, no solamente en peticiones administrativas.

Una de las críticas recurrentes de las personas hacia el Estado es que este no funciona en la forma y a la velocidad que requieren sus necesidades y expectativas (preocupación constante del Estado). Por ello, resulta necesario mejorar el marco normativo desde la mirada de las personas con la finalidad de mejorar la eficiencia, productividad y la calidad de los bienes y servicios que son brindados a las personas naturales y jurídicas, como parte del proceso de modernización de la gestión pública; en aras de construir un Estado al servicio del ciudadano. Por lo que, se deben integrar todas las peticiones de las personas a través de un solo canal de atención (reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones y afines); lo que permitirá al Estado monitorear e identificar los principales problemas del país para trabajar en ellos de manera integral y oportuna.

De esta manera, se uniformizará el uso de términos a fin de que las "peticiones" -de manera general- comprenda los reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones, entre otros; como mecanismo de participación de la ciudadanía.

A su vez, resulta necesario fortalecer las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros -a través de la Secretaría de Gestión Pública- para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio; considerando que ejerce la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial del Poder Ejecutivo y la coordinación de las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y la sociedad civil.

Es menester indicar que, en el ámbito internacional, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda ponen a disposición de la ciudadanía canales unificados que permiten a la ciudadanía presentar retroalimentación ciudadana ("contáctanos", "bríndanos tu feedback") o insatisfacción ("ayúdanos a mejorar", "reporta un problema") respecto de los servicios que ha recibido por parte de las entidades del Estado; de igual manera, en Colombia, Chile, México y España se han implementado sistemas unificados a través de los cuales se reciben las comunicaciones ciudadanas (quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones).

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere una norma con rango de ley a través de la cual se modifiquen las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Dicha medida no contraviene ningún precepto constitucional; disponiendo acciones para hacer más eficiente la gestión pública del Estado en beneficio de la ciudadanía.

En consecuencia, se trata de una norma que definirá y ampliará los alcances de los mecanismos de participación de la ciudadanía, integrando las peticiones de las personas a través de un solo canal de atención, para lograr una gestión pública eficiente y oportuna; lo que contribuirá en la solución de los problemas públicos, así como en el diseño y provisión de los bienes y servicios con estándares de calidad adecuados, tomando en cuenta las necesidades y expectativas de las personas; consolidando así un Estado eficiente, transparente, moderno y descentralizado con un marco legal que promueva la inversión, la mejora continua y eliminación de barreras para acceder a los servicios reduciendo los espacios de corrupción. Ello, se encuentra en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 así como con la legislación vigente referida a la mejora de la calidad de la prestación de bienes y servicios.

La implementación de dicha medida se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas. El beneficio que genera una medida como la propuesta, resulta perfectamente tangible en términos de reducción de costos y eficiencia para el Estado por cuanto se establece una gestión integral de las peticiones de los/as ciudadanos/as a través de un solo canal de atención que permitirá optimizar los procesos asociados a la prestación de los servicios y bienes.

Dicha medida generará un impacto inmediato en beneficio de la ciudadanía; dado que reducirá de manera significativa los costos de transacción que las personas deben asumir para solicitar la atención de sus peticiones (reclamos, quejas, denuncias, sugerencias, entre otros); pues a través de un único punto de contacto, de manera fácil, podrán ejercer su derecho para que este sea atendido en forma eficaz, oportuna y transparente por el Estado. Es decir, al conocer de manera integral los problemas que aquejan a la ciudadanía en la interacción con el Estado a través de un único canal de atención, se contará con los elementos que permitan agilizar y destrabar las acciones para solucionar dichos problemas mediante la provisión de servicios de calidad.

La medida propuesta permitirá que la Presidencia del Consejo de Ministros -a través de la Secretaría de Gestión Pública- cuente con el acceso a todas las peticiones de las personas mediante un solo canal de atención y pueda así tener

conocimiento en forma integral y sistemática de las necesidades de las personas que requieren atención; y, conforme a las competencias que le han sido conferidas en el literal e) del artículo 14 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública así como en el literal n) del artículo 71 del Texto Integrado del ROF de la PCM; intervenir e incidir para que las entidades públicas adopten las acciones pertinentes para optimizar y mejorar su gestión interna en aras de brindar servicios adecuados a la ciudadanía; respondiendo a las personas sus peticiones en forma oportuna; evitando que se genere una mayor insatisfacción a el/la ciudadano/a por la falta de respuesta o solución del problema o por una respuesta o solución tardía.

II.1.54 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, garantizando el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP, a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados

A través del Decreto Supremo N° 079-2012-PCM, se creó la Escuela Nacional de Administración Pública, como órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, encargado de proveer formación para directivos y capacitación para el servicio civil peruano en temas de administración y gestión pública.

La Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece requisitos para el funcionamiento y organización, propios de una universidad, pero no necesariamente de una entidad de la Administración Pública, como lo es la ENAP. Por ello es necesario establecer el marco legal que permita a la ENAP a cumplir con el mandato de la propia Ley Universitaria, de organizar cursos de posgrado.

En adición, las actividades académicas de la ENAP son de interés de toda la Administración Pública, desde que la función administrativa es desarrollada indistintamente en todos los organismos públicos, al margen de la regulación específica de cada carrera especial.

El problema que se busca resolver es dotar de claridad, a través de una norma con rango de ley, las competencias de la ENAP respecto de sus actividades, de tal forma que estas alcancen a todas las personas que desarrollan función administrativa o a cualquier ciudadano interesado en desarrollar función pública.

Igualmente, se busca generar un marco legal genérico, dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que institucionalice los cursos de inducción y acceso a la función pública que son requeridos por las diversas entidades de la Administración Pública.

Los recursos para implementar la propuesta normativa, son los mismos que ya forman parte del presupuesto institucional de SERVIR.

Finalmente, la presente iniciativa legislativa se orienta a incorporar en el ordenamiento jurídico nacional, un nuevo marco normativo para el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP, permitiendo que las actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades

de los servidores públicos y de la ciudadanía interesada en acceder a la función pública, cuenten con un marco legal adecuado y se pueda contar con servidores y ciudadanos debidamente formados y capacitados para el trabajo en entidades de la Administración Pública, todo lo cual se alinea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM.

II.1.55 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, a través de la optimización del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la idoneidad y la actuación independiente e imparcial de la secretaría técnica del procedimiento administrativo disciplinario, el debido procedimiento y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias.

Conforme se tiene establecido en el artículo 92 de la Ley N° 30057, actualmente, el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario es designado mediante resolución del titular de la entidad y depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces. Asimismo, de acuerdo a la citada norma, de preferencia es abogado.

Lo precedentemente descrito, constituye un problema central para la independencia e imparcialidad por parte del/de la Secretario/a Técnico/a del procedimiento administrativo disciplinario, pues está subordinado a órganos superiores pertenecientes a la Entidad (podría, por ejemplo, existir el riesgo que las denuncias contra las autoridades de turno, no sean tramitadas adecuadamente o con la celeridad que el caso amerite o incluso podrían ser archivadas).

En tal sentido, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en su actuación en general, resulta necesario dotar de independencia funcional y administrativa al secretario técnico, evitando cualquier acto o circunstancia que ponga en riesgo la autonomía en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, en aras de garantizar la vigilancia de los principios jurídicos aplicables, así como, de la legalidad de los actos realizados en el procedimiento administrativo disciplinario, se estima necesario establecer el marco normativo que prevea que el secretario técnico debe estar titulado en derecho.

Por otro lado, la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil ha advertido una gran cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios en los que se han incurrido en vicios de nulidad, por la contravención al debido procedimiento, así como a los derechos de los servidores públicos. Asimismo, ha identificado que existe un gran número de procedimientos administrativos disciplinarios que han sido declarados prescritos por el citado Tribunal, debido a la demora de las autoridades en la tramitación de los procedimientos.



En efecto, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Expedientes (SGE) del Tribunal, las nulidades declaradas desde el año 2019 hasta la fecha, representan un cuarenta y siete por ciento (47%) del total de expedientes correspondientes al régimen disciplinario, durante el referido periodo.

En ese sentido, resulta necesario establecer el marco normativo que permita garantizar el ejercicio oportuno de la potestad disciplinaria de las entidades

públicas, y así evitar la impunidad originada por la prescripción de dicha potestad.

Asimismo, se estima imperioso aprobar el marco normativo que coadyuve al respeto del principio del debido procedimiento administrativo en la tramitación y procesamiento de las faltas disciplinarias cometidas en el marco del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias, a través de una correcta graduación de las sanciones a imponer.

En atención a lo anteriormente expuesto, se beneficiará a los operadores que participan en el procedimiento administrativo disciplinario, a los servidores públicos inmersos en investigaciones y a la ciudadanía en general por el adecuado ejercicio de la potestad disciplinaria.

Respecto del financiamiento, corresponde precisar que se realizará con los recursos de cada entidad, a través de una implementación progresiva de la Ley, en el marco de las etapas de formulación y programación presupuestaria.

Finalmente, la presente iniciativa legislativa se orienta a incorporar en el ordenamiento jurídico nacional, un nuevo marco normativo para garantizar la idoneidad, independencia técnica y funcional de los secretarios técnicos de los procedimientos administrativos disciplinarios, el debido procedimiento administrativo disciplinario y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias a imponer, todo lo cual se alinea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM.

II.1.56 Modificar el Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para: i) precisar los efectos ante el incumplimiento de no haber efectuado un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), ii) fortalecer el rol de los actores y su articulación con el ecosistema de calidad regulatoria, iii) restringir los supuestos de excepciones para la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria, iv) fortalecer los mecanismos de trasparencia de la información que se genera en el ciclo regulatorio, y, v) fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

La propuesta normativa es necesaria y oportuna para atender la necesidad de mejorar y armonizar el marco normativo de mejora de la calidad regulatoria; y así fomentar una cultura de gestión gubernamental centrada en el ciudadano, por la cual la Administración Pública decide usar la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión de regular basado en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y efectos; y, cargas administrativas, respaldado por la participación integral de las partes interesadas con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y sostenible, el bienestar social y el fortalecimiento del buen gobierno.

Casi todos los países de la OCDE han adoptado programas de reforma de la regulación, que contienen una serie de instrumentos e instituciones que están integradas y se apoyan mutuamente. La característica más común de los programas reforma regulatoria en los países de la OCDE es el requisito de que se consulte a las partes afectadas sobre las propuestas de regulación la

redacción de regulaciones en lenguaje sencillo y la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio y comprende la exigencia de que se consideren alternativas de regulación.

En las últimas dos décadas se logró un progresivo perfeccionamiento y mejora de las políticas de reforma regulatoria. Se desarrolló una tendencia casi universal hacia un mayor rigor y una cobertura más amplia de la mejora regulatoria. En los países avanzados en esta reforma, los esfuerzos se concentraron en el desarrollo de estrategias para poder integrar mejor los diversos requisitos de calidad a la elaboración de políticas. En este contexto se reconoce la eficacia de las políticas de calidad regulatoria entre los que resaltan una relación clara entre la adopción de procesos de mejores prácticas regulatorias y mejores resultados económicos. La evidencia a ello es que la reforma de la calidad regulatoria se está adoptando en cada vez más países.

Nuestro país apostó por la implementación del ACR Stock como primer instrumento de mejora de la calidad regulatoria, siendo necesario continuar con la implementación de otros instrumentos que fortalezcan este proceso. Estos instrumentos coadyuvantes de la Mejora de Calidad Regulatoria del Perú son: el AIR Ex Ante, la consulta pública, la Agenda Temprana, entre otros.

Para el fortalecimiento de la mejora de la calidad regulatoria y siguiendo las buenas prácticas internacionales, se ha generado un marco institucional bien diseñado para gestionar, coordinar, articular y facilitar la reforma regulatoria, además, los criterios y requisitos e instrumentos de la Mejora de la calidad Regulatoria del Perú son claramente coherentes con las mejores prácticas internacionales y su introducción gradual y continua, corresponden a la capacidad técnica y administrativa de su aplicación de forma sostenible.

En ese sentido, se requiere avanzar en medidas que fortalezcan la gobernanza y la adecuada implementación en las entidades de la Administración Pública.

Ahora bien, entre los impactos cualitativos y cuantitativos, se menciona que la aplicación de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público, toda vez que sus disposiciones no revisten carácter presupuestario, por el contrario genera beneficios por cuanto lo que se busca, en el marco de la modernización de la gestión pública, es a través de la modificación del Decreto Legislativo Nº 1565 que permita fortalecer la gobernanza, los roles de los actores involucrados, y fortalecer la aplicación de los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria; a fin de asegurar la idoneidad y la calidad del contenido de las intervenciones normativas que adopten las entidades del Poder Ejecutivo, en base a evidencia, con procesos transparentes y participativos, sin generar sobrecostos a las empresas y ciudadanos, entendiendo a la regulación como un medio para alcanzar un objetivo de política pública.



Al respecto, en el Perú, el proceso de mejora regulatoria se inició a mediados del 2017 con un proceso de reforma integral de los procedimientos administrativos a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo a través de la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria teniendo como finalidad: i) Eliminar procedimientos administrativos ilegales o innecesarios, ii) eliminar y simplificar requisitos, iii) determinar los costos de las cargas administrativas generadas, iv) contar con una línea base para la determinación de metas de reducción de cargas

administrativas y v) sistematizar todos los procedimientos administrativos a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo.

El proceso de implementación del Análisis de Calidad Regulatoria del Stock de procedimientos administrativos vigentes tuvo una duración de 2 años que inició en junio de 2017 y culminó en junio de 2019. Como resultado del proceso se obtuvo lo siguiente:

- El 73% de los procedimientos eliminados impactan en la micro, mediana y pequeña empresa.
- La eliminación impacta en 4 millones de solicitudes realizadas por personas naturales, empresas (micro, mediana y pequeña empresa), organizaciones sin fines de lucro y otros.
- Se eliminaron 275 requisitos y se simplificaron 783 requisitos.
- Las entidades del Poder Ejecutivo han establecido una línea de base de los costos que generan las cargas administrativas lo que permitirá simplificar más los procedimientos administrativos en los siguientes ciclos de revisión.

Indicar que las cargas administrativas son los costos soportados por las empresas, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, como resultado de las actividades administrativas realizadas para cumplir con las obligaciones de información incluidas en la regulación.

En el marco del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), se realizó un esfuerzo considerable en la medición y reducción de las cargas administrativas relacionadas con los procedimientos administrativos. Como resultado de esta, la carga administrativa de los procedimientos administrativos evaluados se redujo en aproximadamente S/. 286.3 millones nuevos soles, como consecuencia de la eliminación del 30% (734) de los procedimientos administrativos revisados y de 275 requisitos. Además, de la simplificación de 738 requisitos.

El gran aporte del enfoque de la mejora de la calidad regulatoria en el Perú es que no se centra exclusivamente en impactos que puede tener la regulación en la economía; sino que apunta hacia un análisis más integral con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que garantiza la defensa de los derechos de las personas y de su dignidad en todo el territorio nacional.

La regulación desde el punto de vista económico se basa en la existencia de una importante deficiencia del mercado resultante de economías de escala y alcance de la producción, de las imperfecciones de la información en las transacciones de mercado, de la existencia de mercados incompletos y externalidades, y de los efectos resultantes de la distribución de ingresos y riqueza. Las deficiencias del mercado son más pronunciadas en países en desarrollo, por lo tanto, la regulación pública es relevante y más pronunciada en estos países.



El gran aporte del enfoque de la mejora de la calidad regulatoria en el Perú es que no se centra exclusivamente en impactos que puede tener la regulación en la economía; sino que apunta hacia un análisis más integral con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que garantiza la defensa de los derechos de las personas y de su dignidad en todo el territorio nacional.

Por tanto, el proyecto normativo no incorpora o modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier

exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de empresas, ciudadanos o sociedad civil, que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyen al desarrollo integral, sostenible y al bienestar social.

En cuanto al impacto de la vigencia de la norma, se propone la modificación del Decreto legislativo 1565, Ley que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria.

II.1.57 Facultar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para el uso de herramientas tecnológicas en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y acceso a información de datos personales y metadata, a fin de garantizar que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan contar con la prestación continua del servicio contratado.

Antecedentes

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones, el OSIPTEL se encarga de regular el comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas.

Entre los principales objetivos por los que fue creado el OSIPTEL se encuentran:

a) Hacer cumplir los compromisos contractuales del operador establecido respecto a las tarifas, la calidad del servicio y expansión de la red.
b) Promover el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones, con niveles adecuados de calidad y eficiencia.
c) Ahora, en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en adelante, Ley N° 27332), se establecieron las funciones al OSIPTEL, a fin de cumplir los objetivos de su creación, los cuales son:
    i. Función Normativa
    ii. Función Reguladora
    iii. Función Supervisora
    iv. Función Fiscalizadora y Sancionadora
    v. Función de Solución de Controversias
    vi. Función de Solución de los Reclamos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.



Al respecto, cabe precisar que en el año 2000 se promulgó la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, cuyo objetivo era definir y delimitar las facultades del OSIPTEL para supervisar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que prestan servicios públicos de telecomunicaciones, en lo que respecta a su competencia.

En virtud de su Función Supervisora, el OSIPTEL verifica el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia. Asimismo, la función supervisora permite verificar el cumplimiento

de cualquier mandato o resolución emitida por el propio el OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad supervisada.

Es importante señalar que el sector telecomunicaciones ha experimentado un desarrollo constante y significativo en la última década, impulsado por un mayor dinamismo de la oferta de servicios de voz, datos y contenidos audiovisuales, así como por un mayor acceso, disponibilidad y consumo de dichos servicios por parte de los usuarios. Los referidos cambios en la oferta y demanda del mercado, demandan que el OSIPTEL diversifique e intensifique sus actividades como regulador de las telecomunicaciones, a fin de fomentar la competencia en el mercado y garantizar la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

En esa línea, como parte de las iniciativas del regulador para fortalecer su función fiscalizadora del servicio de acceso a Internet, el OSIPTEL emitió la Resolución N°137-2021-CD/OSIPTEL, a través de la cual dispone el despliegue de un sistema automatizado de medición de Internet el cual busca realizar mediciones automatizadas a nivel nacional, de tal manera de contar con una visión integral del estado de la calidad del servicio de las principales empresas operadoras

Cabe indicar que a través del artículo 4 de la Ley 31207, se establece la obligación del Osiptel de desplegar un Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Acceso a Internet a través del cual se verifica la calidad de dicho servicio.

Asimismo, el desarrollo del mercado de telecomunicaciones y de otros mercados relacionados en años recientes, ha implicado para el OSIPTEL tener que asumir la ejecución de nuevas actividades, bajo el ámbito de las funciones que fueron establecidas en la normativa correspondiente, es el caso de la contratación de servicios públicos móviles empleando la verificación de identidad a través del sistema de verificación biométrica de huella dactilar y la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad – RENTESEG, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1338.

En ese sentido, es esencial realizar acciones para supervisar la continuidad de la prestación del servicio público, el derecho a la información de los usuarios y abonados, la seguridad ciudadana a través de la garantía a las contrataciones de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros. Siendo así, se debe fortalecer la facultad de supervisión de este Organismo Regulador, haciendo eficiente su intervención y también la concretización de sus decisiones, en favor de la ciudadanía en general.



Justificación de la medida

La actividad de fiscalización como potestad de la Administración Pública ha sido reconocida en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General –, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y, para el caso del OSIPTEL, en la Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En dichos textos, el legislador ha trasladado las características de la actividad, así como sus manifestaciones más

usuales como son, por ejemplo, los requerimientos de información escritos o la copia de archivos físicos o magnéticos.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los campos más dinámicos de la sociedad actual al estar estrechamente vinculado con el avance tecnológico, el cual finalmente tiene un impacto en el desarrollo económico y en la calidad de vida de la población.

En el desarrollo de la actividad de supervisión es importante reiterar que en el articulado de la Ley Nº 27336 se ha precisado que las entidades supervisadas tienen el deber de brindar a los funcionarios autorizados toda la información y facilidades que éstos soliciten, es decir, dado que los agentes supervisados tienen un deber de colaboración con la entidad y permiten, en atención a este, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones a través de los instrumentos y modalidades que el OSIPTEL considere necesario. Ello está acorde con los artículos 15 y 16 de la citada Ley N° 27336, los cuales reconocen las facultades de supervisión a las instancias competentes del OSIPTEL, así como las obligaciones de las entidades supervisadas.

De la revisión del artículo 15 de la Ley Nº 27336, se observa también que las facultades reconocidas a los órganos encargados de la fiscalización comprenden la posibilidad de que, durante su desarrollo, el órgano pueda recurrir a los instrumentos o modalidades más convenientes para el desarrollo de la supervisión. Dicho en otras palabras, en la redacción del artículo se reconoce la discrecionalidad de la autoridad y se permite que el OSIPTEL haga uso del método más conveniente para llevar a cabo la supervisión, aun cuando dicho método no se encuentre de forma expresa en el artículo 15.

Precisamente, en esa línea, el Reglamento General de Supervisión del OSIPTEL, aprobado con Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL, reconoce como facultad de los supervisores del organismo regulador, de acceder de manera presencial o remota a las dependencias, equipos e instalaciones de operación, de gestión de red y plataformas informáticas de la entidad supervisada.

Asimismo, a través de la Resolución N° 255-2018-CD/OSIPTEL, se dispuso la adopción de acciones necesarias para el fortalecimiento de la función supervisora, a través del acceso remoto a los sistemas informáticos y las bases de datos de las empresas operadoras de servicios públicos, en virtud del cual el OSIPTEL ha emitido normas como es el caso de la Resolución N° 251-2021-CD/OSIPTEL, que aprueba el proyecto de norma que modifica el Reglamento para la atención de gestiones y reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, la Resolución N° 259-2021-CD/OSIPTEL que aprueba la modificación del Reglamento General de Supervisión, entre otros.



Es preciso recalcar que los servicios públicos de telecomunicaciones, sobre todo el servicio de acceso a Internet, ha cobrado una alta relevancia para los usuarios, tales es así que de acuerdo a la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) del año 2022, el 90.4% de hogares a nivel nacional, contaría con el servicio de acceso a Internet Fijo y/o Móvil; mientras que el 98% de hogares contaría con el servicio de telefonía móvil. Cabe indicar que el servicio de acceso a Internet, permite realizar diversas actividades productivas, tales como el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, entre otros; por lo que, no solo corresponde al OSIPTEL verificar el cumplimiento de

la obligación de las empresas operadoras a prestar dichos servicios, de manera adecuada y satisfactoria, sino también establecer herramientas de medición que faciliten el cumplimiento de dicha función.

En efecto, si bien el OSIPTEL cuenta con facultad discrecional para establecer la metodología y herramientas para el cumplimiento de su función de supervisión, sea de manera presencial o remota, en un tiempo específico o de manera permanente, dado los cambios tecnológicos del sector, y a fin de que las acciones de fiscalización que se realicen resulten eficaces procurando que la información que se obtenga sea las más directa y confiables, resulta necesario optar por herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de la función de supervisión del OSIPTEL.

Entre las herramientas a considerar se encuentran los que permiten el monitoreo permanente y gestión de la operatividad de las redes, los sistemas comerciales relativas a la contratación, bajas, migraciones, portabilidad y demás gestiones que son realizados por los usuarios; a su vez, los sistemas relativos a la atención al cliente, gestiones de reclamos, así como aplicativos de gestión de usuarios, entre otras que sirven de soporte en la prestación de los servicios.

Como parte de los principales beneficios del uso de mecanismos informáticos remotos y en línea, se tiene a la reducción de tiempos en la obtención de datos relevantes para el cumplimiento de las funciones del regulador, así como la reducción de tiempos en el análisis de dicha información, lo cual conlleva a identificar los problemas con mayor agilidad, y requerir a las empresas operadoras las acciones de mejora que correspondan, en beneficio de los usuarios de los citados servicios.

Como ejemplo de ello, es preciso indicar que el OSIPTEL cuenta –actualmente- con accesos remotos a los sistemas concentradores de alarmas de las redes móviles de las empresas operadoras, lo cual ha permitido identificar entre enero a diciembre del 2023 cerca de 616 004 alarmas que impactaron en las estaciones bases que brindan el servicio móvil, en más de 6418 centros poblados a nivel nacional, en un tiempo máximo de una (1) hora luego de ocurrido dichos eventos.

Lo relatado implica una mejora sustantiva en los tiempos de respuesta en la identificación de eventos de interrupciones que afectan la continuidad de los servicios, toda vez que, de acuerdo con el marco normativo vigente, las empresas cuentan con plazos que van de uno (1) y hasta tres (3) días hábiles para reportar los eventos de interrupción.

En tal sentido, a través de las conexiones remotas, el OSIPTEL ha logrado coordinar oportunamente con las empresas operadoras el pronto restablecimiento de los servicios móviles, en beneficio de los abonados y del sector en general, realizando el monitoreo de restablecimiento luego de ocurrida la interrupción.

Resulta relevante añadir, que este tipo de acceso a fin de que el OSIPTEL pueda monitorear y supervisar las distintas obligaciones contempladas en las leyes, reglamentos, contratos de concesión, de cumplimiento por parte de la empresas operadoras, se enmarca en el supuesto contemplado en el artículo 14.1 de la Ley 29733, Ley de protección de datos personales; y para ello, el OSIPTEL cuenta con procedimientos debidamente certificados para resguardar la

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que maneja, como está consignado en su Política Institucional de Seguridad de la Información.

Sobre los datos personales, es importante señalar que siendo el sector de telecomunicaciones altamente especializado y los temas a fiscalizar son variados, el OSIPTEL requiere información específica para cada tipo de materia fiscalizable, de acuerdo al alcance y los requerimientos técnicos necesarios para realizar de manera efectiva la fiscalización. Así, por ejemplo, para el caso del RENTESEG (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad), se administra información de todos los abonados de los servicios móviles, así como información de los abonados relacionados a reportes de robo o pérdida; con dicha información -entre otros- se procede a fiscalizar que los equipos que operan en las redes móviles no cursen tráfico en equipos alterados, flasheados u otros, generando órdenes de bloqueo y/o suspensión de servicios móviles, ello en el marco de la seguridad ciudadana.

En el caso de la fiscalización de la calidad del servicio de acceso a Internet, al ser mediciones aleatorias, se requiere el registro de abonados del servicio de Internet Fijo y Móvil, dado que cualquier usuario, podría ser elegible para las mediciones a ser realizados ya sea a través de mecanismos automatizados o a través de supervisiones en campo con supervisores de Osiptel; así mismo, también se requiere contar con información técnica del plan adquirido por los usuarios (v.g. velocidad contratada, velocidad mínima garantizada, fecha de inicio y fin de promociones de aumento de velocidad) de tal manera que sea factible validar si la empresa cumple con los estándares de calidad definidos en el contrato y en la normativa vigente. Adicionalmente a ello, en caso los usuarios reporten problemas de calidad al regulador, se requiere contar con información que permita validar sus datos, plan adquirido y condiciones técnicas del plan adquirido de tal forma que sea factible programar mediciones específicas.

Otro ejemplo, refiere a información relacionada a la fiscalización de los derechos de los usuarios respecto de la ejecución de las solicitudes de bajas y migraciones de los planes de los servicios de telecomunicaciones que tienen adquiridos con las empresas operadoras. En efecto, en este tipo de fiscalizaciones, se requiere información del número telefónico del servicio móvil, así como datos técnicos del plan contratado y de la solicitud de baja o migración realizados por el usuario, de tal manera que sea factible validar si la empresa cumple con efectivizar la ejecución de dichas solicitudes dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente.

II.1.58 Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado a un plazo de 30 días hábiles, como una excepción al plazo general establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración

El 04 de noviembre de 2022, se publicó la Ley N° 31603, a través del cual se modificó el artículo 207 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (en adelante, LPAG), reduciéndose el plazo para resolver el recurso

de reconsideración, de 30 días hábiles a 15 días hábiles para todas las entidades del sector público, sin tener en cuenta la especial naturaleza y funcionamiento de los Consejos Directivos y/u órganos colegiados de las distintas entidades públicas ni la diversa complejidad de las materias que son objeto de dichos recursos de reconsideración.

En este escenario, se propone incluir en el proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, entre ellas, la simplificación administrativa, un acápite que permita la modificación del numeral 207.2 del artículo 207 de la LPAG, con el objetivo de ampliar el plazo con el que cuentan actualmente los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado de 15 días hábiles a 30 días hábiles, como una excepción al plazo general de resolución de los recursos de reconsideración para dichos consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas.

Justificación del Ositrán

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, el Consejo Directivo sesiona ordinariamente dos veces al mes y, extraordinariamente, cuando lo determine su Presidente o la mayoría de sus miembros.

En efecto, los Consejos Directivos y/u órganos colegiados constituyen órganos que sesionan periódicamente, para la realización de sus sesiones se ejecutan actos preparatorios y sus acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros asistentes; dichos aspectos determinan que el plazo de 15 días hábiles que poseen para conocer y resolver determinado asunto sea insuficiente, más aún si se tiene en cuenta que, su funcionamiento se apoya en opiniones técnicas, las cuales requieren la actuación coordinada de los órganos de línea y/o asesoramiento, entre otros, lo que implica tomar en consideración el plazo para las actuaciones y coordinaciones propias de dichos órganos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la especial naturaleza y funcionamiento de los Consejos Directivos y/u órganos colegiados, resulta necesario que el plazo de 15 días hábiles establecido para la atención del recurso de reconsideración de los procedimientos que estos conocen y resuelven, sea ampliado a 30 días hábiles.

Asimismo, los Consejos Directivos y/u órganos colegiados resuelven procedimientos en materias especializadas y complejas (como es el caso de los Consejos Directivos de los Organismos Reguladores y de otras entidades especializadas que cuentan con las mismas), los cuales sustentan sus decisiones en opiniones técnicas de sus órganos, debiendo garantizarse un plazo razonable para el análisis y evaluación de la decisión a adoptarse, a efectos de salvaguardar la calidad de la decisión de los Consejos Directivos y/u órganos colegiados.



No contar con un plazo suficiente de 30 días hábiles generaría la afectación en la calidad de los pronunciamientos a emitirse, lo cual, a su vez, podría generar:

1) Mayores conflictos con los administrados en la vía judicial o arbitral.

2) Afectación al gasto público dado que se destinaría mayores recursos públicos a la defensa del Estado en dichos procesos.
3) Afectación a la correcta prestación de los servicios públicos, lo cual conllevaría a un perjuicio directo a los usuarios.

Justificación del Osinergmin

Los procedimientos de fijación de tarifas tienen un impacto importante en la operación, desarrollo y sostenibilidad de las inversiones para la adecuada prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, electricidad, gas natural por ductos, telecomunicaciones y vías de transporte; así como para el cierre de la brecha en infraestructura de dichos servicios.

En lo que compete al sector energético, podemos citar los siguientes ejemplos:
Minem: Perú tiene cartera de 26 proyectos de centrales eléctricas: El Perú tiene una cartera de 26 proyectos de centrales eléctricas con recursos energéticos renovables, que deben construirse en los siguientes años y añadirán una potencia de 4,276 megavatios (MW) al SEIN, con una inversión de 5,649 millones de dólares.

Proyecto Alto Piura se reanudaría en agosto, luego de varias paralizaciones: Tras 36 años desde su concepción, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP) se reanudaría. (...) El objetivo del proyecto es la mejora de 31,000 hectáreas en el valle viejo del Alto Piura, la incorporación de 19,000 hectáreas con riego presurizado en áreas nuevas y la generación de hasta 300 MW-año de energía eléctrica.

Energía eléctrica para la Amazonia: El Estado dio un paso crucial en la lucha contra la pobreza energética en la Amazonía peruana con la aprobación del Programa Anual de Promociones 2024. Este programa destinará 42 millones de soles al financiamiento de proyectos de electrificación por medio de centrales solares fotovoltaicas en 14 localidades de la región Loreto, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Por tanto, en el marco del fortalecimiento y calidad regulatoria en materia de inversión privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, los plazos administrativos de los procedimientos de regulación tarifaria de los servicios públicos deben ser razonables y proporcionales a la complejidad e impacto de las decisiones administrativas que se adoptan en dichos procedimientos.

Cabe indicar que la fijación de tarifas en dichos servicios se rige por las disposiciones de la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, que promueve la transparencia, así como la participación de los diversos grupos de interés en dichos procedimientos.



A través de los recursos de reconsideración, tanto los inversionistas como la sociedad civil pueden cuestionar las tarifas fijadas por los Organismos Reguladores en un procedimiento regulatorio.

Por tanto, el plazo de los Organismos Reguladores (Osinergmin, Sunass, Osiptel y Ositran) para resolver los recursos de reconsideración que formulen los interesados, en el marco de un debido procedimiento, debe permitir que los

administrados obtengan una decisión debidamente fundamentada en un plazo razonable.

Al respeto, corresponde señalar que el plazo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General para resolver los recursos de reconsideración en cualquier procedimiento era de treinta (30) días hábiles; sin embargo, mediante Ley N° 31603 se redujo a quince (15) días hábiles.

Si bien dicha modificación podría resultar razonable y proporcional para algunos procedimientos administrativos, no es el caso de los procedimientos de regulación de tarifas de servicios públicos.

Por tanto, dada la habilitación al Poder Ejecutivo para legislar en materia de fortalecimiento y calidad regulatoria en materia de inversión privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, correspondería disponer que el plazo para la resolución de los recursos de reconsideración en los procedimientos de regulación de tarifas sea de treinta (30) días hábiles.

Fundamento técnico de la propuesta normativa

La Ley 31603, modificó el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, reduciendo el plazo para resolver el recurso de reconsideración de 30 días hábiles a 15 días hábiles. Por lo que se requiere una disposición normativa de la misma jerarquía para poder modificarla.

El sustento de la Ley 31603 para considerar que 15 días hábiles resultaba un "plazo razonable" se analizó únicamente desde el punto de vista de la autoridad administrativa que resuelve; sin embargo, en en el caso de los procedimientos de regulación de tarifas se requiere cumplir con ciertas condiciones que aseguren que ésta se encuentre debidamente motivada, en aras de cautelar la protección del debido procedimiento y el interés público.

En efecto, la Ley 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, aplicable a todos los Organismos Reguladores de los servicios públicos, estipula que la función reguladora (fijación tarifaria) sea ejecutada con estricta sujeción a criterios técnicos, legales y económicos, y establecer los mecanismos que garanticen efectivamente la mayor transparencia en el proceso de fijación de tarifas reguladas, habida cuenta de su importancia e incidencia, tanto en las empresas prestadoras de servicios públicos, como en sus respectivos usuarios. Esto tiene el propósito de que el ejercicio de la función reguladora asegure una adecuada provisión de servicios públicos a los usuarios, sin que se afecte la sostenibilidad de las inversiones.

Es por esta razón que la Ley 27838 establece ciertas exigencias con relación a los recursos administrativos en los procedimientos tarifarios (los cuales por ser de instancia única, solo están sujetos a recurso de reconsideración), tales como: (i) publicación del recurso administrativo en la web institucional; (ii) convocatoria y realización de una audiencia pública para la participación de terceros que podrían verse afectados por la tarifa a aprobarse (usuarios, Asociaciones de Consumidores, etc.); y, (iv) recepción de comentarios de los interesados. Asimismo, los propios recurrentes y terceros pueden presentar alegaciones, solicitar el uso de la palabra o la realización de audiencias privadas.

Todas estas actividades se encuentran plenamente reguladas en cada uno de los procedimientos de fijación tarifaria, por lo que la reducción en el plazo de atención de los recursos de reconsideración de 30 días a 15 días, acorta significativamente los plazos para poder atender o ejecutar dichas actividades y realizar la evaluación correspondiente, poniendo en peligro la transparencia y efectividad del procedimiento de fijación tarifaria, lo cual pone en evidencia la necesidad y urgencia de la emisión del Decreto Legislativo que modifique el plazo para resolver los recursos de reconsideración en dichos procedimientos.

II.1.59 Modificar la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, orientada a la mejora de la gestión regulatoria.

El artículo 58 de la Constitución Política del Perú dispone que la iniciativa privada es libre, ejerciéndose en una economía social de mercado. En ese sentido, el Estado orienta el desarrollo del país, actuando principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

De conformidad con ello, constituye una política de Estado la "Afirmación de la economía social de mercado", la cual forma parte del Acuerdo Nacional y que prevé, entre otros que el Estado: "(a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el desarrollo de la infraestructura; (...)".

Asimismo, se tiene presente que las políticas nacionales son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.

En ese sentido, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada mediante Decreto Supremo Nro. 345-2018-EF tiene como objetivo general, la ***generación de bienestar para todos los peruanos sobre la base de un crecimiento económico sostenible con enfoque territorial.***

De igual forma, establece como su Objetivo Prioritario Nro. 6. "Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo por medio de la mejora de los instrumentos de desarrollo productivo y de asociatividad, la facilitación para la aplicación de estándares de calidad, la incorporación del análisis de impacto regulatorio en el GN, la simplificación administrativa y eliminación de barreras, entre otros.

Asimismo, la Ley Nro. 29158 establece en su artículo 4 que las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo (como los organismos reguladores) ejercen sus

competencias exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos a la política nacional y sectorial.

De otro lado, el Plan de Reactivación Económica "Unidos" (en adelante, el Plan Unidos), busca impulsar la recuperación de la economía a través del mayor impulso al financiamiento para proteger la cadena de pagos, el desarrollo de sectores económicos claves y la aceleración de la inversión privada mediante la simplificación de procesos, actualización de marcos normativos y parámetros en la legislación vigente en torno a las inversiones.

Sin embargo, para que ello sea posible y se contribuya a reactivar la economía y retomar la senda de crecimiento económico los próximos años, es necesario establecer medidas de articulación y coordinación entre los organismos reguladores, con el fin último de mejorar la gestión regulatoria en nuestro país. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la labor de estos entes se vuelve fundamental para garantizar un marco regulatorio orientado a promover el desarrollo económico sostenible.

En un contexto donde la inversión privada en los servicios públicos es crucial para el desarrollo económico y social, es imperativo contar con un marco regulatorio eficiente y coordinado que garantice la calidad, accesibilidad y sostenibilidad de estos servicios para todos los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la fragmentación y la falta de coordinación entre los diversos organismos reguladores pueden obstaculizar este objetivo fundamental.

Por lo tanto, se propone modificar la Ley No. 27332 con el objeto de establecer medidas de articulación, colaboración y coordinación entre los organismos reguladores, mediante los siguientes puntos clave:

1. Establecimiento de mecanismos de coordinación: Entre todos los organismos reguladores involucrados en la regulación de los servicios públicos para facilitar la comunicación, la cooperación y la armonización de las políticas regulatorias entre los distintos entes.
2. Definición de objetivos comunes: Se requerirá mecanismos para el desarrollo de un conjunto de objetivos comunes en materia de gestión regulatoria, que reflejen los principios de eficiencia, transparencia, participación ciudadana y protección de los derechos de los usuarios.
3. Intercambio de información y buenas prácticas: Se establecerá medidas de intercambio regular de información y mejores prácticas entre los organismos reguladores, con el fin de promover la adopción de enfoques regulatorios innovadores y efectivos.
4. Evaluación periódica de la gestión regulatoria: Se requerirá que los organismos reguladores realicen evaluaciones periódicas de su desempeño en términos de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión regulatoria, con el fin de identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la capacidad de los organismos reguladores para cumplir con su mandato de manera efectiva, garantizando al mismo tiempo un entorno regulatorio estable y predecible para los inversionistas y los usuarios de los servicios públicos.

En resumen, la modificación propuesta a la Ley No. 27332 busca promover una mayor coordinación y colaboración entre los organismos reguladores de los servicios públicos, con el fin de mejorar la gestión regulatoria y garantizar la provisión eficiente y equitativa de estos servicios en beneficio de todos los ciudadanos.

II.2. En materia de mejora la calidad de la inversión pública

II.2.1 Fortalecer el diseño del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para garantizar su finalidad y asegurar mejores niveles de calidad en la inversión pública.

La DGPMI, en el marco de sus competencias, considera oportuno que se aprueben algunas modificaciones al marco normativo del FIDT; es decir, al Decreto Legislativo 1435, a fin de asegurar su eficiencia y sobre todo garantizar que la inversión pública que se impulsa con el fondo sea de calidad, toda vez que las mismas se encuentran alineadas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en cuya normativa también se vienen realizando mejoras para una mejor gestión de las inversiones con enfoque en dirección de proyectos.

Asimismo, si bien se ha venido ejecutando el mencionado fondo con eficiencia, el mismo no alcanza el 100% de ejecución y cada año se presenta una alta demanda de acceso a recursos del fondo. En ese sentido, se considera necesario flexibilizar la normativa de dicho fondo, a partir de modificar los criterios de asignación, así como fortalecer el rol del Consejo Directivo y dotar de mayores herramientas a la Secretaría Técnica del FIDT. La medida normativa propuesta tiene un impacto en los 25 gobiernos regionales y más de 1900 gobiernos locales, quienes son los destinatarios del fondo. Asimismo, el promedio anual de recursos económicos sometidos a concurso es de 500 millones de soles.

De esta manera, se busca modificar diversos del Decreto Legislativo 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del FIDT, en dos ámbitos concretos: El primer ámbito busca flexibilizar el financiamiento de proyectos de inversión y estudios que impacten directamente al desarrollo de los territorios, para lo cual se debe precisar el destino de los fondos y mejorar los criterios de asignación, así como realizar precisiones en las obligaciones de los gobiernos regionales y locales. El segundo ámbito, busca que el Consejo Directivo cuenta con mayores herramientas para participar en el proceso de selección y no sólo aprobar listas y, a su vez, la Secretaría Técnica pueda no sólo brindar asistencia técnica sino acompañar el proceso de ejecución, y desarrollar acciones que aseguren la calidad de las propuestas (coordinación con sectores y órgano rector del sistema de inversión pública, entre otras)

En ese sentido, la propuesta normativa que se considera incorporar en la solicitud de delegación de facultades que realizaría el Poder Ejecutivo al Congreso de la República busca principalmente fortalecer el diseño del FIDT

para garantizar su eficiencia y sobre todo asegurar calidad de inversión pública a favor de la población más vulnerable en diversos temas que se detallarán a continuación.

a) Artículo 6: Destino de los recursos del FIDT:

Con relación a la determinación de los servicios públicos objeto de priorización, se propone la posibilidad de que el Consejo Directivo, de manera previa a cada concurso público, previo informe técnico justificatorio de la Secretaría Técnica, pueda participar en la priorización de los mismos. Del análisis del histórico de los concursos realizados por el FIDT, es sabido que los concursos incorporan escenarios actualizados o circunstancias que se atraviesan en el momento de convocarlos, dado que en los últimos años los gobiernos descentralizados se han visto expuestos, desde la pandemia del COVID 19, las crisis políticas hasta los fenómenos climatológicos por los cuales atravesó el pais, dejado territorios muy afectados, que tras los bajos recursos transferidos vienen recuperándose de manera aletargadas, a diferencia de otros, lo que hace que se presente muchos escenarios de realidad y ello amerita la toma de decisiones para poder cumplir con los fines del Fondo, así en un escenario fortuito, el dotarle de la decisión al Consejo Directivo para determinar los servicios públicos objeto de priorización, bajo un sustento motivado, resultaría beneficioso para el cumplimiento de la finalidad del Fondo.

b) Artículo 7.- Criterios de asignación de los recursos del FIDT

Se hace mención al termino "Regiones", las que deben ser definidas y/o corregidas en virtud de que, el estado peruano actualmente se organiza políticamente por departamentos, los cuales están dotados de Gobiernos Regionales encargados de la administración superior a través de sus instituciones públicas. Asimismo, se evalúa la posibilidad de que se incorpore AL FIDT medias sobre Articulación para el Desarrollo que son estrategias de desarrollo territorial.

c) Artículo 9.- Obligaciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales:

Al respecto, si bien el texto vigente del Decreto Legislativo N° 1435 establece que el Gobierno Regional o Gobierno Local que resulte beneficiario del financiamiento o cofinanciamiento a través del FIDT es responsable de culmina dentro de los plazos establecidos en los respectivos convenios las inversiones y estudios de preinversión, incluyendo los estudios de perfil y las fichas técnicas, materia del financiamiento o cofinanciamiento, así como de priorizar durante la fase de programación y formulación presupuestaria los recursos necesarios para cumplir los compromisos que hubieran asumido en el convenio de cofinanciamiento suscrito, respecto a los gastos que le corresponda financiar, es importante establecer mayores candados con la finalidad de que las citadas entidades cumplan con sus obligaciones establecidas en los convenios, lo cual permitirá que los activos generado con la ejecución de las inversiones puedan empezar a prestar los servicios de

una manera más célere y por ende de manera oportuna en beneficio de la población.

d) Artículo 11.- Funciones del Consejo Directivo:

Dado que la propuesta considera que, los servicios públicos objeto de priorización sean determinados por el Consejo Directivo, de manera previa a cada concurso público, previo informe técnico justificatorio de la Secretaría Técnica, correspondería que dicha prerrogativa sea considerada dentro de las funciones del Consejo Directivo, ello con el fin de habilitar a que las decisiones consideren un marco normativo explicito. Por otro lado, respecto a las metodologías de evaluación, corresponde que sean puestas en consideración del Consejo Directivo dado que va de la mano con la aprobación de los servicios públicos objeto de priorización, en ese sentido la aprobación de ambos es función del Consejo Directivo.

La aprobación de modificaciones al marco normativo que regula el diseño del FIDT, obedece a los diferentes contextos por los cuales atraviesa el país, lo cual amerita una decisión oportuna, sobre todo si lo que se busca es el desarrollo territorial y el cierre de brechas a través del FIDT.

e) Artículo 12.- Funciones de la Secretaría Técnica:

En vista que la secretaría técnica desarrolla los actos preparatorios para el desarrollo de los concursos del FIDT y otros, corresponde enmarcar dentro de sus funciones la fundamentación que sustente la priorización de los servicios públicos. Así como la metodología de evaluación, a fin de que los miembros del Consejo Directivo en el marco de sus funciones procedan con su evaluación y correspondiente aprobación.

Asimismo, asegurar el cumplimiento de la finalidad del Fondo, amerita no solo realizar el correcto desarrollo de los concursos de selección de propuestas, sino asegurar que el cumplimiento de los convenios suscritos sea realizado mediante el acompañamiento a los gobiernos descentralizados, de manera permanente. La coordinación intersectorial es un proceso que contribuye a desarrollo de los territorios dado que los sectores son los responsables de articular las políticas a su cargo, por lo tanto, son quienes contribuirán con aportes para el cumplimiento de los fines del FIDT.

Finalmente, se debe precisar que si bien se realizan precisiones sobre modificaciones de artículos del Decreto Legislativo N° 1435, ello puede generar que como consecuencia de dichas modificaciones también corresponda que se realicen cambios en otros artículos con la finalidad de que exista concordancia normativa, en ese sentido, las medidas propuestas no deben ser consideradas como limitativas para los fines del FIDT.

II.2.2 Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Principales medidas a implementar

Establecer disposiciones a fin de que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 (6 de diciembre 2023), y que no hayan contado con registro del Formato Único de Reconstrucción (FUR) aprobado en el Banco de Inversiones del SNPMGI, cumplan con las fases del Ciclo de Inversión del referido Sistema Nacional. Ello resulta necesario para asegurar el cumplimiento de la calidad de las inversiones, desde la programación de estas, su formulación y evaluación y la ejecución correspondiente, asegurando que las inversiones cumplan con las disposiciones normativas, metodologías y técnicas aprobadas por el DGPMI y los sectores funcionalmente competentes. En ese sentido, mediante la implementación de la presente propuesta, las IRI que no cuenten con registro FUR aprobado en el Banco de Inversiones, a la fecha de aprobación de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, deberán cumplir con las disposiciones del marco normativo del SNPMGI, con la finalidad de promover la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura, asegurando su calidad.

Fundamento técnico del proyecto normativo

Mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 29 de abril del 2017, la cual se encontró adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y tuvo carácter excepcional y temporal, asimismo estuvo encargada de liderar, implementar y, cuando corresponda, ejecutar el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), conformado entre otros, por intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI), las cuales no constituían proyectos de inversión y no les resultaba aplicable las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPGMI), aprobándose con el solo registro del Formato Único de Reconstrucción (FUR) en el Banco de Inversiones. Es decir, a las IRI no le era aplicable en estricto el SNPMGI, sólo su registro (alojamiento) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones para efectos de gestión.

En este sentido, resulta necesario que se establezcan medidas para que las IRI que estuvieron comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 (6 de diciembre 2023), y que no hayan contado con registro FUR aprobado en el Banco de Inversiones del SNPMGI, cumplan con las fases del Ciclo de Inversión del referido Sistema Nacional, toda vez que la emisión de la Ley N° 30556 fue una medida excepcional para la atención de la infraestructura pública afectada por las ocurrencias del Fenómeno del Niño. Siendo que, transcurrido más de siete (7) años de la excepcionalidad, corresponde que estas intervenciones apliquen las fases del Ciclo de Inversión en el marco del SNPMGI, con la finalidad de velar por la calidad de la prestación del servicio público.

Con el objeto de asegurar la calidad de la inversión pública, resulta necesario la aprobación de una propuesta normativa con rango de ley que establezca disposiciones para que las IRI que no cuenten con registro FUR aprobado en el

Banco de Inversiones, a la fecha de aprobación de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 cumplan con el marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

II.2.3 Ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.

Principales medidas a implementar

a) Ampliar el plazo de las disposiciones especiales sobre licencias de habilitación urbana o de edificación hasta el 31 de diciembre de 2026, referida al inicio de la ejecución de las obras de titularidad de las entidades de los tres niveles de gobierno con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación, debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental de las Municipalidades. Dicha disposición se encuentra vigente en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1553 el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

d) Ampliar el plazo de las disposiciones sobre elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública, hasta el 31 de diciembre 2026, referida a la elaboración del Estudio Ambiental, Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) o su modificación, sobre la base de la información aprobada del expediente técnico parcial de obra o los estudios de ingeniería aprobados por tramos, etapas, componentes o sectores de obra (PI ejecutados por fast track). Dicha disposición se encuentra vigente en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1553 el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

e) Ampliar el plazo para la elaboración y aprobación de las Metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de agosto de 2025. Dicha disposición se encuentra vigente en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1553 el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Fundamento técnico del proyecto normativo

a) Ampliación de plazo de las disposiciones especiales sobre licencias de habilitación urbana o de edificación (artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1553):

El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1553 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2024), establece lo siguiente:

> *"Artículo 3.- Disposiciones especiales sobre licencias de habilitación urbana o de edificación 3.1 Autorizar, hasta el 31 de diciembre de 2024, a las entidades de los tres niveles de gobierno para que puedan iniciar la ejecución de las obras que formen parte de una inversión en el marco del SNPMGI, con el cargo de recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación, debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental o la que haga sus veces, en la*

Modalidad A, de aprobación automática con firma de profesionales, para los supuestos establecidos en el literal h) del numeral 1 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- VIVIENDA; sin perjuicio, que la municipalidad cumpla con lo establecido en el literal b) del numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. 3.2 Las disposiciones antes señaladas no aplican para las obras de edificación y habilitación urbana en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura."

Esta propuesta generará beneficios orientados a contribuir con el bienestar de la población beneficiaria de la ejecución de las inversiones que se ejecuten en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Al respecto, según la información registrada en el aplicativo informático del Banco de Inversiones se han identificado que **1,358 proyectos de inversión a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local que cuentan con PIM 2024, por un monto de 1,520 millones de soles y con un monto de inversión actualizado total de 8,348 millones de soles**, que a la fecha no han iniciado ejecución física de sus inversiones contando con expediente técnico, lo cual evidencia que podría existir una problemática recurrente en esta etapa, entre otros, debido al exceso de trámites que se deben cumplir de manera previa al inicio de la ejecución.

Cuadro N° 1: Cantidad de inversiones con PIM 2024 en los tres niveles de gobierno que no han iniciado aún ejecución física de sus inversiones contando con expediente técnico

Nivel de Gobierno	Cantidad de proyectos	Costo Actualizado (Millones en S/)
GN	35	1,305
GR	50	993
GL	1273	6,050
Total	1,358	8,348

Fuente: Banco de Inversiones. Consulta al 31.03.2024
Nota: Para el cálculo se ha considerado a los proyectos de inversión de la naturaleza de creación que a la fecha presentan un avance acumulado de su ejecución financiera (respecto al costo actualizado) menor al 5%, en la medida que se estima que dicho porcentaje está vinculado a la elaboración de expediente técnico o documento equivalente.

Finalmente, de acuerdo con la información reportada a la DGPMI, por las entidades de los tres niveles de gobierno, a la fecha, se han acogido a la medida tanto por los Decretos Legislativos N° 1538 y el N° 1553, ciento cinco (105) proyectos de inversión ascendente a S/ 1273 millones. En ese sentido, resulta necesario que se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, con la finalidad que las entidades sigan usando la medida para la ejecución de sus inversiones contenido en el acon la medida propuesta las entidades de los tres niveles de gobierno podrán iniciar las obras con la recepción del expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación, debidamente firmado y sellado por la unidad de recepción documental de las Municipalidades.

b) Ampliación de plazo de las disposiciones sobre elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública (artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1553):

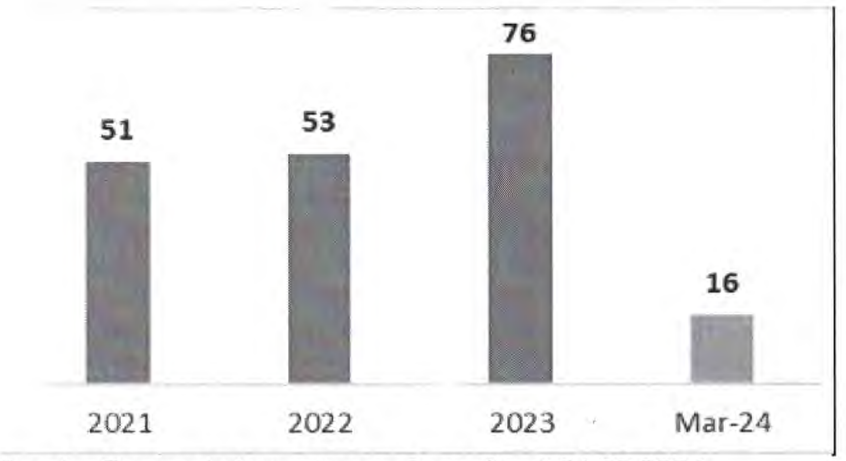
El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1553 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2024), establece lo siguiente

> "Artículo 4.- Elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública Facultar, hasta el 31 de diciembre de 2024, a las entidades del gobierno nacional que opten por iniciar la ejecución física de sus proyectos de inversión en el marco del SNPMGI de manera paralela a la elaboración parcial de sus expedientes técnicos o a nivel de ingeniería básica aprobados por tramos, etapas, componentes o sectores de obra, de naturaleza funcionalmente independiente, a lo siguiente: a)

El titular del proyecto de inversión debe obtener, según corresponda, la certificación ambiental o la aprobación del instrumento de gestión ambiental o su modificación de manera previa a la ejecución de cada tramo, etapa, componente o sectores de obra, de acuerdo con lo previsto en los principios y disposiciones establecidas en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en la normativa ambiental sectorial vigente, que regulan las consideraciones para la aplicación del principio de indivisibilidad en estos casos. Las autoridades ambientales sectoriales están facultadas a aprobar o modificar mediante Decreto Supremo sus normas, para la aplicación de dicho principio. b) El titular del proyecto de inversión debe presentar, para la elaboración de los estudios ambientales o instrumento de gestión ambiental o su modificación, información como mínimo a nivel de ingeniería básica."

La medida beneficia a todas las inversiones del gobierno Nacional que se ejecutan bajo la opción de "fast track": proyectos que se ejecutan bajo este mecanismo, permiten que el diseño de la obra (expediente técnico) y la ejecución física de la misma se realicen de manera paralela.

Gráfico N° 01. Inversiones antes y después del Decreto Legislativo N° 1553 (Números)



Fuente: Banco de Inversiones. Consulta al 31.03.2024

Al 2023, más del 32% de las inversiones obtienen estudios ambientales, ejecutando bajo fast track. Mediante el Decreto Legislativo N° 1553 se dieron facilidades para la obtención del estudio de impacto ambiental para los proyectos que se ejecuten fast track (vigente hasta el 31.12.2024)

Antes de entrar en vigor, se tenía un promedio de 53 inversiones por año bajo fast track, al aprobarse la norma se han ejecutado hasta el cierre del año 2023, un total de 76 inversiones (S/ 165 millones de los cuales queda un saldo de 48 millones), y en lo que va del año 2024, a marzo, aplicaron fast track 16 inversiones (S/31 millones de los cuales queda un saldo de 2 millones) proyectando llegar al cierre del año a un total de 80 inversiones. En ese sentido, resulta necesario que se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, con la finalidad que las entidades puedan seguir usando la medida y de este modo la prestación de los servicios se realice con mayor oportunidad.

c) Ampliación de plazo para la elaboración y aprobación de las Metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1553):

El artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1553 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2024), establece lo siguiente:

> "Artículo 5.- Metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Autorizar, hasta el 31 de diciembre de 2024, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), a elaborar y aprobar metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del SNPMGI, previo acuerdo con las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de los Sectores. Para su aprobación deberá contar con la opinión favorable de la OPMI de los Sectores involucrados."

Con la disponibilidad de las metodologías específicas, cuya elaboración se encuentra a cargo de la DGPMI por autorización expresa, las mismas que se encuentran asociadas a las tipologías que tienen mayor impacto en el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios, se busca que los operadores de las Unidades Formuladoras puedan incrementar la calidad de las viabilidades, de manera que las estimaciones de costos, plazos y metas físicas sean más realistas de acuerdo a la complejidad de los proyectos de inversión. En esa línea, los documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión contienen información técnica y económica respecto del proyecto de inversión, con la finalidad de permitir el análisis técnico y económico respecto de estos. En función a ello, la Unidad Formuladora decide si la ejecución del proyecto de inversión está justificada con el bienestar que aporta a la sociedad, y por tanto determina la viabilidad del proyecto en el marco de la citada normativa del Sistema Nacional. Como mínimo se elaborarán once (11) metodologías específicas en las tipologías: establecimientos de salud (todos los niveles de atención), sistema integrado de transporte, seguridad ciudadana, comisarías, museos, drenaje pluvial, distribución de energía eléctrica, infraestructura de riego, centros de desarrollo integral de la familia, mercado de abastos, y de ciencia y tecnología. En ese sentido, toda vez que la elaboración y aprobación de las referidas metodologías específicas conllevan coordinaciones permanentes con los sectores, resulta necesario que se amplíe el plazo hasta el 31 de agosto de 2025.

II.2.4 Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.

Principales medidas a implementar

a) Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública: La definición e implementación de los Lineamientos de una Política Nacional de Inversión Pública, constituye el marco orientador para el desarrollo de una visión estratégica de mediano y largo plazo para las inversiones del país.
b) Modificaciones en el Ciclo de Inversión: Para una mayor agilidad y eficiencia en la ejecución de las inversiones, se propone que las entidades primero formulen y viabilicen sus inversiones en base a las brechas prioritarias y posterior a ello se efectúa la programación de estas.
c) Inclusión de Órganos al SNPMGI: En el marco de la implementación de las buenas prácticas de dirección de proyectos en inversión pública, se incluirá a las Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP) como un órgano del SNPMGI.

Fundamento técnico del proyecto normativo

Actualmente, en el ámbito de la inversión pública, se carece de Lineamientos de Política Nacional que permita orientar estratégicamente a las entidades, para el desarrollo de sus inversiones, considerando las políticas sectoriales, los documentos de planificación estratégica de los gobiernos subnacionales y las competencias correspondientes de los tres niveles de gobierno; lo que ha generado que no exista una real consistencia en la priorización y optimización en el uso de los recursos públicos. El contar con Lineamientos de Política de Inversión Pública, constituye el marco orientador para el desarrollo de una visión estratégica de mediano y largo plazo sobre la atención y desarrollo de inversiones, además contar con lineamientos de Política de Inversión Pública, supone definir instrumentos de medición de la gestión de la inversión pública; permitiendo una mejorar alineación y coordinación entre entidades de los tres niveles de gobierno para los procesos nacionales de planificación a través de la priorización de brechas de infraestructura y acceso a servicios en los territorios y con ello, mejorar en la orientación de las inversiones y eficiencia del gasto público en inversiones.

Asimismo, las evaluaciones de la calidad de las inversiones evidencian que se necesitan realizar mejoras y/o modificaciones en el Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), ya que se ha venido programando inversiones que no necesariamente logran ser declaradas viables y estar orientadas al cierre de brechas prioritarias para el país, dotando en algunos casos de recursos a estas inversiones que no resultaban necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. Iniciar con la fase de Formulación y Evaluación, permitirá dimensionar de manera más clara la atención de los problemas que se necesitar atender en el país, para que luego de ello sean programados. Esta medida permite dotar a la inversión pública de una mejora agilidad y eficiencia en su ejecución; lo cual estará acompañado de un enfoque de modernización y digitalización de la gestión de la inversión pública a través de la Plataforma de Expediente Digital de la Inversión Pública (PED). Por otro lado, la falta de dinamismo en la reducción de la brecha de infraestructura se debe a varios factores, entre ellos la débil capacidad de ejecución por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno, lo cual es una limitación que impacta directamente sobre la brecha de infraestructura en los tres niveles de gobierno. Dentro de la regulación técnico normativa del Ciclo de Inversión resulta necesario que se considere la inclusión de buenas prácticas en dirección de proyectos, mediante la incorporación de las Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP), conforme a las disposiciones que

establezca el ente rector de inversión pública, las EGP deberán interactuar con los otros órganos (Órgano Resolutivo - OR, Unidad Formuladora - UF, Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI) del SNPMGI. En ese sentido, corresponderá la modificación de algunas funciones de dichos órganos con la finalidad de lograr una gobernanza eficiente y colaborativa. Dicha implementación se realizará de manera obligatoria y progresiva para las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales; pudiendo también abarcar gobiernos locales representativos, conforme a las disposiciones que establezca el ente rector del SNPMGI. Con el objeto de orientar estratégicamente las inversiones públicas y fortalecer la capacidad de ejecución en las entidades, resulta necesario la aprobación de una propuesta normativa con rango de ley que modifique las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, vinculadas a la planificación de las inversiones, modernización, digitalización de la gestión de la inversión pública y mayor agilidad en las fases del Ciclo de Inversión y Órganos del SNPMGI. En ese sentido, resulta urgente que se modifique el citado Decreto Legislativo para mejorar la calidad de la inversión pública.

II.2.5 Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de optimizar sus disposiciones y facultar a las entidades a utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas

Del "Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023", remitido por la Contraloría General de la República al MEF, se obtiene que al 31 de diciembre de 2023 existen 2 298 obras públicas paralizadas, de las cuales 949 son ejecutadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y 1270 bajo la modalidad de administración directa, haciendo un total de 2 219; cuyo saldo de ejecución asciende, aproximadamente, a S/ 9 776,1 millones.

Del mismo reporte, se aprecia que, de las 2 219 obras paralizadas, 1 848 cuentan con un avance físico mayor o igual al 20%; es decir, podrían encontrarse dentro del marco de aplicación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1584.

Asimismo, de la información remitida por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas, al 18 de marzo de 2024, se ha identificado que solo 595 obras paralizadas han sido incluidas en los inventarios registrados por la Entidades en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, de las cuales solo 136 obras paralizadas cuentan con Resolución que aprueba la lista priorizada.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1436, el Proceso de Gestión de Recursos Públicos tiene por finalidad apoyar la gestión de las actividades económicas del Sector Público con los principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal, desarrollando la Gestión de Adquisiciones que permite la obtención de bienes, servicios y obras para el

desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas de provisión de servicios y logro de resultados de las entidades, siendo su ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento.

En el marco de lo señalado en los párrafos precedentes y con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de la inversión pública, se hace necesario emitir, con carácter expeditivo, una norma con rango de ley, que permitan a las Entidades a realizar contrataciones oportunas para reactivar obras paralizadas.

En ese sentido, la solicitud de delegación de facultades desde el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento tiene por objeto modificar la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de facultar a las Entidades a utilizar un procedimiento especial de selección, con plazos reducidos, para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas, así como optimizar sus disposiciones, a fin de incentivar el incremento en su aplicación por parte de las Entidades, favoreciendo la conclusión de las obras y finalmente brindar el servicio público a su cargo.

II.2.6 Modificar el artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la Gestión del Riesgo de Desastres.

El actual texto del artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, restringe la participación de las Fuerzas Armadas únicamente en lo referente a los procesos de la preparación y respuesta, por lo que no se cuenta con un marco legal para el empleo de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas en los otros procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que limita una adecuada acción de las capacidades del Estado para afrontar situaciones de emergencia.

Con la participación de las Fuerzas Armadas e instituciones científicas del Sector Defensa en todos los procesos que forman parte de la Gestión del Riesgo de Desastres se espera optimizar el empleo de las capacidades del Estado para afrontar situaciones de emergencia, contribuyendo a mejorar la calidad de la inversión pública de los proyectos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sectores del Poder Ejecutivo en el marco de la GRD.

La promulgación de la norma no incurrirá en demanda de recursos adicionales al Tesoro Público, puesto que las intervenciones de las Fuerzas Armadas se financiarán con cargo al presupuesto destinado a la Gestión del riesgo de Desastres de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sectores del Poder Ejecutivo que requieran la participación de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa.



II.2.7 Modificar el Decreto Legislativo N° 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación Marginal, rehabilitación y reposición en el

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Justificación

Es importante establecer que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la responsabilidad del Programa Presupuestal orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT) y gestiona la Estrategia de Gestión Territorial "Primero La Infancia", el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Premio Nacional Sello Municipal, entre otros; además de ejercer la Secretaría Técnica de la CIAS, que en el presente año aprobó los "Resultados priorizados de la Política Social e Indicadores Emblemáticos al 2030"; políticas e instrumentos que promueven el logro de los resultados del desarrollo infantil temprano, a fin de cerrar las brechas de desigualdad y exclusión social, y la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Por lo tanto, la propuesta de modificar el Decreto Legislativo N° 1274 para facultar al FONCODES a desarrollar acciones orientadas a mejorar los sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales, no solo responde a un imperativo de salud pública, sino que también representa una oportunidad para mejorar la calidad de la inversión pública del país. Estas medidas no solo mejorarán las condiciones de vida de la población, sino que también contribuirán al desarrollo sostenible y a la construcción de un futuro más próspero para todos los peruanos.

Identificación del problema público

En el año 2015 el Perú, como miembro de la ONU, adopta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos con miras al 2030, siendo el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. La importancia radica en la relación directa que existe entre un adecuado sistema de saneamiento y la salud; ya que según la OMS 2019, en países en vías de desarrollo se producen cerca de 842 000 fallecimientos anuales por la ausencia de agua salubre e higiene deficiente, incluyendo 361 000 fallecimientos de niños menores de 5 años.

La relación entre un sistema de saneamiento adecuado y la salud pública es innegable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre las graves consecuencias de la falta de acceso a agua segura e higiene deficiente, especialmente en países en vías de desarrollo, donde se registra un alto número de muertes anuales, incluyendo una cantidad alarmante de niños menores de 5 años. Además, en el contexto de pandemias como la COVID-19, la importancia de garantizar condiciones seguras de agua y saneamiento se vuelve aún más crítica, siendo una medida preventiva vital para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

Análisis de la necesidad de la propuesta

En este sentido, mejorar y ampliar los servicios de agua y saneamiento no sólo protege la salud de la población y en especial de los menores de 5 años para reducir la anemia, sino que también genera un impacto positivo en la economía local y sobretodo rural. Cabe señalar que en este tipo de intervenciones la

economía nacional también se reactiva ya que es proveedora de insumos que se utilizan en los ámbitos rurales alejados. La inversión en infraestructura de saneamiento crea empleo y oportunidades económicas, tanto en la construcción como en la operación y mantenimiento a largo plazo. Además, al mejorar las condiciones de vida de la población, se estimula el desarrollo de comunidades rurales de formas más saludables y productivas, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico y reduce las desigualdades sociales.

II.2.8 Se autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles

Justificación de la medida

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), mediante la Ley N° 31841, ha sido creada como una entidad especializada en la formulación y ejecución de inversiones de alta complejidad, con eficiencia y calidad, así como cuenta con el expertis en el uso de herramientas que facilitan la gestión de las inversiones.

Se autorizaría a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles:

- Las entidades ubicadas en el ámbito de influencia del Hub portuario identifican inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) en coordinación con la ANIN.
- Que formulen y evalúen, así como ejecuten las inversiones antes identificadas.
- Que coordinen la asignación de las inversiones a la ANIN con las entidades competentes.

Fundamento técnico del proyecto normativo

El Hub Portuario constituye una pieza clave de oportunidad para el desarrollo comercial del país, como parte de la cadena de abastecimiento que facilite y dinamice el comercio exterior y los mercados internos de todas las regiones del Perú, es decir será una plataforma exportadora y de desarrollo para América Latina. En este sentido, resulta necesario establecer acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo que involucre el desarrollo de inversiones públicas en el corredor logístico y económico. El ámbito del Hub Portuario involucraría inicialmente, las inversiones de los Gobiernos Regionales de Lima y Callao y los Gobiernos Locales de Ancón, Huaral, Huaura, Barranca y Chancay.

II.3. En materia de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado

II.3.1 Modificar el Decreto Legislativo N° 206 y el Decreto Ley N° 25694, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.

La propuesta normativa permitirá potenciar la actividad de COFIDE como banco de desarrollo, fortaleciéndolo patrimonialmente, mediante el acceso a nuevos recursos de capital, para mejorar su capacidad operativa y su impacto en el cierre de brechas para el desarrollo.

La participación de nuevos accionistas minoritarios permitirá implementar en COFIDE mejores prácticas, alineadas a las de sus nuevos accionistas (organismos multilaterales, instituciones financieras de reconocido prestigio), permitiendo reforzar la gestión y las operaciones de COFIDE, generar transferencias de conocimiento y el incremento de capacidades internas, a nivel profesional y técnico.

En cuanto a la mejora del gobierno corporativo, permitirá fortalecer las funciones del Directorio y las del presidente del Directorio, establecer mecanismos de participación para los accionistas minoritarios en la gobernanza de COFIDE asegurando la participación de los directores en los comités de dirección de COFIDE, con la finalidad de optimizar la toma de decisiones estratégicas, la gestión corporativa y la evaluación de oportunidades de negocio, su seguimiento y reporte.

II.3.2 Aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitoreo estratégico, alinear la regulación a las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, así como ordenar y sistematizar las normas de la actividad empresarial del Estado.

Se ha identificado los siguientes problemas en la actividad empresarial del Estado:

a) Existe dispersión de la normativa en la actividad empresarial del Estado, FONAFE incluido.
b) La normativa actual no se encuentra necesariamente alineada a las buenas prácticas de desempeño empresarial y gobernanza corporativa de la OCDE.
c) No existe una unidad centralizada de todas las empresas del Estado.
d) Existe una descontrolada actividad empresarial del Estado, que en algunos casos presentan problemas financieros y de gobernanza.
e) No existen evaluaciones periódicas (anuales) respecto del cumplimiento del rol subsidiario del Estado en la economía.
f) El marco legal vigente no permite que FONAFE tenga un rol activo al momento de monitorear a las empresas.
g) Existe superposición de normas y de actores en cuanto al rol de FONAFE sobre ESSALUD.
h) La actual estructura y organización del FONAFE no permite realizar un trabajo de las dimensiones que demanda la Constitución Política del Perú, respecto de la aplicación del rol subsidiario del Estado en la economía.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone:

1. Crear el sistema funcional de la actividad empresarial del Estado, siendo FONAFE el órgano rector de dicho sistema.

2. Fortalecer las capacidades legales y operativas del FONAFE a fin de que pueda cumplir su rol a cabalidad, incorporando un enfoque de resultados. Para tal efecto, se debe aprobar una nueva estructura y organización que le permita darle mayor dinamismo y celeridad a la toma de decisiones.

3. Unificar y sistematizar el marco legal que regula la actividad empresarial del Estado, precisando funciones que tengan por finalidad garantizar la vigencia del rol subsidiario del Estado, evaluando periódicamente su cumplimiento, así como supervisar la prestación eficiente de los servicios públicos con alto nivel de calidad.

Con estas medidas se permitirá mejorar la eficiencia de las empresas públicas, a través de una supervisión y monitoreo estratégico, que permitirán al Estado focalizar los esfuerzos para fortalecer aquellos aspectos que tienen impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la gestión financiera del Estado.

Asimismo, las medidas propuestas permitirán alinear la regulación a las buenas prácticas y principios de gobernanza corporativa de la OCDE, mejorando de esta manera la calidad regulatoria de la actividad empresarial del Estado.

Finalmente, las medidas propuestas permitirán el ordenamiento y sistematización normativos, permitiendo un mejor y concordado conocimiento de la normativa sobre la materia.

La propuesta no demandará la asignación de recursos adicionales con cargo al Tesoro Público.

II.4. En materia de reducción de costos de transacción

II.4.1 Establecer medidas para facilitar la suscripción de los contratos en materia de contratación pública.

A fin de contribuir con la reactivación económica resulta urgente dotar de mecanismos ágiles a los proveedores que les permita contrarrestar la falta de liquidez o línea de crédito, producto de la recesión de los últimos meses.

Dicho contexto evidencia la necesidad de que la presente propuesta normativa sea aprobada a través de un Decreto Legislativo, dado que constituiría el escenario adecuado para el manejo técnico especializado de la propuesta a instancia del Poder Ejecutivo.

II.4.2 Modificar el literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad.

La justificación de la medida se centra en mejorar la eficiencia en las gestiones para aprobar compras corporativas obligatorias.

Así, la medida busca agilizar el proceso de aprobación de compras corporativas obligatorias, reduciendo los tiempos asociados al proceso de aprobación.

Al respecto, el artículo 125 de la Constitución Política del Perú y el artículo 16 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, definen las atribuciones del Consejo de Ministros, sin que alguna de las mismas está asociada a una definición de objetos de alguna modalidad de contratación estatal, por lo que la medida propuesta resulta congruente con dichas disposiciones.

II.4.3 Modificar el artículo 2014 del Código Civil, a efectos de brindar protección al tercero registral que contrata confiando en la información publicitada en los asientos registrales.

La modificación propugnada por la propuesta, tiene por objeto evitar los efectos perniciosos en la contratación generados por el texto vigente del artículo 2014 del CC, que con la modificación efectuada por la Ley 30313 al texto primigenio de dicho artículo, extiende los efectos materiales de la publicidad al contenido de los títulos archivados, debilitando la protección que brinda el Registro al tercero registral, pues, actualmente, para que este sea protegido frente a una eventual anulación, resolución o rescisión del título de su transferente, es imprescindible que la causa de tal invalidez o ineficacia no conste ni en los asientos registrales ni en los títulos archivados que lo sustentan; es decir, actualmente, los efectos materiales de la publicidad se extienden inclusive al contenido de los títulos archivados.

En ese sentido, la modificación propugnada pretende delimitar dichos efectos solo al contenido de los asientos registrales, de manera que, en caso la propuesta prospere, quienes pretendan adquirir algún derecho sobre un bien inmueble o mueble registrado, para que su derecho una vez inscrito en el Registro se mantenga y esté protegido por los alcances de la fe pública registral, solo verificarán los asientos registrales de la partida registral en la que se encuentra inscrito el bien y de los del Registro Personal o del Registro de Mandatos y Poderes, en su caso, ahorrándose los gastos en tiempo y dinero que implica el estudio y evaluación jurídica de los títulos archivados que dieron mérito a la inscripción del derecho de su transferente y la de los anteriores a él, simplificando el proceso de contratación, reduciendo costos de transacción, recuperando la coherencia del sistema registral y fortaleciendo la fe pública registral. En efecto, uno de los efectos materiales de la inscripción en un registro de derechos es la fe pública registral, regulada en el citado artículo 2014, en virtud de la cual quienes adquieren derechos a título oneroso sobre un bien, por ejemplo, compran un inmueble de quienes aparecen en el Registro como propietarios del bien; una vez inscrito su derecho mantienen su adquisición, aunque resulte que los vendedores no eran realmente los dueños, ello, siempre que el vicio del título de tales vendedores no conste en el Registro. A tales adquirentes protegidos por el Registro se les denomina tercero registral. La consagración de la fe pública registral permite al adquirente que reúne las exigencias previstas normativamente para ser protegido, contratar con la seguridad de mantener su adquisición, incluso si el derecho de su transferente estuviere viciado por alguna causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, si tales causas no constan en el Registro. La propuesta planteada, al limitar los efectos materiales de la publicidad al contenido de los asientos registrales, además, restablece la coherencia en la regulación de la publicidad

material y sus efectos oponibilidad y legitimación en nuestro ordenamiento jurídico, que antes de la modificación incorporada por la Ley 30313 estaban claramente referidos al asiento registral en el cual consta el derecho inscrito. En efecto, el artículo 2012° del Código Civil que regula la publicidad material establece la presunción iure et de iure que todos conocen el contenido de las inscripciones; y, en concordancia con ésta, el segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, que regula la oponibilidad prescribe: "El contenido de las partidas registrales afecta a los terceros aun cuando éstos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo".

II.4.4 Modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional.

Se propone la modificación de los artículos 2033 (Registro Personal), 2037 (Registro de Mandatos y Poderes), 2040 (Registro de Testamentos) y 2042 (Registro de Sucesiones Intestadas); los cuales regulan ante qué oficina registral el administrado presentará el título y, en esa línea, a los terceros conocer donde podrán acceder a la publicidad registral, considerando que no hay un registro único nacional sino distribuido entre las distintas oficinas registrales del país.

El objeto de la reforma es establecer una regla uniforme sobre el lugar en el cual se extiende las inscripciones en los citados registros a fin de evitar sobrecostos al administrado por la obtención de varias copias de un mismo instrumento notarial, pagos de tasas por la inscripción y, en el caso de la Sunarp, producir duplicidades "legales" inscribiendo la misma información en las distintas oficinas registrales.

Esta se sustenta en la interconexión de la información de las partidas registrales entre oficinas que ya es una realidad. Hoy, el ciudadano puede acceder a la publicidad registral, por ejemplo, a certificados literales de partidas registrales procedentes de cualquier lugar del país, no solo acudiendo a la oficina registral más cercana, sino también de manera virtual a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

Tal interconexión también comprende a los registradores públicos, por lo que, por ejemplo, ante la rogatoria de un acto de transferencia en función a una inscripción en el registro personal de otra oficina registral como la sustitución de régimen patrimonial, el registrador de la propiedad puede acceder a dicha información en tiempo real independientemente de la oficina donde se encuentre, sin necesidad de requerir al administrado la previa inscripción, nuevamente, en el registro personal de su oficina, como lo señala el artículo 2033 del Código Civil.



Asimismo, el artículo 48.1.4 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, prohíbe solicitar al ciudadano información que posea la administración en ejercicio de sus funciones públicas.

Por lo tanto, una vez inscrito el acto o derecho inscribible de cualquiera de los registros mencionados, la información y publicidad de los actos inscritos dada la interconexión es de conocimiento en todo el país no obstante la existencia de

diversas oficinas registrales, por lo tanto, las disposiciones aludidas quedan decantadas.

Con la modificación de las normas en mención, se busca actualizar el articulado conforme a la realidad del servicio registral y en segundo lugar superar la confusión actual de su interpretación, que ha llevado inclusive a apelaciones ante el Tribunal Registral, órgano que, en reiterados pronunciamientos ha dejado establecido por ejemplo, que no es procedente la inscripción del otorgamiento de testamento en el Registro de Testamentos del lugar de ubicación de los bienes (Resolución N°1684-2021-SUNARP-TR, entre otras).

Cabe precisar, que en el caso del artículo 2038 (Registro de Mandatos y Poderes), su modificación se da como consecuencia de la modificación del artículo 2037, pues que la inscripción se efectúa en la oficina registral indicada por el administrado, los alcances de la protección al tercero de buena fe, deben supeditarse a la inscripción independientemente del lugar en la que se realice.

II.5. Emitir medidas de acceso y competencia en servicios financieros

II.5.1 Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.

Fundamento técnico

La legislación vigente de límites operativos de concentración (monto máximo a financiar por parte de las empresas del sistema financiero) consiste en límites diferenciados para los financiamientos otorgados a empresas del sistema financiero y para personas naturales o jurídicas que no pertenecen al sistema financiero, así como para residentes en el país y residentes en el exterior. Además, en función de ciertas garantías específicas que se constituyan, estos límites se pueden ir incrementando.

Al respecto, el marco legal vigente fue emitido en 1996, año desde el cual no se han realizado revisiones integrales al esquema de límites de contraparte. Cabe señalar que, en el año 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió el estándar de grandes exposiciones referido a monitorear y limitar la pérdida que un banco internacionalmente activo puede enfrentar de una sola contraparte o de un grupo de contrapartes relacionadas y ha ido implementándose a nivel internacional, el cual resulta menos complejo que los criterios definidos en la

legislación peruana. En ese sentido, considerando la antigüedad de la legislación vigente y la emisión del referido estándar, resulta necesario actualizar la legislación.

En el Perú, actualmente, solo operan dos ETCAN: Hermes Transportes Blindados S.A. y la Compañía de Seguridad Prosegur S.A. Así, cada una de dichas empresas mantienen alrededor del 50% de participación del mercado, por lo que la concentración del mercado de las ETCAN que prestan servicios a las empresas supervisadas por la SBS es elevada, lo cual puede generar ineficiencias productivas debido a la limitada competencia en el sector.

Asimismo, es importante mencionar que los precios fijados por las ETCAN para el transporte y custodia de efectivo influyen en los costos que las empresas del sistema financiero y el Estado incurren para poder movilizar efectivo entre sus diversos canales de atención (agencias o cajeros automáticos) y para los operativos de pago de los programas de transferencia monetaria de los programas sociales y otros beneficios otorgados por el Estado, siendo este costo más oneroso mientras mayor sea la distancia de los puntos de atención en zonas rurales y alejadas.

Ello genera que los costos de los servicios de transporte y distribución del efectivo en el país brindados por las ETCAN resulten elevados para las empresas del sistema financiero y del Estado que requieren el servicio de traslado de efectivo para realizar operaciones financieras.

Las ETCAN, que están bajo el ámbito de supervisión de la SBS, forman parte del grupo de empresas de servicios complementarios y conexos que prestan servicios a empresas supervisadas por la SBS.

II.5.2 Modificar el Decreto Legislativo N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que los administran.

La propuesta normativa permitirá visibilizar la totalidad de los fondos de inversión que se constituyan en el mercado peruano con el objeto de: (i) Asegurar que los administradores de los mismos cumplan con parámetros prudenciales mínimos requeridos a los participantes del mercado financiero (patrimonio mínimo, solvencia moral y económica de accionistas, idoneidad de directores, implementación de medidas PLAFT, etc.); (ii) Lograr la efectiva constitución de un patrimonio autónomo separado de los activos de la sociedad administradora o de terceros, (iii) Prevenir la desnaturalización de los fondos de inversión con el objeto de que sean vehículos que emitan principalmente certificados de participación y no instrumentos de deuda; y, (iv) Fortalecer la transparencia de los fondos de inversión y la protección de los inversionistas.



II.5.3 Modificar la Ley N° 29440, Ley de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, así como de fortalecer las atribuciones del

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular los servicios e instrumentos de pago, incluyendo a los Acuerdos y Proveedores de Servicios de Pagos, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades para la interoperabilidad de los pagos inmediatos, incluyendo aspectos como las comisiones y tarifas de estos servicios, y facultades adicionales del BCRP para la administración y regulación de plataformas de servicios de pagos minoristas; y modificar el Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "Reactiva Perú", con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, para establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las modificaciones de la ley de pagos se orientan a otorgar facultades al Banco Central para enfrentar los retos de bajo acceso a los pagos digitales por parte de la población no bancarizada, costos altos de servicios de pagos y de conectividad, todavía baja interoperabilidad y barreras de acceso; así como a potenciar la regulación sobre acuerdos y proveedores de servicios de pago.

La modificación del marco legal de creación del Programa Reactiva, asociada a situaciones de intervención de las ESF permitirán limitar efectos negativos en el patrimonio del Banco Central (por falta de disposiciones expresas que regulen el procedimiento de pago en tal caso y cubran escenarios que podrían afectar la garantía a favor del Banco Central por situaciones asociadas a incumplimientos de las ESF.

II.5.4 Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con:

1. Modificación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, con el propósito de ampliar el alcance y finalidades del Fondo AGROPERÚ. Esta modificación permitirá al Fondo AGROPERÚ destinar sus recursos de manera más amplia en lo siguiente:

i. Otorgar financiamiento directo.
ii. Otorgar garantías.
iii. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales, formarán parte de la estructura del financiamiento obtenido por- el pequeño productor agrario organizado y serán asumidos por este.
iv. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA

Los recursos del Fondo AGROPERÚ podrán ser usados también en gastos operativos para el cumplimiento de sus fines.

2. Modificación del numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, también pueda administrar los recursos del

Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos, a fin de diversificar los operadores financieros para el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ.

Es crucial abordar las brechas identificadas en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 relacionadas al acceso a servicios de financiamiento y de seguros agrarios. Primero, la disminución en la solicitud de créditos por productores agropecuarios, de 13.3% en 2014 a 9.1% en 2022, sugiere una oportunidad significativa para optimizar y promover activamente los programas de préstamos. Es necesario implementar estrategias para incrementar la conciencia y la confianza en los productos financieros, lo cual es fundamental para revertir la tendencia a la baja en la solicitud de créditos. Actualmente, solo se cuenta con un canal de oferta de los servicios financieros del Fondo AGROPERU, eso hace necesario el incremento de esta oferta incluyendo a otras instituciones del sistema financiero.

Además, la brecha de género en la solicitud de créditos, con las mujeres productoras representando solo el 24.2% de las solicitudes, indica la necesidad de políticas inclusivas y programas de educación financiera dirigidos.

En segundo lugar, si bien el acceso a crédito parece ser alto en los que logran solicitar un crédito, la propiedad y el acceso a crédito presentan una tendencia a la baja, señalando la importancia de investigar y atender las barreras subyacentes al acceso, como, por ejemplo, la adopción de seguros agrarios o mecanismos de extensión agraria que permitan revertir esta tendencia. La adquisición de un seguro agropecuario permanece inusualmente baja, con un modesto aumento en la cobertura del seguro del 0.5% en 2016 al 1.3% en 022. Esto resalta un área crítica donde se podría innovar y ampliar el acceso y la adopción de seguros, esencial para la protección y sustentabilidad a largo plazo de la agricultura.

Por último, el crecimiento diferencial en la capacidad de ahorro entre regiones (Costa, Sierra y Selva) subraya la necesidad de una aproximación territorial en la formulación de productos financieros, algo que se deberá abordar al diseñar soluciones adaptadas a las condiciones económicas y culturales locales, incrementando la productividad de aquellos clientes del sistema financiero que son productores agrarios y requieren de servicios de extensión agraria.

Fundamento técnico de la medida

Desde su creación a la fecha, el Fondo AGROPERÚ ha pasado por modificaciones y mejoras, siempre en beneficio del pequeño productor agropecuario, siendo la reestructuración del Fondo AGROPERÚ en el año 2020 una de las medidas más importantes porque a través de dichos cambios se dinamizó el otorgamiento de créditos a nivel nacional.

A casi 4 años de estos cambios, el Fondo AGROPERÚ necesita mayor impulso para aumentar la atención a los pequeños productores. Al continuar solo con una entidad financiera para las colocaciones (AGROBANCO), no se podrá cumplir con el principal objetivo de Fondo, de incluir más productores y atenderlos con recursos para sus campañas agrícolas, ganaderas y forestales.

La creación de un Fideicomiso busca brindar diferentes opciones a los pequeños productores y que obtengan dichos recursos en el tiempo que necesiten para su inversión o cubrir los gastos generados por sus campañas, mediante mecanismos de financiamiento directo o garantías.

Se propone a COFIDE debido a que es una de las empresas estatales que actúa como Banco de Desarrollo del Perú, ofreciendo servicios de fideicomiso y tiene conocimiento del sector agrario. Además, ha participado en programas impulsados por el Estado, como el FAE AGRO, negociando con entidades financieras tales como cajas, edpymes y otras supervisadas por la SBS.
Adicionalmente a lo señalado, COFIDE tiene el "know how" de atender los programas de reactivación económica en el país (Reactiva Perú, FAES, Impulso Myperu, etc.). También, COFIDE cuenta con experiencia en el sector forestal, por cuanto administra el Fondo para Bionegocios para las PYMES en el sector amazónico del país.

Y, en el caso del sector agrario, administra el Fondo para la Inclusión del Fondo Pequeño Productor Agrario, así como los fideicomisos con los Gobiernos Regionales Amazónicos en virtud a la Ley 30896 y 30712, incluyendo el apoyo al Gobierno Regional de Ucayali a través del FONDESAM Ucayali con el fondo de garantía para el pequeño productor agropecuario de dicha región.

De igual manera, COFIDE también contribuye al desarrollo de los maricultores en la bahía de Sechura – Piura, con el Fondo FONDEMI II apoyando así a PRODUCE y FONDEPES. Por otro lado, COFIDE fortalece el progreso del sector empresarial con el Fondo de Capital Emprendedor e Innovador (FCEI) y el Fondo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER) con el MEF.

Sobre la implementación del mecanismo de garantías del Fondo AGROPERU

Al cierre de enero del 2024, el Sistema Financiero Peruano atiende a 8,0 millones de deudores (8,009,510), y está conformada por 51 empresas, de las cuales 49 son Empresas de Operaciones Múltiples que atiende al 94.2% y 2 empresas de la Banca Estatal que atiende el 5.8%1.

Por sectores económicos, el sector de agricultura, caza y silvicultura participa con 6.5% de un total de S/ 416,178 millones.

A fin de calcular el número de créditos a otorgar con la medida, se aplican los siguientes supuestos:

La ratio de morosidad en el sistema financiero al cierre de enero 2024 es de 6.7% para el sector de agricultura, caza y silvicultura, sin embargo, el porcentaje de morosidad en el Fondo AGROPERÚ al cierre del mes de marzo 2024 es de 19.6%. En ese sentido se estima que el porcentaje de recuperación de recursos del Fondo AGROPERÚ en 75% del saldo colocado.

Las colocaciones de créditos, depende de la disponibilidad de recursos provenientes de la recuperación de saldo de capital de los créditos otorgados en cada campaña de atención y lo intereses generados menos los gastos operativos (que para el caso del sector agrícola en promedio es de dos campañas por año) para el Fondo AGROPERÚ.

Las colocaciones al sector agricultura, caza y silvicultura es S/ 15,279 millones de los cuales la Banca Múltiple participa con el 75.4%.

El monto de recursos disponibles del Fondo AGROPERÚ al cierre del mes de febrero 2024 es de S/ 1,170 millones de los cuales se dispondría de S/ 200 millones para transferir a un fideicomiso para las colocaciones de créditos agrarios (provenientes de los recursos disponibles no colocados del Fondo AGROPERÚ) mediante garantías.

El público objetivo serán los pequeños productores agrarios que cumplen con las condiciones como usuario del Fondo en lo siguiente:

a) pequeño productor que desarrolla actividades agrarias, b) cumple con las condiciones del literal b), del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2021-MIDAGRI.

El promedio de crédito a otorgar será de hasta S/ 30 mil soles. Las condiciones de garantías serán establecidas por cada Institución Financiera que participa de las colocaciones de acuerdo a sus políticas de créditos.

Teniendo recursos disponibles, para colocaciones de créditos individuales de S/ 30 mil soles en promedio, a una tasa de interés anual promocional de 16%, y considerando que las empresas del sistema microfinanciera incurre en gastos operativos con un 11%, se podría atender a 22,334 créditos en 20 campañas por cada S/ 200 millones de soles, considerando una recuperación de capital del 70%.

Influencia de la extensión agraria productiva en un entorno de colocación y recuperación de créditos

En el contexto de una nueva tecnología o práctica, los servicios de extensión agraria pueden desempeñar un papel importante ayudando a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre la adopción de tecnologías. Algunos estudios demuestran que proporcionar a los agricultores información sobre los beneficios y el uso adecuado de nuevas prácticas puede aumentar efectivamente el conocimiento del agricultor, la adopción de tecnología y, en algunos casos, los rendimientos. En Sierra Leona, una evaluación aleatorizada de la introducción de una nueva variedad de semilla de arroz mejorada, NERICA, encontró que los rendimientos solo aumentaron para los agricultores que recibieron servicios de extensión junto con kits de semillas gratuitos2. Aquellos que solo recibieron semillas no experimentaron ganancias en los rendimientos. Esto puede ser porque la variedad de semilla probada requería cambios asociados en las prácticas de producción para obtener retornos, destacando la importancia de la información sobre las mejores prácticas y la adopción simultánea de insumos o prácticas complementarias en lugar de adoptar la tecnología de manera aislada.

Ahora bien, existe evidencia de que los servicios de extensión agrícola pueden mejorarse aprovechando herramientas como las tecnologías de la información y la comunicación, incentivos para capacitadores o el aprendizaje social para apoyar las decisiones de los pequeños agricultores de invertir en nuevas prácticas rentables. Los programas de extensión agraria que se dirigen tanto a miembros masculinos como femeninos del hogar o que combinan servicios de

asesoramiento con otras ofertas centradas en aliviar barreras basadas en género también pueden mejorar los resultados agrícolas de las mujeres3.

Sobre la adopción de seguros agropecuarios en los usuarios del Fondo AGROPÉRU

Según lo manifestado por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo – ALIDE[4], "En las últimas dos décadas se ha propuesto una variedad de nuevas y prometedoras tecnologías de préstamo cuya eficacia se ha comprobado en todo el mundo en vías de desarrollo; sin embargo, es probable que ninguna de ellas haya recibido más atención que los seguros agrícolas".

Se debe tener en cuenta que el riesgo de incumplimiento de la cartera de créditos, puede reducirse al incluir en las condiciones de créditos la incorporación de mecanismos de protección, considerando que las actividades agropecuarias contienen un mayor indicador de riesgo asociado a eventos climáticos, frente a otras actividades a financiar.

Diversos estudios (FAO, IICA, entre otros) hablan sobre la importancia de ofrecer algún tipo de instrumento que permita asegurar a los pequeños productores agrarios de manera sostenible, es decir, diseñar programas de seguros agrarios dentro de un marco de manejo de riesgos, que incluya elementos de prevención, transferencia y respuesta al riesgo.

En virtud a lo mencionado, se plantea que es importante que los créditos otorgados con recursos del FONDO AGROPERÚ cuenten con un seguro agrario cofinanciado, voluntario e individual, con los esquemas propuestas desde el FOGASA.

El contar con el respaldo financiero que ofrecen los seguros les da a los pequeños agricultores mayor confianza para invertir más en sus cultivos y/o crianzas. Finalmente, los resultados de esos cambios redundan favorablemente en la productividad y en el bienestar de toda la familia.

En este contexto, los seguros juegan un papel fundamental en la gestión de riesgos para el sector agrario, ofreciendo protección frente a diversos riesgos que pueden afectar la producción, contribuyendo significativamente a la estabilidad financiera de los pequeños agricultores, permitiéndoles recuperar inversiones en caso de siniestros y continuar con sus actividades productivas.

De esta manera, los seguros pueden incentivar las colocaciones crediticias en este sector, al reducir el riesgo asociado a la inversión agropecuaria y mejorar la confianza de las entidades financieras en la viabilidad de los proyectos agropecuarios.

En ese sentido, las instituciones financieras, buscan reducir o trasladar el riesgo de crédito (riesgo de crédito definido como la probabilidad de pérdida de recursos financieros asociados a la falta de pago de créditos) sobre todo en las actividades productivas agrarias que contienen un alto grado de incertidumbre frente a eventos adversos externos, como eventos climáticos (que reducen la

productividad de la actividad agropecuaria), eventos catastróficos (pérdida de cultivos) entre otros, que como resultado incrementan la vulnerabilidad y exposición de los pequeños productores agrarias, reduciendo su capacidad de pago.

El Ejecutivo ante la presencia de eventos climáticos y catastróficos que impactan sobre el sector agrario, ha propuesto diversos mecanismos para el otorgamiento de garantías para reducir el riesgo crediticio, con la finalidad de reducir las pérdidas de los usuarios del sistema financiero, avalar las colocaciones de créditos en las actividades agrarias que son consideradas como de alto riesgo por el sistema financiero, y promover las colocaciones de créditos. Dichas intervenciones, han movilizado recursos económicos, con la finalidad de mantener la continuidad de las actividades agrarias, y no generar desabastecimiento en los mercados nacionales y mantener la seguridad alimentaria del país.

Para estos casos, y con la finalidad de reducir el riesgo crediticio, el Estado promueve la contratación de seguros agropecuarios, cofinanciados con los usuarios de créditos del Sistema Financiero, para hacer frente a los eventos adversos, a fin de que dicho seguro cubra parte de las pérdidas que finalmente sin tenerlo, el Estado tendría que asumir al financiar a los afectados de estos eventos climáticos para su reactivación económico. Esta medida, que forma parte de un conjunto de estrategias destinadas a promover la colocación de créditos y reducir los impactos de eventos adversos en los pequeños productores que tienen mayor vulnerabilidad, y con ello aportar en la resiliencia para mantener una seguridad alimentaria en el país, y finalmente redistribuir el riesgo y la carga de recuperación entre el sector público y privado.

II.6. En materia de equilibrio fiscal

II.6.1 Establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541.

Las reglas fiscales vigentes[10] establecen la siguiente trayectoria del déficit fiscal: no debe ser mayor a 2,0% del PBI en 2024; a 1,5% del PBI en 2025 y a 1,0% del PBI en 2026. Por su parte, la deuda debe ser menor o igual a 30% del PBI como máximo en el año 2032[11].

En 2023, el déficit fiscal ascendió a 2,8% del PBI debido a eventos adversos que impactaron negativamente en la actividad económica y en las finanzas públicas (los ingresos fiscales cayeron 10% real, la mayor caída de los últimos 20 años excluyendo la pandemia). De esta manera, la reducción del déficit fiscal de 2,8% del PBI en 2023 a 2,0% del PBI en 2024 sería un ajuste muy significativo que

[10] Definidas en la Ley N° 31541. Ley que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el Sector Público No Financiero, al contexto de reactivación de la economía. Publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de agosto de 2022.

[11] Cabe señalar que las reglas fiscales de mediano plazo del déficit fiscal y de la deuda pública son 1,0% del PBI y 30% del PBI, respectivamente, las cuales están establecidas en el Decreto Legislativo N° 1276 (Decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del Sector Público No Financiero. Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2016).

podría ser perjudicial para la recuperación de la actividad económica del país. Cabe precisar que aún existen algunos rezagos de los efectos sobre las cuentas fiscales de los eventos adversos del año previo. Muestra de ello es que el déficit fiscal del SPNF anualizado a marzo de 2024 ascendió a 3,3% del PBI.

Al respecto, el FMI[12] señala que es necesario que los países realicen una reducción de sus déficits fiscales para preservar finanzas públicas saludables que les permitan afrontar eventos adversos futuros con mayor fortaleza fiscal; sin embargo, también señala que un proceso de reducción del déficit fiscal que no sea creíble o que ponga en peligro la sostenibilidad fiscal generan una percepción de mayor riesgo del país.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone:

a) Establecer una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal del SPNF al retorno de su regla fiscal de mediano plazo (1,0% del PBI) y de la deuda pública del SPNF (30% del PBI).
b) Establecer un menor límite a la tasa de crecimiento del gasto corriente de tal manera que sea prudente y consistente con preservar la sostenibilidad fiscal. Actualmente, el Decreto Legislativo N° 1276 indica que el crecimiento real del Gasto Corriente del Gobierno General, sin mantenimiento, no puede superar la tasa de crecimiento real anual de largo plazo de la economía[13], reducida en 1,0 punto porcentual (p.p.). Se propone que dicha reducción ya no sea de 1,0 p.p., sino que sea de 1,5 p.p., lo que implicará una menor tasa de crecimiento del gasto corriente.

Con estas medidas se tendrá una reducción gradual y ordenada del déficit fiscal y la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, de tal manera que sean consistentes con la recuperación de la actividad económica y la sostenibilidad fiscal. Con ello, se contribuirá a mantener la estabilidad macroeconómica del país, la cual es una condición esencial para tener el crecimiento económico sostenido y para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

La medida regula el retorno gradual a reglas macrofiscales de deuda pública y déficit fiscal, y modifica la regla de gasto corriente, las cuales están establecidas en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1276. Por otra parte, esta medida reemplazaría a la Ley N° 31451.

II.6.2 Fortalecer la gestión fiscal subnacional modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo Nº 1275 y Decreto Legislativo Nº 955; estableciendo disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal, regulados por el Decreto Legislativo 1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), a fin de mejorar la gestión de los ingresos locales.

---

12 FMI (2024) - *"WEO April 2024: Steady but slow: Resilience amid divergence"*.

13 La cual se refiere, según lo que señala el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1276, al promedio de veinte años del crecimiento real anual del PBI. Para calcular dicho promedio se utilizan las tasas del crecimiento real del PBI de quince años previos a la elaboración del Marco Macroeconómico Multianual, el estimado del año fiscal en que se elabora el referido Marco Macroeconómico Multianual y las proyecciones de los cuatro años posteriores contemplados en el citado documento

Las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales se regulan por el Decreto Legislativo 1275, el mismo que requiere ser modificado a fin de poder, por un lado delimitar el endeudamiento de los gobiernos subnacionales que están exceptuados del cumplimiento de la regla fiscal cuando presentan una calificación crediticia; de otro lado, las reglas fiscales requieren promover conductas fiscales locales orientadas a fortalecer sus ingresos propios y ser sostenibles. Estas medidas permitirán equilibrar los objetivos de sostenibilidad fiscal y las necesidades de financiamiento que tienen las entidades subnacionales; toda vez que, los niveles de deuda e ingresos deben estar dentro de los rangos razonables que no pongan en riesgo la provisión de servicios locales. En la misma línea, es necesario establecer nuevas herramientas que hagan posible acompañar a los gobiernos subnacionales que están sobreendeudadas e incumplen las reglas fiscales o que se encuentran en riesgo de incumplirlas y dotarles de apoyo técnico desde el MEF. De otro lado, el marco normativo que regula a las transferencias de recursos determinados a los gobiernos subnacionales es muy disperso, lo cual hace que sea complejo entenderlo por las autoridades subnacionales. Ello se debe a las diversas normas modificatorias que se han emitido en el tiempo tratando de esclarecer aspectos de la distribución de dichos recursos. En tal sentido, se hace necesario optimizar las actividades y procedimientos de la asignación de estos recursos, lo cual permitirá reducir los tiempos administrativos que demoran las acciones relacionadas su distribución.

En ese contexto, se busca dotar de un marco normativo que regule el SRTM del MEF a fin de que sea implementado en todas las municipalidades del país de forma gratuita, lo que permitirá digitalizar la gestión de los ingresos locales. Las municipalidades no han podido contar con estos sistemas; según la RENAMU (2022), sólo el 45% de las municipalidades cuentan con estos, y las que cuentan requieren tercerizar los servicios de mantenimiento, lo que demanda disponer de recursos que en su mayoría no tienen. Estos casos, implica altos costos para adquirir o diseñar estos instrumentos necesarios para mejorar su gestión fiscal, asimismo, la ausencia de recursos humanos para darle mantenimiento los ha limitado enormemente, especialmente en los municipios pobres y rurales. Como consecuencia de estos problemas, la gestión de su recaudación tributaria es deficitaria privando a los municipios de contar con recursos que les permitan atender a sus ciudadanos con mejores servicios.

Por su parte, en el marco de lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1557 y su Reglamento, el MEF es el responsable de la formulación de los valores arancelarios de terreno y la actualización del valor de los predios con fines fiscales a través del Catastro Fiscal; En tal sentido, con la finalidad de tener una función fiscal completa se requiere establecer el esquema de gobernanza del mismo, definiendo su articulación con los gobiernos locales, lo que implica convertirlo en un sistema funcional; también es necesaria una codificación única de los predios vinculada a actos administrativos, procedimientos u operaciones relativos a los predios que involucren información de trascendencia fiscal como un instrumento de actualización de su información predial. Esta medida es urgente, toda vez que, el Gobierno Peruano está iniciando un Proyecto que permitirá catastrar a todas las ciudades del país con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a partir de este año.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone:

a) Establecer disposiciones para fortalecer las reglas fiscales subnacionales y delimitar el endeudamiento subnacional basado en las excepciones de la regla fiscal cuando presentan una calificación crediticia.
b) Establecer mejoras al proceso de distribución de recursos determinados a fin de que los gobiernos subnacionales cuenten oportunamente con la asignación de estos.
c) Regular el Sistema de Recaudación Municipal (SRTM) del MEF a fin implementarlo en todas las municipalidades del país, de forma gradual, obligatoria y gratuita.
d) Fortalecer la gobernanza del catastro fiscal y el proceso de formulación y actualización de los valores arancelarios de terreno para fines fiscales. Establecer la codificación única de los predios del Catastro Fiscal vinculada a actos administrativos, procedimientos u operaciones relativos a los predios que involucren información de trascendencia fiscal como un instrumento de actualización de su información predial.

Con estas medidas se busca mejorar la gestión de las finanzas de los gobiernos locales y regionales, lo que tiene impacto directo en el ciudadano a través del incremento de recursos propios subnacionales que permite mejorar el equilibro fiscal, así como financiar mayor infraestructura urbana y mejorar la provisión de servicios locales.

La medida propuesta modifica el marco fiscal subnacional establecido en el Decreto Legislativo N° 1275. Asimismo, las disposiciones relacionadas al catastro fiscal modifican el Decreto Legislativo N° 1557 y el Decreto Legislativo N° 1365.

Las disposiciones no requieren financiamiento adicional ya que cuentan con recursos para su desarrollo e implementación en todo el país. El MEF tiene un proyecto que financia el SRTM y el Catastro Fiscal.

II.6.3 Modificar el Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos.

El Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) operativiza todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP), como son: Programación de Recursos Públicos, Gestión de Recursos Públicos y Evaluación de la Gestión de los Recursos Públicos, los cuales se rigen por los principios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, entre otros, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; por lo que resulta necesario que se dote de autonomía a su gestión centralizada a través de una norma con rango de ley.
La necesidad y urgencia para la emisión del Decreto Legislativo se sustenta en que, a la fecha, se encuentran en ejecución, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los proyectos de inversión "Mejoramiento de la

Administración Financiera del Sector Público a través de la Transformación Digital" y "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras", por lo que se requiere contar con el órgano de línea que pueda centralizar y desarrollar requerimientos digitales y de tecnología de los procesos de la AFSP que se circunscriben a la administración pública, y que están directamente vinculados con el equilibrio fiscal.
En razón de ello, la OCDE recomienda fortalecer la interoperabilidad de los procesos de los conformantes de la AFSP; consolidando dichas funciones en un solo órgano o unidad orgánica del MEF, a fin de asegurar una gestión centralizada del SIAF-RP, compatibilizando ello con lo previsto en las leyes que regulan los sistemas administrativos.
En ese sentido, se requiere contar con un órgano de línea en el Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de rector de los conformantes de la AFSP, para la gestión centralizada del SIAF-RP, que permita la aplicabilidad de los estándares internacionales y generar la información que facilite la gestión y toma de decisiones de las entidades, en el marco del equilibrio fiscal, considerando, cuando corresponda los lineamientos del Sistema de Transformación Digital.
Los receptores de los servicios de este nuevo órgano serán únicamente los conformantes de la AFSP y las entidades públicas que ejecuten sus procesos, por lo que no considera en su alcance a la sociedad civil, academia ni a la ciudadanía.

II.6.4 Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, la Planilla Única del Sector Público, la incorporación del proceso de Planificación de Recursos Humanos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al ámbito de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; y, otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal

La Gestión Fiscal de los recursos humanos del Sector Público, en el marco de la Administración Financiera del Sector Público, regula: (i) los ingresos correspondientes a los recursos humanos, (ii) la Planilla Única del Sector Público, entre otros; sin embargo, no cuenta con una norma de carácter permanente, consolidada e integrada que permita gestionar de manera eficiente, intersistémica y bajo los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público. Asimismo, considerando que el gasto público en personal se ha incrementado de manera importante en los últimos 10 años, se deben emitir disposiciones sobre la planificación de recursos humanos en el sector público.



En ese sentido, se requiere una norma con rango de ley que permita consolidar en un único cuerpo normativo, con las adecuaciones que resulten necesarias, las disposiciones referidas a la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público contenidas en otras normas con rango de ley.

El gasto público en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del Sector Público representa una fracción importante en la estructura del gasto

total del Estado, el mismo que en los últimos 10 años se ha visto incrementado en un 87,7% pasando de S/ 50 796 millones a S/ 95 360 millones, para las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional.

Asimismo, en el caso de los ingresos de personal activo y CAS, en los últimos 5 años, desde el 2018 al 2023, su gasto se ha incrementado en S/ 19 303 millones, monto que en un 70% responde al pago de mayores ingresos, y un 30% a la contratación de 87 957 nuevos trabajadores (0,8% PBI).

En ese sentido, la medida propuesta contribuye en la implementación real y efectiva del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a través del fortalecimiento de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; asimismo, cabe señalar que el principal beneficiario es el Estado, dado que, a partir de la implementación del proceso de planificación de recursos humanos, se podrá conocer el número de servidores necesarios en el Sector Público, que permita identificar y cubrir la brecha de personal, de modo progresivo, garantizando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

II.6.5 Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible; así como, asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, debiendo aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.

La Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, en su artículo 4 dispone que la negociación colectiva en las entidades del sector público puede comprender todo tipo de condiciones de trabajo y empleo, ya sean las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y las relaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Ha previsto dos niveles de negociación colectiva en el sector público, el primero constituye la negociación a nivel centralizado.

En tanto que el segundo, viene a ser la negociación colectiva en el nivel descentralizado. En este nivel de negociación, los procesos de negociación colectiva por ámbito de entidad pública, llevados a cabo durante los años 2022 y 2023 se han suscrito diversos convenios colectivos con acuerdos con incidencia económica, que han representado un significativo impacto fiscal. En efecto, en los procesos de negociación colectiva **2022-2023** se evidenciaron acuerdos con incidencia económica **por S/ 1 926 millones anuales, de los cuales solo el 3,2% cuenta con financiamiento** conforme al espacio fiscal asignado. Mientras que, en los procesos **2023-2024**, se evidencia acuerdos con incidencia económica por **S/ 1 178 millones anuales, de los cuales solo el 2,2% tiene financiamiento.** Lo que implica que dichos convenios colectivos se encuentran desfinanciados en un 97%.

Asimismo, se identificó que, en los convenios colectivos en el nivel descentralizado por entidad pública, se pactaron condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica correspondientes a montos con pagos

mensuales, periódicos y por única vez. El monto de acuerdos de naturaleza permanente es mayor generando un impacto fiscal multianual (incluso, más allá del año 2027), lo que resta espacio para incrementos de este tipo de gasto. En tres o más años llega a un monto de S/ 524 millones anuales. Del mismo modo, en el año 2023, se pactaron condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica, con montos permanentes que se aplica para un periodo de 3 años a más, ascendente a S/ 567 millones anuales; lo que en conjunto asciende a S/ 1 091 millones anuales.

II.6.6 Establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria, a las reglas macrofiscales y a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la Administración Financiera del Sector Público.

El Decreto Legislativo N° 1602 tiene como objeto promover el tránsito de entidades y de los servidores al régimen del Servicio Civil, regulado por la Ley N° 30057. Con dicha norma se espera que, especialmente, los puestos de los servidores de confianza y de los directivos públicos, sean los primeros en transitar al nuevo régimen, al precisar que, tras la aprobación del CPE, queda prohibida la contratación de dichos servidores bajo el régimen de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057. Sin embargo, dicha norma no ha considerado que su implementación conlleva un gasto en el presupuesto institucional de las entidades públicas, que no ha sido programado en el presente ejercicio fiscal, generando así demanda de recursos adicionales al Tesoro Público.

Implementar el tránsito al régimen del Servicio Civil en las entidades del Poder Ejecutivo, bajo las disposiciones del D.Leg. 1602, **implica un costo diferencial aproximado de hasta S/ 375 millones anuales para directivos públicos y** un costo diferencial **de hasta S/ 2 523 millones anuales para financiar el tránsito de los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias**.

La propuesta normativa contribuye a la implementación real y sostenible del régimen del servicio civil regulado por la Ley N° 30057, así como también al establecimiento de un marco legal para que las entidades públicas no paralicen su gestión en la medida que autoriza la contratación de servidores de confianza y de directivos públicos en el régimen laboral que corresponda a la entidad (DLeg. 276, DLeg. 728, DLeg. 1057 y Ley 30057) hasta que la entidad cuente con los recursos suficientes, de acuerdo con su programación multianual de presupuesto, para el tránsito de dichos puestos al régimen del servicio civil.

Asimismo, la propuesta busca autorizar el desplazamiento de los servidores civiles entre entidades que tienen implementado el régimen del servicio civil y las que aún no han implementado o que no implementan dicho régimen, lo cual permitirá superar la actual limitación que presentan las entidades para gestionar a sus recursos humanos. Del mismo modo, la propuesta se orienta a establecer el efecto suspensivo de los recursos de apelación en contra de los resultados finales o los resultados que imposibiliten continuar con los concursos públicos de méritos bajo el régimen del servicio civil, con dicha medida, la vinculación debe

materializarse una vez que los resultados hayan adquirido la calidad de cosa decidida, evitando complicaciones en la operatividad de la ejecución de los resultados de los referidos concursos.

II.6.7 Actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.

Las regulaciones del Sistema Nacional de Tesorería y del Sistema Nacional de Endeudamiento Público se encuentran contenidas en el Decreto Legislativo N° 1441 y en el Decreto Legislativo N° 1437, respectivamente, por lo tanto, cualquier variación en dichos extremos debe efectuarse mediante norma con rango de Ley. Asimismo, la necesidad y urgencia para la emisión del Decreto Legislativo se sustenta en fortalecer el marco regulatorio de la gestión de los Recursos Públicos de Administración Financiera del Sector Público y, de tal manera, impulsar acciones orientadas a una mayor eficiencia en la gestión de los Fondos Públicos, lo cual a su vez contribuirá a mejorar la implementación de políticas públicas; y a la optimización en la gestión de la recuperación de las honras de aval.

En materia de Tesorería: Modificar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, a fin de fortalecer la legislación del proceso de Gestión de los Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, en cuanto a aspectos relativos a la Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público y de la Gestión de Tesorería, excluyendo la Gestión de Riesgos Fiscales de las atribuciones de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), las cuales serán asumidas por un nuevo órgano de línea en el MEF. Asimismo, se propone actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, en lo relacionado con los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras para una mejor consistencia de la regulación.

En materia de Endeudamiento Público: Modificar el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, con la finalidad de optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.

II.7. Modernizar el sistema tributario

El objetivo es modernizar el sistema tributario para regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital; perfeccionar el régimen tributario de las empresas de menor tamaño; perfeccionar las herramientas legales y administrativas a fin de hacer más eficiente la recaudación; fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria; reducir los riesgos de futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencia; mejorar el funcionamiento del Tribunal Fiscal y agilizar sus procedimientos para la pronta solución de controversias; así como dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administradas por la SUNAT.

Para ello, se proponen las siguientes medidas tributarias:

II.7.1 Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:

a) Modificar la Ley del del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Se plantea modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para:

a.1) Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.

La economía digital ha reconfigurado los modelos de negocio para la comercialización de bienes y la prestación de servicios, de modo tal que el intangible tecnológico es el principal elemento en la cadena de valor y tanto proveedores como consumidores interactúan en un mercado global sin necesidad de presencia física a través de medios digitales, ya sea de manera directa o, a su vez, por intermedio de otras plataformas digitales (p.ej. "*marketplaces*").



En materia tributaria, la masificación de las importaciones de bienes digitales y prestación de servicios a través de Internet dificulta la labor de recaudación y control de estas operaciones por parte de las administraciones tributarias, dado que las nuevas tecnologías constituyen el elemento esencial tanto para la comercialización de este tipo de bienes y servicios como para la interacción con los usuarios consumidores finales, a nivel internacional.

El IGV, tal como otros impuestos al valor agregado a nivel internacional, es un impuesto al consumo final de bienes y servicios, recaudado a través de entidades que realicen actividad empresarial; pero sin que, en principio, la carga económica

del Impuesto recaiga en ellas. Para garantizar la neutralidad del Impuesto, entre otros aspectos, el IGV debería alcanzar a todos los consumos que se verifiquen en el país, conforme con el principio de destino, el cual constituye el estándar internacional para la aplicación del IGV a operaciones transfronterizas. De lo contrario, podría implicar en los hechos efectos disímiles para las entidades domiciliadas en Perú con actividad empresarial, las cuales están obligadas a aplicar el IGV, frente a sus contrapartes en el extranjero, que no estarían obligadas a ello por falta de actualización de la legislación nacional.

Si bien, en principio, las operaciones comerciales transfronterizas que se llevan a cabo a través de Internet se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto, la regulación vigente del impuesto carece de reglas que permitan establecer un mecanismo de recaudación que garantice la tributación efectiva de este tipo de operaciones, específicamente cuando el bien o servicio digital es comercializado por un sujeto no domiciliado en el país, ya sea de manera directa o a través de otras plataformas digitales, y el consumidor final es una persona natural.

En ese sentido, se busca modificar la normativa del IGV, a fin de contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación al consumo de la economía digital, tanto para la prestación de servicios como para la venta de bienes, ya sea directamente o a través de plataformas digitales intermediarias, garantizando un tratamiento neutral, simple y eficiente, buscando eliminar cualquier tratamiento asimétrico que pudiera generar su falta de regulación, específicamente cuando se trata de un consumidor final que tiene la naturaleza de persona natural y sin que ello implique desincentivar ni afectar el normal desenvolvimiento de estas actividades. Estas medidas, consecuentemente, también buscan crear condiciones de igualdad para la competencia en el mercado peruano, eliminando factores que favorecen a las empresas en el extranjero en desmedro de las nacionales que sí pagan IGV.

Cabe resaltar que la propuesta normativa forma parte de las medidas tributarias que se deben implementar como parte del proceso de adhesión iniciado por el Perú para convertirse en miembro de la OCDE. Como parte de dicho proceso de adhesión el país debe someterse a una serie de revisiones por parte de los distintos comités técnicos que lo conforman, incluido el Comité de Asuntos Fiscales (CFA, por sus siglas en inglés), por lo que resulta necesario introducir las modificaciones a la legislación peruana que permitan un correcto alineamiento con las recomendaciones de la OCDE. En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal instrumento lo constituye la Recomendación del Consejo de 2016 que contiene las Directrices Internacionales sobre IVA de la OCDE (las "Directrices"). Las Directrices presentan criterios y principios aceptados internacionalmente para el tratamiento del impuesto sobre el valor agregado en los tipos de transacciones internacionales más habituales, con especial foco en el comercio de servicios e intangibles. Las Directrices pretenden reducir al mínimo las incoherencias en la aplicación de dicho impuesto en un contexto transfronterizo, en aras de reducir la incerteza y los riesgos tanto de doble imposición como de no imposición involuntaria en el comercio internacional

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descentr. Fiscal

a.2) <u>Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia</u>.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es un impuesto de carácter específico aplicable sólo a determinados bienes y servicios.

Conforme con los lineamientos de política tributaria el ISC además de ser una importante herramienta de política tributaria que coadyuva a combatir externalidades negativas, desincentivando o modificando el consumo de los bienes o servicios sobre los cuales se aplica, permitirá generar recursos para contribuir a financiar las necesidades de gasto público.

En el caso de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, la regulación tributaria efectuada a través de la Ley N° 31557 omite aspectos esenciales del ISC que lo hacen inaplicable, tales como: la incorporación de la actividad dentro del ámbito de aplicación del impuesto, la tasa y parámetros para determinar el ISC, el mecanismo para su adecuado cumplimiento y control en el caso de las empresas extranjeras que realizan esta actividad desde fuera del país, entre otros.

Con el perfeccionamiento de la regulación del ISC de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia se uniformizará el tratamiento tributario del ISC de esta actividad, coadyuvando a la coherencia y homogeneización de la tributación específica al consumo; para ello se tomará en cuenta la regulación sectorial de dicha actividad.

b) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

La Ley N° 31557, debe ser modificada a fin de incluir las siguientes disposiciones que permitirán la aplicación adecuada del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia:

- Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.
- Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.
- Algunas dirigidas a perfeccionar el mecanismo de recaudación del Impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.
- Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.
- Establecer, para el caso de las personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país.
- Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

c) **Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control.**

La Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, establece, entre otros, que no se encuentra gravado con el IGV la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, realizados en condiciones normales, que constituyan mercancías hasta por un valor de US$ 200; mecanismo que también resulta de aplicación para los envíos efectuados a través de Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima (SERPOST).

El auge de la digitalización en la economía ha permitido que, a través del comercio electrónico se realicen adquisiciones de bienes físicos del exterior. Sin embargo, el suministro internacional de bienes de bajo valor se ha visto altamente incrementado debido a volúmenes de ventas que cuentan con una franquicia, es decir, un monto mínimo sin el pago de impuestos, para su ingreso al país. Estos bienes de bajo valor ingresan a través de los regímenes aduaneros especiales de envíos de entrega rápida y de envíos postales, y puede ser empleado por cualquier persona natural o jurídica.

Cabe señalar, que los regímenes aduaneros antes mencionados, fueron concebidos para el ingreso de bienes como cartas, documentos, publicaciones y, excepcionalmente, bienes pequeños (envíos postales); así como, de bienes que por sus características requieren su ingreso al país de forma rápida (envíos de entrega rápida) mediante el uso de transporte aéreo, en su mayoría.

Sin embargo, este mecanismo viene desplazando la tributación del IGV que se recauda a través de las importaciones mediante el régimen aduanero de importación, en el cual se efectúa el pago de los tributos de importación por el valor total de los bienes ingresados. Esto además crea condiciones de competencia desigual para las empresas peruanas que sí están afectas al pago de IGV y otros tributos.

La actual posibilidad de los consumidores finales de efectuar compras de bienes físicos del exterior a través de Internet, ya sea directamente a vendedores o por intermedio de plataformas digitales, genera una creciente pérdida de recaudación por la incapacidad de aplicar efectivamente el IGV a la importación de bienes de bajo valor.

En el año 2020, se registraron 365 562 declaraciones de envíos de entrega rápida. Con un valor CIF de US$ 48 310 723.

Adicionalmente, la OCDE recomienda reducir las franquicias (minimis) en el suministro internacional de bienes, a fin de no afectar los ingresos de los países por concepto de IVA. En la Unión Europea por ejemplo, todas las importaciones de bajo valor están afectas al IVA y a los impuestos

específicos. En países de la región como Ecuador y Chile, el minimis es de US$ 10 y US$ 30, respectivamente.

Es por ello, que se propone reducir el monto del valor de las mercancías que constituyan envíos de entrega rápida o envíos postales para efectos de la inafectación del IGV a la importación, a fin de prevenir supuestos que pudieran constituir fuentes potenciales de competencia desleal en el mercado respecto de bienes de similar naturaleza que sí pagan el IGV.

Asimismo, se busca contrarrestar conductas de evasión tributaria que se produce al ingresar por este medio bienes sin el pago de impuestos que son destinados a actividades comerciales. Esta clase de operaciones crea además importantes desafíos para la administración tributaria por la dificultad en el control de los paquetes de envíos debido a la gran cantidad que ingresan al país.

II.7.2 Perfeccionar el tratamiento tributario de contribuyentes de menor tamaño a través de:

a) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; así como, adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen

Actualmente, existen 3 regímenes –además del Régimen General- para empresas con ingresos hasta 1 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT): el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT).

Ello ha ocasionado, entre otros, la siguiente problemática:

- Los regímenes del NRUS y RER no incentivan a que los sujetos de dichos regímenes declaren costos y gastos, o incluso, dejan espacio para trasladar gastos a contribuyentes cuyo régimen tributario sí admiten la deducibilidad.
- Las tasas y cargas diferenciadas del impuesto a la renta incentivan a los sujetos del NRUS, RER y RMT a manipular sus ingresos para no migrar a otro régimen con mayor carga tributaria y no sincerar sus gastos reales, lo cual conlleva a incentivar la informalidad económica.
- El RMT abarca a un tamaño de empresas con ventas hasta S/ 8 755 000 que no ameritan ser sujetos de un régimen simplificado, de acuerdo a los estándares internacionales.



Por lo tanto, se propone crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para contribuyentes generadores de rentas empresariales de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, establezca una fácil determinación de la base imponible y del impuesto a pagar; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; facilite el uso de herramientas tecnológicas para la declaración y pago; así

como, permita adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen.

b) Modificar la Ley del NRUS, derogar el RER y el RMT, así como, adecuar el Código Tributario a las modificaciones indicadas.

La normatividad actual del RER prevé supuestos de exclusión del régimen que han resultado insuficientes para impedir que algunos sujetos tomen ventaja de sus falencias y se ubiquen en los umbrales máximos del monto de ingresos, valor de los activos fijos y monto de adquisiciones afectadas a la actividad, de modo tal que, al situarse en un régimen que no les corresponde, reducen su carga impositiva en perjuicio del fisco.

Por otro lado, al impedirse en el RER la deducción de gastos para la determinación del impuesto a la renta, existen menores incentivos para que los sujetos de este régimen soliciten comprobantes de pago a sus proveedores, por la adquisición de bienes o servicios, o declaren en la planilla al personal afectado a la actividad, lo que no promueve la formalidad en determinados sectores económicos.

Asimismo, dado que el RMT prevé una escala progresiva acumulativa, se aprecia que muchas empresas desarrollan estrategias para evitar superar el tope de 15 UIT de su renta neta anual con el objetivo de permanecer en este régimen aplicando la tasa más baja para defraudar al fisco que obtiene una menor recaudación a la que correspondería si tributaran con la tasa y reglas del Régimen General.

Siendo así, en la situación actual, se considera que los generadores de rentas de la tercera categoría pueden optar por el régimen más conveniente desde el punto de vista fiscal recurriendo a la realización de prácticas de arbitraje, elusión, fragmentación de ingresos y enanismo, generando una erosión a la recaudación del impuesto a la renta, ya que, en circunstancias en las que sería exteriorizada su verdadera capacidad contributiva, resultaría aplicable la tasa del 29,5% sobre su renta neta anual. Todo lo cual afecta el equitativo reparto de cargas del sistema impositivo.

Por lo tanto, se propone:

- Modificar el Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, aprobado por Decreto Legislativo N° 937, para establecer los sujetos no comprendidos en el NRUS, reglas de acogimiento, categorización, tabla de cuotas mensuales, forma de pago, inclusión en el Régimen General, cambios de régimen, comprobantes de pago, presunciones, obligaciones formales, definiciones y aplicación de percepciones y retenciones del IGV;, entre otros.
- Derogar el Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta sobre el RER, así como el Decreto Legislativo N° 1269, que crea el RMT.
- Modificar el Código Tributario para adecuarlo a las referidas modificaciones.
- Establecer el acompañamiento tributario a fin de no sancionar a los sujetos que se acojan o se les incorpore de oficio al NRUS respecto de determinadas sanciones.

c) Regular una deducción adicional por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la Ley N° 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas.

Se propone establecer que el contribuyente del Régimen General que contrate trabajadores, para efectos de la determinación del impuesto a la renta de los ejercicios gravables 2025, 2026 y 2027, puede aplicar una deducción adicional equivalente al 20% de la remuneración básica que pague a dichos trabajadores siempre que la relación laboral se inicie a partir del 1 de enero del 2025, independientemente de su jornada de trabajo y su modalidad contractual.

Para tales efectos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los ingresos netos del contribuyente correspondientes al ejercicio gravable anterior no deben superar las ciento cincuenta (150) UIT.
- La remuneración básica del trabajador no debe superar los S/ 1 700 (Un Mil Setecientos Soles) mensuales.

De otro lado, teniendo en cuenta el umbral de 150 UIT para la aplicación de la deducción adicional, se propone modificar la Ley N° 31940 a efectos que los contribuyentes – personas naturales y micro y pequeñas empresas – del Régimen General que generen ingresos netos anuales que no superen dicho límite puedan presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta y pagar dicho impuesto hasta junio del año siguiente al de la declaración.

II.7.3 Perfeccionamiento del Sistema Tributario

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:

a.1) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina, así como perfeccionar la determinación de la base imponible en el sistema del precio de venta al público (PVP), y los rangos mínimos y máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, específico o PVP para los bienes y servicios sujetos al impuesto.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual resulta importante asegurar la recaudación del ISC, por ello se busca perfeccionar su aplicación en lo que respecta a su aspecto cuantitativo y determinación; así como a su ámbito de aplicación teniendo en cuenta que actualmente existen bienes y servicios sustitutos o similares de los que se encuentran actualmente gravados.

Tal es el caso, por ejemplo, de los vapeadores electrónicos (soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina). Según la Encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes (GYTS), en el Perú en el año 2019 la prevalencia de cigarrillos electrónicos en escolares era de 6,3%, mientras que la prevalencia de cigarrillos tradicionales era de 4,9%.

En el caso de los vapeadores electrónicos la medida equipara el tratamiento tributario con otros productos similares que ya se encuentran gravados con el ISC como son los productos de tabaco y sucedáneos de tabaco. La propuesta es concordante con las recomendaciones internacionales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en los que no están prohibidos, los sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares deben ser regulados y gravados de forma que se desincentive su consumo por parte de los jóvenes y los no usuarios, existiendo consenso a nivel internacional que estos productos son dañinos para la salud.

Adicionalmente, se busca modificar los rangos mínimos y máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para los bienes y servicios sujetos bajo el ámbito de aplicación del Impuesto; así como aclarar la metodología para determinar la base imponible en el Sistema del precio de venta al público.

a.2) Perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; así como modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas y que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027 la masificación del uso de comprobantes de pago electrónicos, la administración tributaria debe alentar y simplificar el cumplimiento tributario brindando a los contribuyentes el llevado de los libros contables, la declaración y pago de impuestos por medio de las plataformas digitales.

Así tenemos que, como consecuencia de la política de masificación de comprobantes de pago electrónicos implementada, se ha pasado de tener 30 263 contribuyentes que emitieron comprobantes de pago electrónicos en octubre de 2015 a 755 031 contribuyentes que emitieron tales comprobantes de pago en marzo de 2024.



Fuente: SUNAT

La masificación en el uso de comprobantes de pago electrónico, permiten a la SUNAT poner a disposición en sus plataformas electrónicas los comprobantes de pago emitidos por los proveedores, a fin de que los clientes puedan hacer uso inmediato del crédito fiscal del IGV, lo cual les permite llevar un mejor control del uso del crédito fiscal.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1540 se facultó a la SUNAT para que, en el caso de contribuyentes que son emisores electrónicos y que deben llevar su Registro de Ventas e Ingresos de manera electrónica mediante algún sistema o módulo autorizado por la SUNAT, pueda generar el Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos en lugar del contribuyente, en caso este no lo haga en el plazo de atraso permitido. Dicha medida tuvo por finalidad simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas y a su vez reducir el incumplimiento de llevar libros y registros por parte de los contribuyentes.

Los beneficios para el contribuyente de dicha medida se proponen ampliar al llevado del Registro de Compras, simplificando y facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de la obligación formal de llevar dicho Registro mediante el uso de herramientas tecnológicas de modo que la SUNAT ponga a su disposición una propuesta del Registro de Compras Electrónico.

A su vez, siendo que la generación del Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras se realiza de manera conjunta, resulta conveniente que las modificaciones sobre el Registro de Ventas e Ingresos y órdenes de pago efectuadas mediante los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1540 entren en vigencia en la misma fecha de las modificaciones que se proponen respecto del Registro de Compras.

b) Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

De acuerdo con el Código Tributario la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, cuyo rendimiento no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de actuaciones o servicios que constituyen los supuestos de la obligación, siendo que su cuantía se fija por decreto supremo refrendado por el ministro del sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas. En línea con esto, para el caso de las tasas del tipo derecho la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que, para la procedencia de tasas por derechos de tramitación estos deben ser fijados conforme a la metodología vigente, y estar consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), y para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del MEF.

Ahora bien, la metodología vigente para la determinación de derechos de tramitación fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, la cual fue elaborada en base a criterios de razonabilidad, simplicidad y flexibilidad de los recursos humanos y materiales, y es de aplicación obligatoria en los procesos de elaboración o modificación del TUPA de cada entidad.

De lo anterior se tiene que la cuantía de las tasas por derechos de tramitación de las entidades públicas del Poder Ejecutivo se calcula utilizando la metodología vigente, y se aprueban por decreto supremo refrendado por el ministro del sector competente y el ministro de Economía y Finanzas, siendo que estos tributos pueden ser directamente creados con la aprobación del TUPA de cada entidad.

Por ejemplo, actualmente la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) viene cobrando tasas por sus servicios registrales en función del Decreto Supremo N° 37-94-JUS y del Decreto Supremo N° 017-2003-JUS, normas que fueron aprobadas con anterioridad a la vigencia de la metodología vigente aprobada en el 2010; siendo que a la fecha dicha entidad no ha aplicado la referida metodología para la determinación de la cuantía de sus tasas.

La falta de adecuación a la metodología vigente para la fijación de tasas derecho genera que estas se fijen en función de criterios distintos a los señalados en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, tal como en función del valor del acto inscrito, lo que afecta la regulación uniforme de las tasas, pudiendo implicar que el pago de estas pueda ser mayor al costo del servicio prestado.



Lo anterior evidencia la necesidad de la aplicación de la metodología para la determinación de las tasas por parte de todas las entidades públicas, no siendo suficiente que su obligatoriedad esté fijada en la Ley, como actualmente se prevé, sino que además deben existir consecuencias en caso estas no cumplan con su adecuación.

En tal sentido se propondrá que en caso las entidades públicas no se adecuen a la metodología de cálculo de determinación de tasas al 31.12.2024, ya no podrán seguir cobrando dicho tributo por los servicios que brinden a partir del 01.01.2025.

c) Modificar el alcance de la Ley N° 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, a fin de circunscribir su ámbito de aplicación a las empresas de menor tamaño, estableciendo asimismo condiciones mínimas para que los titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.

Mediante la Ley N° 31903 se dispuso un tratamiento especial para las micro y pequeñas empresas (MYPE) respecto a la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la finalidad de fortalecer la capacidad financiera y apoyar la reactivación económica de este segmento empresarial ante el impacto de la crisis económica.

Los alcances de esta Ley comprenden a las MYPE, personas naturales o personas jurídicas, cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos, establecidos en la ley de la materia, esto es, en el caso de una micro empresa que registre ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT, mientras que en el caso de una pequeña empresa será la que tenga ventas anuales entre 150 UIT y 1 700 UIT.

Sin embargo, las disposiciones establecidas en la Ley N° 31903 eliminan condiciones y requisitos del SPOT para todas las MYPE, de tal manera que afecta su finalidad, pues circunscribe su aplicación prácticamente al 99% de empresas del país, volviendo ineficaz el sistema.

Cabe señalar que el SPOT tiene como objetivo final el cumplimiento tributario, coadyuva a mejorar los procesos de fiscalización, a la vez que asegura el pago de las deudas tributarias en actividades y sectores con altos índices de incumplimiento tributario, ayuda a detectar a aquellos sujetos que realizan operaciones gravadas con impuestos y no cumplen con declarar y pagar los mismos, y al mismo tiempo asegura que existan fondos para el pago de las obligaciones tributarias a cargo de dichos sujetos.

Atendiendo a ello, se busca modificar la Ley N° 31903 revirtiendo los efectos negativos en la aplicación del sistema, limitando el ámbito de su aplicación a empresas de menor tamaño y manteniendo las condiciones mínimas para que los titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.

d) Modificar el Código Tributario.

Se plantea modificar el Código Tributario, para:



d.1) Regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria; con el fin de que estos incentiven el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, lo que incluye modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a

percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

Bajo las reglas vigentes del Código Tributario, las multas tributarias han disminuido su capacidad para incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias debido a: i) la reducción de la tasa de interés aplicable y, ii) la postergación del inicio del cómputo de dicha tasa de interés hasta la notificación de la comisión de la infracción.

Asimismo, se está remunerando con una tasa de interés mayor a la que podría obtener en el sistema financiero a las devoluciones ocasionadas por el error del contribuyente en la declaración, lo cual crea incentivos negativos para que los contribuyentes incurran en "errores", dado los beneficios económicos que obtendrían de estos.

Por lo expuesto, se requiere corregir tal situación modificando el Código Tributario en lo referido a los intereses aplicables a las devoluciones y a las multas a efectos de generar los incentivos adecuados para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias; así como, modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053 a fin de adecuarlo a las modificaciones que se introduzcan al citado Código.

A tal efecto, las medidas que se proponen son las siguientes:

- Establecer una tasa de interés diferenciada aplicable a las devoluciones de pagos indebidos o en exceso según se origine en requerimientos de la Administración Tributaria o por errores del deudor.
- Establecer el cómputo de la tasa de interés moratorio a las multas impagas desde el momento de la comisión de la infracción o su detección.
- Modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

d.2) Adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos de contar con información suficiente para el análisis de datos para la formulación de políticas tributarias.

La regulación vigente de la reserva tributaria contenida en el artículo 85 del Código Tributario no permite el acceso a la información adecuada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de la formulación de políticas tributarias sustentadas en un amplio espectro de información que permita un análisis detallado de la realidad que se busca perfeccionar.



En ese sentido, se propone adecuar el alcance de la reserva tributaria permitiendo el acceso del Ministerio de Economía y Finanzas a la información suficiente para la evaluación de propuestas de política tributaria en el marco de los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú.

Por lo expuesto, se plantea modificar el artículo 85 del Código Tributario para adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos del análisis de datos para la formulación de políticas tributarias manteniendo el contenido esencial del derecho protegido a nivel constitucional en línea con el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional.

d.3) Agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, estableciendo, entre otros, un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria; regular supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que permitan presumir que la cobranza será infructuosa mediante las medidas cautelares previas; establecer expresamente excepciones a la reserva tributaria de acuerdo con el nivel y estado de la deuda a efectos que la SUNAT pueda hacer publicaciones; adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar el cobro de la deuda tributaria; perfeccionar las reglas de la contracautela en los procesos judiciales sobre materia tributaria, modificar los plazos y las reglas que rigen en los procedimientos contenciosos tributarios para la atención oportuna de estos; modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal; así como delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Existe un gran volumen de deuda tributaria que se encuentra en apelación en el Tribunal Fiscal; por lo que no es posible su cobro y, además, se ha detectado reglas del Código Tributario que pueden ser materia de optimización a fin de lograr la pronta recuperación de la deuda tributaria.

En efecto, se requiere reglas que agilicen la cobranza de la deuda tributaria a efectos de facilitar la función de recaudación de la Administración Tributaria y lograr satisfacer las necesidades de la población.

En este sentido, se plantea optimizar las reglas del Código Tributario para agilizar la cobranza de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, a cuyo efecto, se plantea, entre otras las siguientes medidas:

- Perfeccionar las disposiciones referidas a la atribución de responsabilidad solidaria estableciendo un procedimiento de atribución de responsabilidad.
- Regular de forma expresa supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que permitan presumir que la cobranza será infructuosa a efectos de dictar medidas cautelares previas.
- Establecer excepciones a la reserva tributaria, en línea con el nivel y estado de la deuda a efectos de que la SUNAT pueda hacer publicaciones.
- Adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar así la deuda tributaria.
- Perfeccionar las reglas de la contra cautela en los procesos judiciales en materia tributaria.
- Modificar los plazos y reglas que rigen en los procedimientos contenciosos a efectos de mejorar la oportunidad de las resoluciones.
- Fortalecimiento del Tribunal Fiscal para resolver en los plazos establecidos los procedimientos a su cargo. En tal sentido, se plantea efectuar modificaciones en su conformación y funcionamiento, a efectos de atender rápidamente las materias bajo su competencia.
- Efectuar modificaciones a fin de delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia a efectos de generar predictibilidad y de contar con reglas acordes con la especialidad del derecho tributario.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

d.4) Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, en función del principio de proporcionalidad considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes; así como perfeccionar lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario

En efecto, se advierte que con relación a la sanción establecida por comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, consistente en no presentar la declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria en los plazos establecidos, la sanción aplicable es un porcentaje de la UIT, este monto en el caso de algunos contribuyentes infractores no cumple el objetivo de desincentivar la conducta infractora e incentivar el cumplimiento tributario.

En tal sentido se propone modificar el cálculo de la multa en base a los ingresos netos a fin de generar un mayor riesgo en los grandes contribuyentes.

i. Establecer la multa en función a:
   - Tablas I y II – 0,05% de los Ingresos Netos (IN), teniendo presente que la sanción aplicable no sea menor al 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT.
   - Tabla III – Cuota de la categoría correspondiente al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS).

ii. Modificar el artículo 180 del Código Tributario para:
   - Establecer que para el caso de los sujetos del NRUS la multa se determine en función a la cuota de la categoría que le corresponde.
   - Respecto a la Tabla II, cuando el deudor tributario haya presentado las declaraciones juradas mensuales, pero no consigne o declare cero en los campos o casillas de Ventas Netas y/o Ingresos por Servicios y otros ingresos gravables y no gravables o rentas netas o ingresos netos; o cuando no se encuentra obligado a presentar las declaraciones mensuales; o cuando hubiera iniciado operaciones en el ejercicio en que se cometió o detectó la infracción; se aplicará un porcentaje de la UIT.
   - En caso el deudor tributario sea omiso a la presentación de dos o más declaraciones juradas mensuales, se aplicará una multa correspondiente a un porcentaje de la UIT.

     Al modificar el cálculo de las sanciones de omisos a la presentación de las declaraciones, esas serán proporcionales para los contribuyentes de bajos ingresos.

     De otra parte, existen líneas argumentativas que admiten la retroactividad benigna en materia tributaria sancionatoria, lo que va en contra de lo dispuesto expresamente por la Constitución Política del Perú que dispone la aplicación inmediata de las normas y solo admite la retroactividad benigna en materia penal, por lo que se viene generando controversias que inciden en el retraso del cobro de las deudas. En atención a ello se requiere modificar el artículo 168 del Código Tributario a fin de generar predictibilidad.

e) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta

Se plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:

e.1) Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que correspondan a los directores de sociedades anónimas para cubrir espacios de elusión tributaria.

Se ha detectado que las remuneraciones al directorio se provisionan hasta por el importe límite que señala la Ley del Impuesto a la Renta (6% de la utilidad comercial de la empresa) y se procede a la deducción, no obstante, en muchos casos no se pagan las dietas a los directores.

En atención a ello, se propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta a fin de establecer como requisito a cumplir para la deducción de las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedades anónimas, la exigencia de su pago, de manera que las referidas remuneraciones del directorio podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio; manteniéndose como límite de dicha deducción el 6% de la utilidad comercial.

e.2) Modificar la tasa y señalar reglas para la determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.

El modelo de retenciones con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta de los contribuyentes perceptores de rentas de cuarta categoría, genera acumulación de saldos por regularizar al final del ejercicio que podrían generar riesgo de incumplimiento en el pago y/o mayor carga administrativa para la Administración Tributaria por la atención de solicitudes de devolución o saldos a favor del contribuyente originados por pagos a cuenta y retenciones en exceso; por lo que, el actual diseño de retención del 8% no ha cumplido su objetivo.

Por lo tanto, se propone modificar la tasa y señalar reglas para determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.

e.3) Modificar las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal; así como, modificar las disposiciones sobre los documentos que deben presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos; y las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.

Existe un grupo de contribuyentes que de manera constante efectúan enajenaciones de inmuebles de un ejercicio a otro inmediato, lo que demuestra que existe la posibilidad que estén difiriendo aquellas enajenaciones a fin de no incurrir en habitualidad y así no tener que pagar por dichas operaciones como renta de tercera categoría (tasa del impuesto a la renta de 29,5%), sino como

ganancia de capital como renta de segunda categoría (tasa del impuesto a la renta de 5%).

Por lo tanto, resulta necesario modificar:

- Las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal.
- Las disposiciones sobre los documentos que deben presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos.
- Las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.

e.4) Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención; lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación

Existe riesgo de incumplimiento tributario por diferimiento del pago del impuesto hasta la determinación final del ejercicio al no existir la obligación de realizar pagos a cuenta en el caso de las personas naturales, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliadas en el país, que perciban rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas de valores, no sujetas a retención.

Por ello, se propone regular la obligación de realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta, así como establecer el procedimiento para que las personas naturales, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que perciban rentas de segunda categoría generadas por enajenaciones indirectas de valores, puedan calcular dicho pago a cuenta.

e.5) Modificar la regulación de intereses.

Existe riesgo de incumplimiento tributario respecto de la deducción de los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, debido a que determinadas cargas financieras no han sido consideradas para efectos del límite establecido en la Ley.

En atención a ello, se propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta a fin de regular:

- La definición de "intereses de deuda", así como aquellos supuestos vinculados a las operaciones de financiamiento, como "pagos económicamente equivalentes a intereses" y gastos incurridos en relación con la obtención de financiación; así como el tratamiento de las fluctuaciones cambiarias vinculadas a las operaciones de financiamiento.
- Ajustar la regla del umbral mínimo establecida como excepción a la aplicación de la regla del EBITDA.

- Incorporar precisiones legislativas que resultan necesarias para la adecuada aplicación de la regla del EBITDA.

e.6) Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios

Los Acuerdos Anticipados de Precios (APA) son convenios de derecho civil celebrados entre la Administración Tributaria y los contribuyentes que realicen transacciones en el ámbito de aplicación de precios de transferencia en los que se determina la valoración de dichas transacciones estableciendo la metodología y, de ser el caso, el precio que sustenten dichas transacciones (APA unilateral). Estos también pueden celebrarse con otras administraciones tributarias de los países con los cuales el Perú tiene suscrito un convenio para eliminar la doble tributación (APA bilateral).

Los APA permiten reducir los riesgos de futuras controversias relacionadas a la valoración de transacciones realizadas entre partes vinculadas.

Si bien actualmente la Ley del Impuesto a la Renta regula estos, no se permite que la metodología de valoración y el precio acordado en un APA, pueda aplicarse a transacciones realizadas en ejercicios anteriores no prescritos cuando los hechos y las circunstancias coincidan (aplicación retroactiva). Asimismo, existen otros aspectos de la regulación del APA que requieren ser modificados para facilitar y promover la celebración de estos acuerdos.

Cabe señalar, que la aplicación retroactiva del APA cuando un país tenga un programa de APA bilateral, es una de las medidas del estándar mínimo de la acción 14 de BEPS referido a hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias previstos en los CDI, por lo tanto, el Perú tiene el compromiso de implementar dicha medida al ser miembro del Marco Inclusivo de BEPS de la OCDE.

En atención a ello, se propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta para perfeccionar el tratamiento de los APA.

e.7) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia

El inciso e) del artículo 32- A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala que los precios de las transacciones sujetas al ámbito de precios de transferencia serán determinados conforme a cualquiera de los siguientes métodos internacionalmente aceptados: 1) Método del precio comparable no controlado, 2) Método del precio de reventa, 3) Método del costo incrementado, 4) Método de la partición de utilidades, 5) Método residual de partición de utilidades y 6) Método del margen neto transaccional; para cuyo efecto deberá considerarse el que resulte más apropiado para reflejar la realidad económica de la operación.

Por su parte, el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la LIR, dispone que cuando por la naturaleza y características de las actividades y transacciones no resulte apropiada la aplicación de ninguno de los métodos previstos en los

numerales del 1) al 6), resultará de aplicación otros métodos de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de la LIR.

Respecto de la regulación de los otros métodos a que se refiere el numeral 7) del inciso e) se ve necesario regular parámetros exigidos por el principio de reserva de ley; por lo que, a efectos de garantizar la eficiencia de la norma se requiere perfeccionarla y que reflejen de mejor medida de la realidad económica de operaciones, entre otras, como enajenaciones de acciones o participaciones representativas de capital que no cotizan en Bolsa, enajenación de intangibles, etc.

f) Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de regular el acceso a información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional.

De acuerdo con el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el suministro de información financiera hacia la SUNAT se realiza para dos fines: i) el cumplimiento de tratados internacionales o Decisiones de la CAN y ii) el ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributaria; por lo cual la SUNAT se ve impedida de utilizar la información para su función recaudadora.

Sin embargo, resulta necesario ampliar el uso de la información financiera a que se refiere el artículo 143-A de la Ley N° 26702, a efectos de que la información suministrada por las entidades del sistema financiero pueda ser utilizada por la SUNAT para su función recaudatoria.

En tal sentido, se plantea modificar el artículo 143-A de la Ley N° 26702 para que la información financiera que se reporta a la SUNAT pueda ser utilizada a efectos de sus acciones de cobranza. De esta forma se hace más eficiente la cautela de la deuda tributaria determinada y las acciones de cobro como son las medidas de embargo de cuentas del sistema financiero.

g) Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras



El Perú se encuentra adherido al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales de la OCDE desde el año 2014, habiendo asumido el compromiso de implementar el estándar internacional de intercambio automático de información de cuentas financieras, así como a sujetarse al proceso de monitoreo y revisión de su implementación efectiva (revisión de pares) y efectuar intercambios automáticos de dicha información a partir del año 2020.

En el año 2022 se concluyó la revisión de pares del marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras en el Perú y se han recibido las siguientes recomendaciones:

- Regular una norma antielusiva para contrarrestar los esquemas implementados para eludir los procedimientos de debida diligencia y la obligación de reporte; y
- Establecer una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas que ejercen el control de los mismos cuando presenten una declaración jurada falsa sobre su residencia fiscal u otra información requerida por las entidades financieras sujetas a reportar.

En el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, se está solicitando la pronta implementación de dichas recomendaciones. Por lo expuesto, se propone regular dichas medidas a fin de que el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras esté en línea con el referido estándar internacional, lo que coadyuvará a la lucha contra la evasión tributaria.

h) Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país.

Las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero tienen la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país. Para ello requieren contar con un número de RUC. Por lo expuesto, se propone simplificar los requisitos exigidos para su inscripción en el RUC tales como el vinculado al domicilio fiscal a fin de facilitar el cumplimiento de dicha obligación formal.

i) Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31.12.2023.

Los ingresos tributarios durante el 2023 se redujeron en 6,7%. Asimismo, durante el mes de marzo del 2024, según información de la SUNAT, se ha recaudado S/ 3 536 millones menos en ingresos, con lo cual el primer trimestre del 2024 cierra con un retroceso del 10,4%.

Sin embargo, existe un gran volumen de deuda que no puede ser cobrada debido a que se encuentra pendiente de resolución en las diversas instancias del procedimiento administrativo o judicial (en especial en instancia de apelación ante el Tribunal Fiscal).

Asimismo, considerando que la SUNAT tiene recursos limitados, no le es posible auditar a la totalidad de los contribuyentes; por lo que, se requiere permitir a estos a regularizar voluntariamente su adeudo, así como la subsanación de declaración y pagos respectivos.

En ese sentido, se propone regular el Fraccionamiento Especial para permitir el pago de las deudas administradas por la SUNAT que constituyen ingresos del

Tesoro Público, a través del fraccionamiento y/o aplazamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- El Fraccionamiento Especial considera las deudas administradas por la SUNAT que constituyen ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, no incluye retenciones de ONP y EsSalud, ni tampoco aquellas deudas por retención o percepción.
- Se otorga un descuento si el pago de la deuda acogida fuese al contado en cuanto a los componentes de la deuda distintos del insoluto y anticipo.
- En el caso del pago fraccionado se otorgaría un Bono de Descuento a la deuda acogida (sobre intereses, actualización con el IPC, multas y sus respetivos intereses y actualizaciones), en función del nivel de deuda.
- El plazo máximo de fraccionamiento sería entre 6 a 10 años, con una cuota inicial no menor al 5% de la deuda materia de acogimiento.
- La tasa de interés del fraccionamiento sería menor que la prevista para el fraccionamiento a que se refiere el artículo 36 del Código Tributario.
- Se excluiría del ámbito de aplicación del Fraccionamiento Especial a los sujetos con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por delito tributario y aduanero, sujetos comprendidos en alcances de Ley N° 30737, sujetos en liquidación o proceso concursal, Sector Público Nacional (con excepción de la actividad empresarial).
- Del mismo modo se excluirá aquella deuda cuyo importe se encuentra a disposición de la SUNAT, sea porque se cuenta con un pronunciamiento firme o consentido, así como porque está en ejecución un embargo o carta fianza o un mandato de pago a favor de dicha entidad.

II.8. En materia de política criminológica y penitenciaria

II.8.1 Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas al uso de la tecnología digital.

La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una problemática social muy grave, que se desarrolla en diversos ámbitos, de diversas maneras y en espacios públicos como privados.

El Estado peruano sostiene su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, manifestado a través de la suscripción, ratificación/adhesión e implementación de tratados internacionales, la adopción de normas internas y la elaboración/implementación de políticas públicas e intervenciones orientadas a la erradicación de dicho problema.

La presente norma se orienta a continuar con el objetivo mencionado a través de la sanción de la difusión no autorizada o amenaza de difusión de material con contenido sexual elaborado o modificado con tecnologías digitales.

Igualmente, busca sancionar la difusión de material con contenido sexual obtenido sin anuencia de la persona que aparece en dicho material con contenido sexual.

Estas conductas, que aún no se encuentran criminalizadas vulneran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y se enmarcan en el fenómeno de la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías digitales. Una de las modalidades de violencia ejercida sobre las mujeres se lleva a cabo a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

De manera global, en un estudio de 2015 de la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se señalaba que 73% de mujeres habían vivido alguna forma de violencia de género en línea y que, en el 61% de estas situaciones, los atacantes eran hombres.

En relación con la violencia y las TIC que sufren las mujeres, el Programa Nacional AURORA, de enero a diciembre del 2023 a través de los Centros de Emergencia Mujer -CEM ha atendido 71 casos, de los cuales el 98.6% son mujeres, esto es 70 mujeres1. Por otra parte, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, de las 566 alertas de acoso virtual reportadas en el año 2022, en el 90% de los casos, las víctimas fueron mujeres.

A través de la plataforma No al Acoso Virtual del MIMP, en el año 2019 se registró 34 alertas de acoso virtual en niñas, niños (1) y adolescentes (33), en el año 2020 se reportaron 112 alertas de acoso virtual en niñas, niños (2) y adolescentes (110), en el año 2021 se dieron 73 alertas en adolescentes. En el año 2022, 27 alertas de acoso en adolescentes y en el año 2023 un total de 24 alertas en este mismo grupo etario, aunque los casos aparentemente, se ha mantenido en los dos últimos años se debe tener en cuenta que no todas las personas menores de edad llegan a comunicar este tipo de hechos habiendo por lo tanto un subregistro al respecto.

Sin embargo, considerando su interés superior y la protección especial que merecen se requiere medidas para su protección en todos los espacios en los que se desarrollan incluido el entono digital.

El proyecto de decreto legislativo consta de dos artículos, el primero de ellos referido al objeto y finalidad de la norma, disponiendo modificar el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de sancionar la difusión no autorizada o amenaza de difusión de material con contenido sexual elaborado o modificado con tecnologías digitales y la difusión de material con contenido sexual obtenido sin anuencia. Respecto al artículo segundo, se dispone la modificación de los artículos 154-B y 176-C del Código Penal.

A través de las disposiciones que se señalan en el siguiente cuadro se proponen las siguientes modificaciones al Código Penal:

"Artículo 154-B.- Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual El que, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales, audios

con contenido sexual, incluidos aquellos que tienen la apariencia de fotografías, videos o audios reales, o han sido elaborados o modificados con tecnologías digitales, de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de tres años y con diez a noventa días-multa.

Si las imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual referidos en el párrafo anterior fueron obtenidos con anuencia de la persona, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cinco años y con treinta a ciento veinte días-multa.

La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta, cuando, además del supuesto descrito en el segundo párrafo, concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, son o han sido convivientes o cónyuges.
2. Cuando para materializar el hecho utilice redes sociales o cualquier otro medio que genere una difusión masiva."

Artículo 176-C.- Chantaje sexual El que amenaza o intimida a una persona, por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36. La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36, si para la ejecución del delito el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que esta aparece o participa. La pena prevista en el párrafo anterior también se impone al agente que amenaza con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual o que tienen la apariencia de fotografías, videos o audios reales y han sido elaborados o modificados con tecnologías digitales. La pena privativa de libertad es no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior la persona afectada tenga menos de 18 años de edad.



Las propuestas de modificación al Código Penal siguen los siguientes ejes: (i) sancionar la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual obtenidos sin anuencia de la persona que allí aparece; (ii) incluir las imágenes o materiales audiovisuales con contenido sexual que tienen la apariencia de fotografías o videos reales y han sido elaborados o modificados con tecnologías digitales en la prohibición penal de difusión y de chantaje sexual;

e (iii) incorporar el término de violencia facilitada por las tecnologías digitales en el Código Penal.

Respecto al art 154-B se propone que el nuevo texto del artículo contenga, en el primer párrafo, la conducta base de difusión de imágenes u otro material íntimo sin establecer la distinción entre si fue obtenido con anuencia o no, incluido aquel material que tienen la apariencia de fotografías, videos o audios reales, o han sido elaborados o modificados mediane el uso de tecnologías digitales como viene ocurriendo actualmente al emplearse la inteligencia artificial para la comisión de muchas actos delictivos.

La conducta base toma en consideración aquellos casos en que terceras personas vuelven a compartir el material (la segunda, la tercera y las siguientes personas que contribuyen en la cadena de difusión, induciendo de esta manera la revictimización de la persona agraviada). En ese sentido, establecer la pena distinta para la conducta base que menoscaba el bien jurídico protegido "intimidad sexual" realizada por terceros a quienes llega la información sexual privada y siguen propagándola resulta proporcional frente a la pena que debe aplicarse al autor quien realice los verbos rectores y cuente con la anuencia de su víctima, así como a la que se aplique a su cómplice quien auxilie al autor a realizar estas conductas. Por ello, se propone una pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de tres años y con diez a noventa días-multa.

El segundo párrafo sanciona las conductas típicas del delito que son el difundir, revelar, publicar, ceder o comercializar, verbos que son elementos descriptivos del tipo y donde el sujeto activo que puede ser cualquiera persona (hombre o mujer) haya obtenido con anuencia de la víctima el material de connotación sexual. Para tal conducta se propone la pena que actualmente el Código Penal tipifica y sanciona en el 154-B, considerando que la anuencia de la víctima sobre la posesión o producción del material agrava su difusión por parte del sujeto activo constituyendo también un agravante del tipo, pues hay un abuso de confianza o situación de poder. La determinación de las penas, tanto para la conducta base, como la que se realiza con la anuencia de la víctima toma en consideración el Principio de Proporcionalidad de las sanciones, contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal.

Finalmente, el tercer párrafo relativo a los agravantes mantiene la redacción del actual segundo párrafo, aunque limitando su aplicación a los supuestos en que el material fue obtenido con anuencia, la propuesta ha considerado pertinente incluir, tanto en el artículo 154-B como en el 176-C, la expresión "imágenes o materiales audiovisuales con contenido sexual que tienen la apariencia de fotografías o videos reales y han sido elaborados o modificados con tecnologías digitales", a fin de hacer frente a las nuevas amenazas que presentan las tecnologías emergentes.



Tratándose de las niñas, niños y adolescentes que están más expuestos y vulnerables a esta problemática, se ha considerado necesario que en respuesta a su protección reforzada que se les debe brindar por su edad, la pena para este delito se agrave cuando afecte a este sector de la población

II.8.2 Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario, regulando las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de

telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

El aumento de las actividades delictivas relacionadas con las comunicaciones ilegales desde las cárceles se evidencia en los datos proporcionados por OSIPTEL. Estos datos muestran un incremento en los cortes de servicio y/o bloqueo de terminales móviles realizados por las empresas operadoras entre 2021 y 2024, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 006-2011-JUSM. Se reporta un total de 44,594 casos en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Por ejemplo, el EP Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, ha registrado la mayor cantidad de casos reportados por las empresas operadoras, con un total de 4502 casos. Le siguen el EP de Tarapoto con 4036 casos y el EP de Lurigancho, también ubicado en San Juan de Lurigancho, con 3587 casos, entre otros.

Estos datos no se condicen con la cantidad de celulares incautados en las requisas realizadas por el INPE. Por ejemplo, en el caso del EP Miguel Castro Castro, en un período aún más amplio que abarca desde 2015 hasta 2023, solo se han registrado 3277 celulares incautados.

Para enfrentar este desafío, se han implementado diversas acciones y medidas, entre las cuales se encuentra la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, conforme al Decreto Supremo Nº 012-2012-MTC. No obstante, estas medidas han resultado insuficientes por diversas razones, entre ellas debido a la presencia de antenas ilegales que logran evadir los bloqueadores, así como a casos de corrupción dentro del personal penitenciario, que pueden facilitar la elusión de estos dispositivos. Además, los bloqueadores carecen de la capacidad para identificar qué dispositivos fueron bloqueados, lo que limita su efectividad.

En este sentido, es evidente que esta problemática sigue siendo un desafío vigente que requiere una respuesta integral y coordinada entre los diferentes actores involucrados, incluidos los organismos gubernamentales del sector de justicia e interior, la administración penitenciaria y las empresas operadoras de telecomunicaciones. Es necesario que estas últimas asuman un papel más activo en este proceso para combatir eficazmente las comunicaciones ilegales desde las cárceles y contribuir a mejorar la seguridad pública en general.

Asimismo, a pesar de las normas vigentes que imponen obligaciones a las empresas operadoras de telecomunicaciones para prevenir las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios, aún no se han establecido sanciones civiles y administrativas por su incumplimiento. Además, no se ha considerado la imposición de obligaciones y sanciones a los operadores de servicios de Internet, que no siempre son las mismas empresas de telecomunicaciones que brindan estos servicios. Es crucial establecer nuevas obligaciones, como proporcionar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario acceso a la localización o geolocalización de los dispositivos que utilicen su red dentro de los establecimientos penitenciarios, entre otras medidas que serán materia de sustento en la propuesta normativa.

En consecuencia, con el fin de consolidar todas las obligaciones y sanciones aplicables a los operadores de telecomunicaciones en un único marco normativo y evitar la dispersión de disposiciones de similar naturaleza, resulta imperativo promulgar una norma con rango de ley al respecto. Esto garantizará que dichos operadores cumplan con sus obligaciones para prevenir las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios, destacando la prohibición de emitir señales dentro y sobre dichos establecimientos.

II.8.3 Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.

Después de 12 años y tras 25 sesiones celebradas a la fecha, se elaboró un balance del funcionamiento del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), dentro del cual se advirtió las siguientes dificultades: i) Dificultades técnicas en materia de intervención político criminal relacionada con la distinción entre seguridad ciudadana y política criminal, lo cual repercute en los alcances funcionales del CONAPOC; ii) Necesidad de organicidad y posicionamiento del CONAPOC para ampliar su capacidad de coordinación y acción sobre todas las instituciones estatales involucradas en temas de prevención y control de los fenómenos criminales a nivel nacional; y, iii) Importancia de incluir herramientas de monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones implementadas para la prevención y control de la criminalidad; así como herramientas de gestión del conocimiento criminológico, a fin de brindarle eficacia al cumplimiento de todas las políticas del Estado en esta materia.
Esta medida no irrogará gastos adicionales al Estado, en tanto las medidas que se proponen serán implementadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, la cual ejerce la Secretaría Técnica de dicho colegiado.

II.8.4 Modificar el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria



Con la dación del Decreto Legislativo N° 1328, se dictaron medidas que buscaban fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional; entre ellas, el reemplazo del Consejo Nacional, máximo órgano de dicha institución, por un Consejo Directivo, integrado por representantes de diversos sectores. Sin embargo, han transcurrido 7 años desde la emisión de dicha norma y el reemplazo del Consejo Nacional por el Consejo Directivo no se ha implementado. Ello en función a que INPE requiere de una autoridad con una capacidad de toma de decisiones célere y cuya ejecución sea expedita. En ese sentido, se busca que la unidad organizacional que dirija al INPE esté a cargo de una jefatura y no de un órgano colegiado como lo dispone el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1328, a fin

de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria.

II.8.5 Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena

La urgencia y necesidad de regular dicha materia radica en que, pese a la condición de especial vulnerabilidad de la víctima, en el ordenamiento jurídico penal no se observa ninguna protección especial por dicha condición, lo que conlleva a que los atentados contra la vida e integridad de los defensores indígenas sean abordados como casos comunes. Ello dista de lo señalado en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU en torno al deber de los Estados de adoptar medidas legislativas que aseguren el goce efectivo de los derechos y libertades de las personas defensoras (artículo 2, literal b).

La situación de especial vulnerabilidad de estas personas se debe en gran medida a que su labor de defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas colisiona con intereses económicos de agentes vinculados con actividades ilícitas e informales como la minería ilegal, tala ilegal o el narcotráfico, mayoritariamente presentes en territorios indígenas.

Como muestra de ello, la Defensoría del Pueblo informó en su Cartilla Informativa sobre los Mecanismos de Protección para personas defensoras indígenas y ambientales de la Amazonía (2022) que, durante el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, al menos diez (10) defensores indígenas han sido víctimas de asesinato en el Perú. Dicha situación de riesgo continúa latente hasta la fecha.

II.8.6 Modificar el Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar y reconocer enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.



El incremento en la participación e involucramiento de adolescentes en actividades delictivas representa un serio problema para la sociedad peruana, teniendo en cuenta el actual contexto donde la violencia y la criminalidad vienen alcanzando niveles que representan una seria preocupación por parte de las entidades estatales, así como de la ciudadanía. El proyecto de modificación busca incrementar la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, e impactar positivamente en la reducción de la incidencia delictiva de aquellos que han incurrido en infracciones de alta lesividad y presentan perfiles de alta complejidad.

En el año 2017, se aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA) proponiendo una reforma de la justicia penal juvenil con un modelo de justicia especializada, garantista, restaurativa, diferenciada, de intervención mínima y de carácter acusatorio. Lamentablemente, desde esa fecha hasta actualidad, el CRPA sólo se ha implementado la parte relativa a la ejecución de las medidas socioeducativas, quedando pendiente la parte procesal; esta situación impide brindar una respuesta integral y efectiva a la delincuencia juvenil que se incrementa cada día.

II.8.7 Modificar la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y normas conexas, con el propósito de ampliar su alcance para abarcar todas las formas de delincuencia organizada, incluyendo las modalidades emergentes, que operan en nuestro territorio nacional, así como para establecer agravantes especiales y fortalecer el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) y demás herramientas que permitan hacer frente de manera más efectiva a la amenaza que representan este fenómeno criminal para la seguridad pública.

El 20 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Ley N° 30077-Ley contra el Crimen Organizado la cual significó un avance en la lucha contra el crimen organizado debido a que contiene normas referidas a técnicas especiales de investigación, medidas limitativas de derechos y cooperación judicial internacional.

En efecto, la Ley N° 30077 dispone en su Primera Disposición Complementaria Transitoria "la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para todos los delitos previstos en el artículo 3° cometidos por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma".

Así, es importante considerar el contexto en el cual se emitió la ley, por ejemplo, aún no se había culminado la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional y no existía en el ordenamiento penal interno el tipo penal de "organización criminal" (artículo 317), sino el delito de "asociación ilícita para delinquir". Efectivamente, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1244, publicado el 29 octubre 2016, se modificó el artículo 317 del Código Penal y se incorpora el delito de "organización criminal". Asimismo, el 317-B creando el tipo penal de "Banda Criminal".

Sin embargo, existen algunos elementos del tipo penal de organización criminal (artículo 317) que colisionarían con la definición de "organización criminal" comprendida en el artículo 2 de la Ley N° 30077, con lo cual se hace necesario modificar la Ley de Crimen Organizado en sus artículos 1 y 2 en tanto que la norma no es únicamente una norma de carácter procesal, sino que también contiene elementos sustantivos como por ejemplo categorías de autoría y participación.

En tal sentido, se propone actualizar la Ley 3007, a efectos de **definir, que es una organización criminal y los criterios para su determinación**; **las distintas formas de autoría y participación, así como** fijar las reglas y

procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento, y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.

II.8.8 Dotar de mayor protección a los titulares del derecho de autor en relación a la reproducción, distribución, comunicación pública o difusión no autorizada de las obras, y sus formas agravadas

La industria vinculada al Derecho de Autor y los derechos conexos es una fuente de ingresos para el país, fruto de los tributos que se deben pagar.

Es una realidad que las diversas industrias creativas invierten tiempo y dinero en el desarrollo de los distintos bienes que ponen en el mercado, dentro de los que se encuentran por ejemplo los textos literarios, las obras musicales, las obras audiovisuales, software, obras multimedia, las obras teatrales, etc., los cuales contribuyen al desarrollo no solo cultural y educacional, sino también económico.

En atención a ello existe, tanto a nivel nacional como internacional, legislación en materia de Derecho de Autor que concede el derecho a la explotación o utilización exclusiva de la creación a favor del titular del derecho por un periodo determinado, como la forma idónea para promover e incentivar a los autores y las industrias relacionadas a la creatividad a seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevas obras.

Sin embargo, ello por sí solo no es suficiente, pues es necesario establecer un adecuado sistema punitivo que sancione la explotación o uso no autorizada de las obras y que sea a la vez suficientemente disuasivo.

Uno de las conductas más lesivas y perjudiciales a los intereses de los titulares del Derecho de autor es la "piratería", entendida como la obtención de copias no autorizadas de obras de propiedad intelectual que realizan personas y organizaciones de carácter delictivo generándoles a estos, grandes ganancias ilícitas. Constituye un tipo de criminalidad con impacto negativo en la promoción de la creatividad y en el desarrollo de expresiones culturales, desalentando la inversión, que en suma afecta seriamente a la sociedad y al país, desde el punto de vista económico, político, social, jurídico y constitucional en la medida que desconoce derechos fundamentales de los titulares de los derechos de autor y conexos.

La piratería representa sin duda una cuestión problemática de alcance internacional, no sólo se da en el país sino en todo el mundo, y su génesis se encuentra precisamente en los vacíos legales o en todo caso en la falta de mecanismos legales eficaces en su persecución, y que generan impunidad que promueve su crecimiento, lo que afecta directamente a titulares de derechos de autor y su explotación comercial a través de la industria cinematográfica, musical, informática, literaria, entre otras.

Actualmente, uno de los mercados más afectados por este tipo de conductas es, entre otras, el mercado audiovisual, en particular el de las obras cinematográficas, generalmente recién estrenadas, las cuales son reproducidas (fijadas) durante su exhibición en las salas de cine sin contar para ello con la

autorización correspondiente del titular de la obra (práctica comúnmente conocida como *"camcording"*).

Este acto de reproducción o fijación de una obra audiovisual, por lo general recién estrenada, durante su exhibición en salas de cine, permite a quien lo realiza, obtener una copia a partir de la cual se puede conseguir ejemplares de la obra, las cuales luego son comercializadas en el mercado, ocasionando de este modo pérdidas significativas a la industria del cine: reducción de asistentes a las salas de cine, pérdida de valor comercial de la obra en los demás medios de difusión (Internet, cable, etc.).

Si bien en la actualidad existe una gran variedad de formatos para comunicar públicamente una obra cinematográfica (streaming, televisión de paga, descargas en internet, etc.), la exhibición en las salas de cine es la principal fuente de ingresos, sobre todo en la etapa inicial de lanzamiento.

La grabación se puede dar a través de dispositivos de uso cotidiano, como es el caso de los teléfonos celulares, que permiten obtener videos de muy buena calidad, los que quedan almacenados en la memoria del equipo, e incluso pueden ser transmitidos a través del Internet.

Inicialmente, esta conducta sólo comprendía la reproducción no autorizada de la obra cinematográfica para su posterior comercialización en soportes físicos (piratería); sin embargo, dicha actividad se ha extendido a la transmisión no autorizada de la obra, vía Internet, a cualquier lugar o sitio web, donde puede ser descargada por terceros.

Actualmente, la reproducción o fijación no autorizada de las obras cinematográficas, generalmente las recién estrenadas, es una actividad sancionable tanto en sede administrativa como judicial (ámbito penal).

En el ámbito administrativo, el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor, considera como infracción sancionable cualquier acto de reproducción, distribución y comunicación al público no autorizada por el titular del derecho, siendo la responsabilidad de carácter objetivo.

En el ámbito judicial, para el actual artículo 218 del Código Penal, tal como está redactado, el acto de "reproducir" (fijar) para el caso de una obra audiovisual, generalmente recién estrenada, se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 218 literal b), exigiendo el tipo penal - tal como está redactado -, demostrar que aquél que realiza dicha actividad lo hace con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica.

Sin embargo, demostrar o acreditar que la persona que es captada (y capturada) reproduciendo (fijando) en todo o en parte una obra cinematográfica, desde una sala de cine, mientras esta se está exhibiendo, lo hace con fines lucrativos, ha venido resultando de difícil probanza para las autoridades.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

II.9. En materia de desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay

II.9.1. Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados, así como la implementación de los instrumentos de gestión del suelo, impulsando el cierre de brechas en vivienda e infraestructura urbana para fortalecer la planificación de las ciudades y centros poblados, en especial de los centros poblados rurales, así como impulsar los instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades.

Actualmente la norma vigente no contempla un instrumento de planificación de los centros poblados rurales que permita abordar un desarrollo sostenible y eficiente de los mismos. Es así que estas zonas suelen enfrentar desafíos únicos en términos de acceso de servicios básicos, oportunidades económicas y de desarrollo de infraestructura, por lo que es necesario contar con un instrumento de planificación que aborde estas necesidades específicas acordes con su realidad. Asimismo, es necesario precisar diversos instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento urbano incluidos en la norma, los cuales a la fecha brindan mayores cargas urbanísticas que beneficios urbanísticos, los cuales pueden ser percibidos de manera negativa.

En ese sentido, la propuesta normativa precisa y fortalece diversos instrumentos de gestión del suelo tales como el reajuste del suelo, integración inmobiliaria, zonas especiales de interés social, zonificación inclusiva, carga de conservación, entre otros, a fin de hacerlos más eficientes y atractivos tanto para el sector público como para el privado para el desarrollo de proyectos urbanísticos. En el caso de la captura del incremento del valor del suelo, se han modificado los hechos generadores y la exigibilidad del pago, el cual incluye no solo el pago en efectivo sino el aporte o permuta de terreno con igual o mayor valor comercial al porcentaje determinado a fin de no limitar las opciones de captura; ampliándose, además, los fines de esta captura al desarrollo de Viviendas de Interés Social, financiamiento de obras de agua y saneamiento, espacios públicos e infraestructura de movilidad.

Por lo mencionado anteriormente, la propuesta modificatoria es necesaria a fin de fortalecer los instrumentos de planificación urbana y rural, de gestión del suelo y de financiamiento urbano necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país.



II.9.2. Autorizar que se establezca disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos

priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.

El proyecto normativo tiene como propósito realizar una intervención integral y articulada entre todos los sectores involucrados, centralizar los recursos y facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros proyectos de interés público, en respuesta a la deficiente planificación urbana que limita el desarrollo e implementación de los proyectos de inversión pública y privada en dicho ámbito.

II.10. En materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de Inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital

II.10.1 Modificar el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno .

En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1095 no regula apropiadamente algunas cuestiones jurídicas relevantes en materia de acciones militares. Así, dicha norma no define cuando la "capacidad de la Policía [resulta] sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera" (Arts. 4.3 y 23.d). Igualmente, resulta problemática la aplicación del Título III del D.L. N° 1095, dado que los ámbitos de actuación de dicho título (señalados taxativamente en el Art. 23 del D.L. N° 1095), podrían encontrarse incluidos en el escenario general del Título II del D.L. N° 1095 ("control del orden interno"). En consecuencia, resulta necesario modificar el D.L. N° 1095, a fin de garantizar, con carácter general, la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.

II.10.2 Establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional

Enfoque de gestión integral de la migración: La OIM promueve un modelo de gestión migratoria que aborda todas las dimensiones y aristas del fenómeno, incluyendo la evaluación de riesgos asociados, desde una perspectiva de derechos humanos, sostenibilidad y cooperación internacional. Este modelo técnico respaldaría la propuesta peruana.

Enfoque de interoperabilidad e intercambio de información: Iniciativas globales como el Programas sobre seguridad y gestión de fronteras de Naciones Unidas y la estrategia de INTERPOL sobre delitos contra migrantes, enfatizan la necesidad de desarrollar mecanismos interoperables e intercambio eficiente de

información e inteligencia a nivel nacional e internacional para una evaluación efectiva de riesgos migratorios transnacionales.

II.10.3 Dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios e inmuebles de propiedad, afectados en uso, reservados para fines de Defensa Nacional y en posesión de las Instituciones Armadas, que han sido destinados para fines de Seguridad y Defensa Nacional y cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico social y en la defensa civil.

Durante los últimos años las Instituciones Armadas han perdido la titularidad sobre muchos de los predios e inmuebles a su cargo, con las consecuencias que ello conlleva, tales como la desarticulación de instalaciones militares en las cuales por su carácter estratégico se llevan a cabo acciones de Inteligencia y contrainteligencia, afectándose de esta manera la Seguridad y Defensa Nacional, la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como la participación de las referidas Instituciones Armadas en el desarrollo económico social y en la defensa civil; por lo que existe la imperativa necesidad de que los referidos predios e inmuebles, por su carácter estratégico, tengan la condición de intangibles a través de una norma con rango de ley, para que sea oponible ante las pretensiones por parte de terceros, la misma que no requiere presupuesto del Tesoro Público.

En lo que respecta a la normativa especial del Sector Defensa, vinculada a la materia inmobiliaria, si bien se cuenta con el Decreto Supremo N° 024-DE-SG1, que declara que los inmuebles afectados en uso o de propiedad de las Fuerzas Armadas son intangibles, inalienables e imprescriptibles y tienen el carácter de reservado; el Decreto Supremo N° 032-DE-SG2, que establece que los bienes inmuebles reservados para los Institutos Armados o para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con fines de seguridad y Defensa Nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles por su carácter estratégico; cabe anotar que a consecuencia de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, algunos predios de las Instituciones Armadas se vieron afectados; motivo por el cual, se hace necesario contar con una norma con rango de ley que garantice su condición de intangibles.

II.10.4 Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
D.G. de Política Macroeconómica y Descent. Fiscal

El SIDENA requiere de una entidad pública para la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de sus componentes al interior del Sistema en todo el territorio nacional con la autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica. La entidad gestora del SIDENA por disposición expresa del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional, es la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), cumpliendo un rol esencial sobre el funcionamiento del COSEDENA, Ente Rector del sistema funcional. Sobre esa base, la SEDENA es responsable de la formulación y propuesta al COSEDENA de la Política de Seguridad y Defensa Nacional y sus correspondientes instrumentos (Estrategia, Planes Estratégicos, Directivas Nacionales, Programas y Proyectos Especiales de Seguridad y Defensa Nacional, entre otros) para contrarrestar a las amenazas y preocupaciones a la Seguridad Nacional. La Política de Seguridad y Defensa Nacional y sus instrumentos son el reflejo del esfuerzo integral del Estado mediante la participación articulada de las entidades componentes del SIDENA, como la DINI en los asuntos de Inteligencia y Contra Inteligencia, la PCM para los asuntos de la Seguridad Digital y Conflictividad Social, entre otros. Esta entidad gestora también cumple las funciones de Secretaría del COSEDENA, proporciona el apoyo y el soporte técnico-funcional para el funcionamiento de las sesiones y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo. Si bien el Decreto Legislativo N° 1131, creó a la SEDENA como organismo público asdcrito a la PCM, posteriormente, se emitió el DS 061-2016-PCM, que dispuso la fusión por absorción de la SEDENA al Ministerio de Defensa, originando la extinción del mencionado organismo público. En la actualidad, como consecuencia de la fusión por absorción de la SEDENA al MINDEF, quien se encarga de la gestión del SIDENA es una Unidad Funcional (UGESIDENA), de naturaleza temporal y con limitaciones para cumplir los propósitos antes señalados, lo cual impacta desfavorablemente en la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional. En adición a ello, se debe tomar en cuenta que mediante Ley N° 31702, se ha dispuesto la adscripción de la SEDENA a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en atención al rol de articulación que cumple sobre los componentes del Sistema; no obstante, la referida Ley no ha considerado que dicha entidad, concebida inicialmente como organismo público, se encuentra extinta; por lo que, a efectos de implementar adecuadamente los alcances de la referida Ley, resulta indispensable que se emita una norma con rango de Ley que disponga nuevamente la creación de la SEDENA como organismo público ejecutor adscrito a la referida Presidencia. En ese contexto, el Poder Ejecutivo requiere facultades delegadas para legislar en materia de fortalecimiento de la gestión del SIDENA con el objeto de expedir un decreto legislativo que apruebe la creación del mencionado organismo público, teniendo en consideración que la existencia de dicha entidad es fundamental para el adecuado funcionamiento del COSEDENA y la gestión eficiente del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos



II.10.5 Modificar las normas que regulan la organización, competencias y funciones de las Fuerzas Armadas, con el objeto de incluir la competencia

en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura de cada una de ellas.

La existencia de las entidades de las Fuerzas Armadas en Ciberdefensa, a través de la modificación e incorporaciones en sus leyes, impacta en el cumplimento de la misión del Comando Operacional de Ciberdefensa del CCFFAA, lo que permite cumplir con la Ciberdefensa y protección en el ciberespacio de los activos críticos nacionales y recursos claves, cuando la capacidad de protección de sus operadores y/o del sector responsable de cada uno de ellos y/o de la Dirección Nacional de Inteligencia sea sobrepasada, a fin de mantener las capacidades nacionales, en el ámbito de la seguridad nacional y así como actuar frente a amenazas o ataques realizados en y mediante el ciberespacio cuando estos afecten la seguridad nacional.

II.10.6 Establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Del análisis realizado por este Organismo, se han identificado llamadas que ingresan a través de las rutas internacionales y que, en lugar de mostrar como número llamante a un número internacional (con código país de origen), muestran un número local (fijo o móvil).

Este enmascaramiento se produce en centrales virtuales que pueden operar dentro y fuera del ámbito nacional, y que se interconectan de manera indirecta[14] con las centrales peruanas, con la finalidad de hacerse pasar por alguna empresa nacional para gestionar fraudes. Un escenario similar ocurre con las llamadas generadas a través de aplicativos móviles que permiten, a través de un pago, configurar el número que aparecerá como número llamante.

OSIPTEL ha analizado diferentes alternativas para coadyuvar a brindar soluciones efectivas a la problemática antes descrita, la cual viene afectando a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones del país.

En esa línea, con el ánimo de propiciar alternativas de solución, proponemos que se establezca en la Ley de Telecomunicaciones la prohibición de envío de mensajes y llamadas fraudulentas en las redes de telecomunicaciones y uso adecuado de la numeración. En ese sentido:



1 Las empresas que envían tráfico con origen nacional deberán garantizar la validez del "número origen" de la comunicación, a fin de que las comunicaciones sean trazables y permitan identificar al usuario que realiza la comunicación.

2. Constituye uso indebido del servicio el envío de mensajes o la realización de llamadas con contenido fraudulento. El uso indebido del servicio es

[14] A través de operadores de otros países que tienen contratos de interconexión con los operadores peruanos.

causal de terminación del contrato, según las disposiciones que emita el OSIPTEL.

3. Los concesionarios de los servicios portadores locales, larga distancia nacional e internacional deben bloquear el tráfico destinado a las redes de los servicios fijos y móviles cuando se identifique el enmascaramiento, la supresión o modificación de la llamada entrante, en formatos distintos a los establecidos en el Plan Técnico Fundamental de Numeración.

Es importante resaltar que, las prácticas que involucran una indebida utilización de la numeración y su apropiación, es una preocupación internacional, en tanto generan repercusiones desfavorables para la seguridad de los usuarios. En efecto, en el Perú se viene identificando casos de usuarios cuyo número móvil es utilizado para enmascarar este tipo de llamadas que se realizan de forma masiva. Dicha situación los perjudica al ser víctimas de este "robo" de numeración que genera que sean contactados y reciban quejas de las personas que no solicitaron o autorizaron recibir tales llamadas[15].

Así, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Resolución N° 65 del 2022[16] ha desarrollado lineamientos para hacer frente a la "comunicación del número de la parte llamante, identificación de la línea llamante e información sobre la identificación del origen", instando a sus miembros a "considerar la posibilidad de elaborar, dentro de sus arcos jurídico y reglamentario nacionales, directrices u otro tipo de instrumentos" para la aplicación de dicha resolución.

Por su parte, la Comisión Federal de Comunicaciones[17] de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación sobre este tipo de prácticas y similares, estableciendo reglas para evitar y bloquear las llamadas automáticas "ilegales" que se originan en el extranjero, buscando mitigar su ingreso a las redes telefónicas estadounidenses.

II.10.7 Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.



Actualmente se encuentra vigente el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM que aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales, en el cual se establecen ciertas funciones a cumplir por diferentes instancias del Poder Ejecutivo que no se encuentran en sus respectivas leyes de creación o en su Reglamento de Organización y Funciones; por ello, se requiere de una norma con rango de ley que actualice,

---

[15] A manera de ejemplo se puede citar el caso del señor García Ordinola respecto del cual, en el transcurso de una semana se realizaron más de 1200 llamadas empleando su número móvil, y recibió cientos de llamadas telefónicas, mensajes de texto SMS y mensajes vía Whatsapp, en los que, desde diferentes números móviles, le consultaban el motivo por el cual desde su número móvil se estarían realizando llamadas que se cortan. Esta situación ha generado un gran malestar en el referido abonado, quien ha visto expuesto su número móvil hacia terceros.

[16] Referencia: https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.65-2022-PDF-S.pdf

[17] Referencia: https://www.fcc.gov/spoofed-robocalls

integre y precise dichas funciones sobre la base del texto del precitado reglamento. Adicionalmente, se aprovechará para modificar el contenido de ciertas definiciones y otros vacíos encontrados en el reglamento.

II.10.8 Modificar el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, también pueda acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación.

Actualmente el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, sólo permite a la Policía Nacional del Perú el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) a través de sus componentes también requiere acceder a los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, los cuales le servirán de insumo para brindar la inteligencia necesaria para hacer frente a diferentes amenazas contra la seguridad nacional.
Para hacer frente a las diferentes amenazas contempladas dentro del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) requiere contar con medios tecnológicos que le permitan acceder a información necesaria para la producción de inteligencia.

III. ANÁLISIS IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/0 CUALITATIVOS DE LA NORMA

La propuesta normativa plantea una serie de materias y ejes que permitirán emitir normas con rango de ley enfocadas en abordar y atender los principales problemas identificados en relación con materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos; mejora de la calidad de la inversión pública; fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado; reducción de costos de transacción; acceso y competencia en servicios financieros; equilibrio fiscal; modernizar el sistema tributario; política criminológica y penitenciaria; desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay; y en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

Cabe mencionar que el presente proyecto de ley ha incurrido en costos a nivel administrativo relacionados con el personal involucrado en su formulación. No obstante, estos costos se encuentran ampliamente compensados por los beneficios que se obtendrán una vez que la ley sea publicada y los decretos legislativos derivados de ella sean aprobados; debido a una mejora en las

garantías institucionales para el orden público, el orden interno, la seguridad ciudadana y la prevención contra riesgos de desastres.

De esta manera, se lograrán implementar medidas a corto, mediano y largo plazo destinadas a impulsar la reactivación económica, fortalecer los principales ejes en materia de simplificación y calidad regulatoria de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos; mejora de la calidad de la inversión pública; fortalecimiento de la actividad empresarial del estado; reducción de costos de transacción; acceso y competencia en servicios financieros; equilibrio fiscal, reforzamiento del tribunal fiscal; modernizar el sistema tributario; política criminológica y penitenciaria; desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay y en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

IV. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La propuesta en mención se realiza conforme a lo previsto por el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 101 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, lo establecido en el inciso d) del numeral 1 del artículo 76 y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

V. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE

En virtud al numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, la presente norma se considera excluida del alcance del AIR Ex Ante, puesto que no establece, incorpora o modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

Asimismo, la presente norma, que delega facultades para que el Poder Ejecutivo legisle, se encuentra excluida del Análisis de Impacto Regulatorio, en el marco de lo previsto en el subnumeral 3 del numeral 28.1 del artículo 28 del precitado Reglamento.